VI. INFORME SOBRE TRAMITACIÓN DE HÁBEAS CORPUS

1. Introducción

El presente capítulo tiene por objeto informar acerca de los actos jurisdiccionales y organizativos realizados por los Juzgados del Poder Judicial de la Nación para cursar trámite a los procedimientos de hábeas corpus correctivo, en el ámbito de actuación de los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora¹ y la justicia nacional con asiento en la Capital Federal².

El instituto del hábeas corpus correctivo, sobre el que se centrará el presente informe, se encuentra previsto en normas nacionales y diversos instrumentos internacionales, como garantía para la tutela de los derechos fundamentales. En un primer momento, nuestra Constitución Nacional de 1853 no contempló expresamente la acción de hábeas corpus; no obstante ello, la misma encontraba cabida en la fórmula genérica de su artículo 18, en tanto establece que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.

Este era el sostén constitucional del hábeas corpus hasta que la reforma operada en 1994 incorporó el instituto en su artículo 43, con el siguiente alcance: “...*Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio*”.

La Ley Nacional 23.098 data de fecha anterior a la recepción constitucional de la acción de hábeas corpus. La mencionada ley reguló en 1984 el instituto de hábeas corpus y estableció su procedencia para cuestionar toda “*limitación o amenaza actual de*

¹ Los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora tienen competencia en el partido de Ezeiza, donde se encuentra el Complejo Penitenciario Federal N°I. En dicha jurisdicción funcionan únicamente 2 juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional.

² En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen jurisdicción para entender en las denuncias de hábeas corpus los Juzgados Criminales de Instrucción y los Juzgados de Menores; según el orden de turnos al que se hará mención más adelante.

la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente”, como también la *“agravación ilegítima de la forma y condiciones en la que se cumple la privación de la libertad”* –en sí legítima.

En el plano internacional, el instituto se encuentra previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en los artículos 2.3 lit. y 9.4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los documentos internacionales mencionados fueron elevados a jerarquía constitucional en la reforma constitucional de 1994 en virtud de lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, convirtiéndose de este modo en normas de ineludible cumplimiento dentro del territorio de la República.

Ahora bien, dada la aptitud de la acción de hábeas corpus para dar cumplimiento al cometido asignado por el artículo 1° de la Ley 25.875 a este Organismo, que no es otro que tutelar los derechos humanos de toda persona privada de su libertad bajo autoridad federal, es que durante el 2010 se desarrolló en la Dirección Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación –en adelante la Procuración o la PPN–, un debate acerca de los inconvenientes que venían observándose en la tramitación de los casos de hábeas corpus. Así, se advirtió la necesidad de realizar un relevamiento de los expedientes judiciales. Para ello, se confeccionó un instrumento de registro y documentación de casos que permitiera describir de manera uniforme los patrones de conducta de las agencias judiciales en la tramitación de las acciones de hábeas corpus. En una primera instancia, el relevamiento se centró únicamente en la jurisdicción de Lomas de Zamora. Las causas analizadas fueron las que se iniciaron con motivo de acciones presentadas por esta Procuración desde el 1° de enero de 2009 hasta el 3 de agosto de 2010, fecha en la que comenzó el relevamiento.

Por su parte, a fines del mes de septiembre de 2010 agentes de esta Procuración se entrevistaron con el Sr. XXX, detenido en aquel entonces en el Complejo Penitenciario de la CABA, quien se encontraba a cargo del servicio de patrocinio jurídico que funciona en el Centro Universitario de Devoto (CUD)³, prestando asesoramiento técnico a otras personas privadas de su libertad en esa unidad carcelaria. En dicha oportunidad, el entrevistado informó cuáles eran, desde su perspectiva, las irregularidades que advertía en la tramitación de los hábeas corpus en la jurisdicción de

³ Posteriormente, el Sr. XXX y otros internos fueron trasladados intempestivamente al C.P.F. II de Marcos Paz, encontrándose alojado allí hasta el cierre de este informe.

la Capital Federal y, asimismo, cuáles son los obstáculos a los que se enfrentaban quienes se encuentran privados de su libertad, en oportunidad de promover este tipo de acciones buscando la tutela de sus derechos fundamentales.

Tras la entrevista referida, y a los fines de corroborar los datos señalados por el detenido, esta Procuración decidió comenzar un nuevo relevamiento en la jurisdicción de la Capital Federal, donde los turnos para la tramitación de acciones de hábeas corpus son de un día, siendo asignados a los Juzgados Criminales de Instrucción y los Juzgados de Menores en orden numérico correlativo. Por ello, y en el afán de obtener una muestra que resultara representativa, se relevaron todos los hábeas corpus presentados desde el 1° de agosto al 20 de septiembre de 2010, de modo que el lapso de tiempo comprendido fuera abarcativo de la totalidad de los Juzgados Criminales de Instrucción y Juzgados de Menores que entienden en la ronda de turnos. Cabe aclarar que en ese lapso de fechas, si bien los turnos fueron asignados cronológicamente y en orden numérico correlativo, se excepcionó a los Juzgados de Instrucción N°38, 39, 40, 41 y 42 y los Juzgados de Menores N°6 y 7, los cuales fueron salteados en la ronda de turno.

De este modo se relevaron cuarenta y un (41) Juzgados en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal y cinco (5) Juzgados de Menores de esa jurisdicción. Para obtener la información se utilizó el mismo instrumento de registro y documentación que había sido implementado para relevar las causas en la jurisdicción de Lomas de Zamora.

De lo expuesto surge que las fuentes de información utilizadas para la realización del presente informe fueron las voces de los presos, los datos cuantitativos que surgen del relevamiento realizado en la jurisdicción de Lomas de Zamora y de Capital Federal y, una vez finalizado éste, se cotejaron las evidencias de las causas judiciales promovidas por esta Procuración Penitenciaria.

Paralelamente, se realizaron entrevistas con varios detenidos de distintos complejos del área metropolitana para que nos contaran cuál fue su experiencia ante los tribunales, en oportunidad de interponer acciones de hábeas corpus. Puede adelantarse en este punto que los testimonios de los entrevistados mostraban prácticas de las agencias judiciales que resultan claramente irregulares.

Para relevar la información, tanto de los Juzgados Federales de Lomas de Zamora, como de los Juzgados Nacionales de la Capital Federal, se presentaron escritos solicitando el desarchivo de las causas y la autorización para tomar vista y, de ser necesario, extraer copias. Este escrito debe ser proveído por el Juez, quien autoriza lo

solicitado.

En relación al tiempo que demora dicho proveído, en la jurisdicción de Lomas de Zamora fue bastante extenso, no pudiéndose durante dicho lapso acceder a las causas. En tal sentido, hubo que concurrir en varias oportunidades, dificultando y demorando la tarea de relevamiento.

En cambio, en la Capital Federal pudo accederse a las causas en el término de aproximadamente una semana. Sin embargo, hubo una excepción, que fue la del Juzgado Criminal de Instrucción N°27, que además de demorar el proveído del escrito un tiempo que excede lo razonable, dictó resolución denegando la posibilidad de acceder al expediente infundadamente. De esta manera, se vio entorpecida la labor de este organismo.

Del análisis de los datos cuantitativos obtenidos durante el relevamiento de casos, surgieron prácticas que se presentan con habitualidad y sistemáticamente y que resultaban desconocedoras de la normativa que regula el procedimiento de hábeas corpus, al que ya se ha hecho mención.

Fue este proceder de las agencias judiciales el que motivó la intervención de este Organismo oficial, aumentando el volumen de litigios en los que nos constituimos como parte, señalando en nuestras presentaciones de hábeas corpus las malas prácticas que habían sido detectadas por este organismo, realizando un seguimiento del estricto cumplimiento del procedimiento reglado para la tramitación de las acciones e, incluso, cuestionando en instancias superiores las resoluciones judiciales que desconocían dicho procedimiento. Como resultado de ello se consiguieron resoluciones de gran relevancia en tribunales superiores, que serán objeto de un análisis en particular, y que se constituyen como valiosos precedentes jurisprudenciales que han tenido impacto en la realidad.

En virtud de lo expuesto, tras la intervención de esta Procuración ante los tribunales de instancias superiores, y con los consecuentes pronunciamientos judiciales favorables, se comenzaron a identificar en algunos procesos de hábeas corpus cambios positivos en el proceder de las agencias judiciales.

Debe señalarse en este punto que muchas de las prácticas a las que se hará mención habían ya sido individualizadas por este Organismos en años anteriores, por lo que no se trata de problemáticas nuevas.

En este sentido, en el *Informe Anual 2007* este Organismo señaló que se había comprobado que muchos jueces adoptaban ante los hábeas corpus correctivos una

actitud que implicaba la desnaturalización del instituto. Asimismo, se señaló que las denuncias de ese tipo a menudo eran analizadas con la exclusiva intención de encontrar vías para su desestimación *in limine* u obtener el “desistimiento” del afectado y que en algunos casos, se ofrecía directamente a la persona cuyos derechos constitucionales se veían afectados una negociación: “...*se le indica que si ‘desiste’ del hábeas corpus, se le otorgará una solución por otra vía*”. Asimismo, se dijo que se había tomado conocimiento de casos en que se negó al detenido asistencia letrada, en que se lo escucha esposado y bajo la custodia de agentes del S.P.F.

En similar dirección, en el *Informe Anual 2008* se cuestionó una resolución dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°44 en un proceso de hábeas corpus promovido por la Procuración con motivo de las pésimas condiciones de habitabilidad y de sobrepoblación en que se encontraban varios pabellones del C.P.F. de la CABA. En esas actuaciones el juez interviniente había resuelto rechazar la acción de hábeas corpus –no obstante haberse probado los hechos denunciados como lesivos– limitándose a incluir en el decisorio una serie de “recomendaciones” al Director del C.P.F. de la CABA en el sentido de que arbitrarse los medios necesarios para garantizar que los internos “gocen de condiciones de habitabilidad, higiene y salud acorde con los estándares mínimos”. En aquella oportunidad, en el Informe Anual se señaló que “...*los términos de esa decisión implicaban una desnaturalización de la acción de hábeas corpus, puesto que constatadas las pésimas condiciones de detención que constituían un agravamiento ilegítimo de la privación de la libertad, lo que correspondía era hacer lugar a la acción de hábeas corpus, ordenar al S.P.F. el cese del probado agravamiento de las condiciones de detención –estableciendo en su caso plazos temporales para la refacción de los pabellones– y arbitrar medidas de control judicial de lo ordenado*”.

Sobre las prácticas relevadas y algunos casos judiciales que merecen un análisis particularizado versa este informe. Que también intenta reflexionar acerca de las razones de aquellas prácticas y de los cambios que éstas parecen haber empezado a experimentar durante 2010.

Debe aclararse, sin embargo, que a lo largo de 2011 esta Procuración –en alianza con otras instituciones interesadas en la materia– llevará adelante un proceso de recolección de datos adicional, con el objetivo de corroborar la subsistencia de las prácticas y criterios jurisprudenciales señalados en este informe durante el primer semestre de 2011.

2. La voz de los presos

Con el objeto de convalidar los datos arrojados en el relevamiento de causas judiciales –a los que se hará alusión en el próximo apartado– se realizaron a partir del mes de diciembre de 2010 una serie de entrevistas a varias personas privadas de su libertad en complejos del área metropolitana para que nos cuenten sobre su experiencia ante los tribunales, en oportunidad de interponer acciones de hábeas corpus.

Puede adelantarse en este punto que los testimonios han sido coincidentes al señalar de forma unánime ciertas conductas de las agencias judiciales que resultan claramente irregulares.

Por último, cabe dejar asentado que las entrevistas fueron realizadas a aquellas personas con un nivel de instrucción superior al del resto de la población carcelaria, quienes suelen redactar por sí mismos las acciones de hábeas corpus. Asimismo, se trata de personas sobre las cuales recayeron extensas sentencias.

Entrevista N°1 realizada a un interno alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°I de Ezeiza

Agentes de esta Procuración Penitenciaria se entrevistaron con una persona alojada en el Complejo Penitenciario Federal I de la localidad de Ezeiza, quien en varias oportunidades y por diversas problemáticas se vio obligado a presentar acciones de hábeas corpus ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. En dicha ocasión fue preguntado por su experiencia ante los juzgados en el marco de la tramitación de acciones de hábeas corpus.

Así, el entrevistado manifestó que las presentaciones han disminuido drásticamente desde el año 2009, ya que los agentes del Servicio Penitenciario Federal los han golpeado para amedrentarlos y evitar que hagan presentaciones.

Habiéndose consultado al interno si tras alguna presentación desistió de la acción de hábeas corpus intentada, el mismo nos informó que en alguna oportunidad el Juzgado le otorgó lo que solicitaba, motivo por el cual desistió de la acción.

Asimismo señaló que en otra oportunidad desistió de la acción, ante el temor de ser víctima de represalias, dado que el Juez no tomó las medidas necesarias para resguardar su integridad física.

Por su parte, comentó que en otras oportunidades, al tomarle la audiencia el Juzgado para que se ratificara o desistiera de la acción, quien la presidía (que no era el juez) “*me informó que no se trataba de un agravamiento de las condiciones de detención, por lo cual no sería materia de hábeas corpus*”; esto, para persuadirlo y lograr que desistiera de la acción.

Según surge de los dichos del interno, en varias ocasiones, al tomársele la audiencia en el Juzgado, “*tenían ya preparada en la computadora el acta de audiencia con el desistimiento*” antes de desistir. Asimismo, al momento de ser preguntado si ratificaba la presentación, se intentaba persuadirlo de que el caso no era motivo de hábeas corpus, y se lo impulsaba (directa o indirectamente) a desistir.

Por otro lado, según informó el interno, el Servicio Penitenciario Federal siempre asiste a la audiencia con la representación de un abogado. En cambio, en su caso, debe “*solicitar expresamente la asistencia letrada cuando quiero proseguir con el hábeas*”, ya que el Juzgado nunca le ofrece o informa que puede llamar a su Defensor.

En términos generales, al momento de querer interponer un hábeas corpus en el Complejo, los agentes del S.P.F. intentan disuadirlo de presentarlo y con posterioridad a la presentación, lo “*visita el jefe del área con el cual tengo el conflicto que motiva la interposición de la acción*”.

Relató que en una ocasión, “*tras intentar presentar un hábeas corpus, me vino a ver directamente el Director del Complejo –el Sr. Paredes Sánchez– para convencerme de desistir de la presentación*”. En este caso, desistió en el Complejo mismo, sin haberse realizado la audiencia.

Con relación a la notificación de la sentencia siempre se realiza al finalizar la audiencia, pero no le entregan copia de la misma si él no la solicita expresamente.

Asimismo, según relató, cuando presentó algún hábeas corpus por haber sido víctima de golpes, sólo fue revisado por el médico del S.P.F., quien informó que no presentaba heridas, y el Juzgado utilizó eso como prueba válida. En igual dirección, opinó que “*los Juzgados no cumplen con sus deberes, ya que nunca constatan personalmente los hechos denunciados en el hábeas corpus*”. Al respecto, no prosperaron las acciones interpuestas por la mala alimentación del Complejo, ya que el Juez sólo utilizó como prueba los documentos e informes presentados por el S.P.F.

Entrevista N°2 a una interna alojada en el Instituto Correccional de Mujeres de Ezeiza, Unidad N°3

Agentes de la Procuración Penitenciaria de la Nación se entrevistaron con una persona alojada en la Unidad 3 de Ezeiza, quien presentó una acción de hábeas corpus y tiene conocimiento de varias acciones presentadas por sus compañeras.

Al respecto, nos informó que *“los hábeas corpus no son sacados de la Unidad, y en la mayoría de los casos, la finalidad perseguida es ser escuchadas o recibidas por las autoridades de la cárcel, y no interponer la acción ante un Juzgado”*.

“Las chicas saben que siempre, al interponerse un hábeas corpus, el mismo llega a manos del Jefe del área motivo del conflicto, quien automáticamente se entrevista con ella a fin de negociar y lograr que desista de presentar el escrito”.

Pero cuando se trata de hábeas corpus cuya finalidad real es ser interpuesto en el Juzgado de turno, los mismos *“nunca salen a los Juzgados”*. Asimismo, las internas que no saben leer ni escribir no reciben asistencia, ni tienen quien las ayude a redactarlos.

Nos contó que la estrategia que realizan las internas para sortear la obstaculización del Servicio Penitenciario es presentar una copia del hábeas corpus al personal del Servicio Penitenciario, y “conservar” la tinta en el dedo pulgar, para poder firmar con su huella dactilar otra copia que le entregan a algún familiar, y así lograr que el hábeas corpus pueda ser presentado ante el Juzgado. De cualquier manera, nos informa que *“en la mayoría de los casos los escritos son rechazados en la Mesa de Entradas del Juzgado, sin llegar al Juez”*.

En este sentido, otro obstáculo que encuentran a la hora de presentar los hábeas corpus, es que el Juzgado no los acepta si la firma no está certificada por el Servicio Penitenciario. A raíz de ello, el Centro Universitario empezó a agregar a los escritos un “otrosí digo” en el que explican el motivo por el cual los hábeas corpus son presentados por familiares, sin la firma certificada por el S.P.F.

Asimismo, y con el justificativo de *“lograr que los Defensores Oficiales ejerzan su función, algunos Juzgados no reciben escritos firmados ‘por derecho propio’ y exigen la firma del Defensor”*. La consecuencia de esto es que todos los escritos salgan como hábeas corpus.

Respecto al hábeas corpus por ella presentado, nos cuenta que como sabía que iban a impedirle entrevistarse con la PPN, le entregó el escrito a una compañera y así logró que la Procuración pudiera presentarlo.

Interpuso el hábeas corpus porque el Servicio Penitenciario quería sancionar a su visita e iniciarle una causa interna a ella. Al día siguiente la llevaron a declarar a la Fiscalía, donde la maltrataron. No tenía Defensor Oficial, y tampoco le informaron que

podiera pedirlo. En la Fiscalía le decían que su presentación no era materia de hábeas corpus, sino que se trataba de una denuncia. Sólo le tomaron la declaración y no se resolvió nada en el momento.

A los dos días la volvieron a llevar, pero esta vez fue acompañada por un Defensor Oficial y por la Procuración Penitenciaria. Se rechazó la acción como hábeas corpus, ya que se consideró que al no habérsela sancionado no se agravaba su detención. La acción fue convertida en denuncia. La sentencia no le fue notificada, se enteró por intermedio de la PPN. El Juez nunca se apersonó a la audiencia, y a la Defensora la conoció en ese mismo momento, sin poder tener ninguna entrevista previa.

En otro orden, nos informó que los hábeas corpus más frecuentes son por razones de salud, y que cuando obtienen una sentencia favorable, la misma no se cumple, y los Juzgados tampoco fiscalizan su cumplimiento.

Asimismo, se presentan hábeas corpus contra el “Área Judiciales”⁴ del Servicio Penitenciario, pero al tener que ser presentados en esa misma área, nunca se les da curso.

Finalmente, la consultada hizo hincapié sobre *“el verdugueo del que somos víctimas cuando nos trasladan a los juzgados para las audiencias de hábeas corpus”*, y reiteró que los hábeas corpus casi nunca llegan a los Juzgados.

Entrevista N°3 a un interno alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°I de Ezeiza

Agentes de esta PPN se entrevistaron con una persona alojada en el C.P.F. I, de Ezeiza. Respecto a su visión sobre los procedimientos de hábeas corpus, nos manifestó que en una oportunidad la elevación de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de la Plata demoró casi un mes, con el argumento de que faltaba constituir domicilio en la ciudad de La Plata.

Asimismo, informó que *“la mayoría de las acciones de hábeas corpus son rechazadas, e incluso desde el año 2004 el rechazo es con imposición de costas”*.

Por su parte, manifiesta que en alguna oportunidad en la que se hizo lugar a una acción de hábeas corpus, el Servicio Penitenciario Federal no cumplió con las sentencias, y que los jueces no se ocupan de fiscalizar el efectivo cumplimiento de las

⁴ Cada Complejo Penitenciario posee un “Área Judiciales”, que es donde los internos deben presentar las acciones de hábeas corpus y/o cualquier otro escrito que deseen remitir a los juzgados.

mismas. También hizo referencia a la negociación y/o intimación por parte de agentes del S.P.F. para que quienes presentan una acción de hábeas corpus desistan de su presentación. Agrega que *“a la hora de negociar, nunca me ofrecen la reparación total de lo que reclamo, sino sólo una parte. Por lo general, envían a un agente de segundo rango a negociar, como suboficiales”*; según nos cuenta, *“nunca va alguien importante”*.

Por su parte, ya ante el Juzgado donde tramitó una acción por él interpuesta y en el marco de una audiencia de hábeas corpus, *“el secretario me adelantó el modo en que se resolvería la acción antes de abrir la audiencia, alegando que rechazarían mi presentación”*.

Asimismo, el entrevistado hizo alusión a otros inconvenientes que padecen quienes se encuentran privados de su libertad al momento de intentar interponer una acción de hábeas corpus. En este sentido, refirió que *“quien intenta hacer la presentación judicial es golpeado por personal del servicio o lo llevan sancionado al módulo 6 alegando que le faltaron el respeto al personal del S.P.F.”*, y en el caso de que sean sancionados *“los atienden”* –haciendo referencia a golpes y malos tratos– dos veces por día mientras dure la sanción. En el mejor de los casos, se intenta hacerlo desistir de interponer la acción ofreciéndole a cambio una solución pacífica, que siempre es parcial. Es de esta forma que personal del S.P.F. disuade a los internos de interponer este tipo de presentaciones.

Respecto a la notificación de la sentencia que resuelve la acción, manifiesta que para solicitar copia de la misma lo debe hacer por escrito, y que si nada dicen sólo se los notifica de lo resuelto verbalmente y que sin copia de la resolución les resulta muy difícil apelarla. Lo máximo que ha podido conseguir, según nos cuenta, es una copia simple de la sentencia, sin firma del Juez interviniente. Incluso, en alguna oportunidad le negaron la copia de la resolución de la acción, pese a solicitarla expresamente; en cambio, le prestaron el expediente 5 minutos y se lo retiraron. Debió memorizar parte del resolutorio para poder apelarla. En cambio, cuando llegó a Cámara, sí le dieron una copia de la resolución de la Alzada.

Según nos cuenta, hace tiempo los juzgados de primera instancia que atendían las acciones de hábeas corpus solían declararse incompetentes y con ello demorar el trámite de la acción. Luego, dejaron de hacerlo. Asimismo, sus resolutorios solían ser infundados, pero ello también se vio modificado.

Relata que en una ocasión, cuando estaba compartiendo el camión de traslados

con otro interno que había comparecido ante el tribunal en virtud de una acción de hábeas corpus presentada por golpes sufridos en el Complejo Penitenciario donde estaba alojado, el interno le contó que personal del juzgado le había dicho que lo que él tenía que hacer era una denuncia penal y no una acción de hábeas corpus. Según relata el entrevistado, el señor estaba muy nervioso y no quería volver al Complejo donde lo habían golpeado; de así suceder, creía que iba a autolesionarse, produciéndose cortes. Ante tal situación, el entrevistado le dijo a su compañero que no debería haber desistido de la acción, dado que con la denuncia penal no solucionaría su situación. Al reparar en que desistida la acción volvería al complejo en donde había sido golpeado y que nada se resolvería sobre *su situación* con la mera denuncia penal, *“el interno empezó a gritar hasta que la prosecretaria de la Secretaría 2 del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora salió a la calle, y tras la insistencia y desesperación del interno logró que lo vuelvan a bajar del camión a la sede del juzgado”*.

Cuenta que en el último de los hábeas corpus presentados se notificó a la Defensoría de la sentencia, pero a la fecha él no había sido notificado.

En relación a una acción de hábeas corpus que había tenido acogida ante los juzgados de primera instancia en el año 2008, se ordenó reparar el sistema de calefacción de un módulo del C.P.F N°I. En dicha oportunidad, un subprefecto del complejo confeccionó un acta falsa donde decía que se habían realizado las tareas de mantenimiento, pese a que el sistema de calefacción no había sido reparado. El acta estaba firmada, pero carecía de sello. El juez nunca mandó a controlar su efectivo cumplimiento y, teniendo por cumplida la sentencia con dicho informe, se mandó a archivar la causa judicial.

Finalmente, agrega el detenido que considera que *“los jueces de primera instancia deberían ser destituidos de sus cargos, y ser alojados durante un tiempo en los Complejos Penitenciarios, para que vivan en las condiciones que ellos consideran dignas en sus resoluciones judiciales”*.

Entrevista N°4 a un interno alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°I de Ezeiza

Agentes de esta PPN se entrevistaron con una persona alojada en el C.P.F. I de Ezeiza. Durante la entrevista, nos contó que en el módulo 2 del mencionado complejo por lo general tiran los hábeas corpus a la basura y que en otros módulos es peor aún, ya que quien intente interponer una acción de hábeas corpus resulta golpeado. Por otra

parte, que se tramiten o no los hábeas corpus depende, según nos cuenta, de quién sea el que realice la presentación, *“dime quién eres, y te diré si lo tramito”*.

Por lo general, según dice, *“no salen los hábeas corpus presentados, se lo das al jefe de turno y ahí te atiende el jefe del módulo y te pregunta por qué presentás la acción y se negocia lo que pedís; por ejemplo, en un hábeas corpus presentado por falta de asistencia médica, te van a hacer bajar un médico, pero después siempre hay represalias”*.

En una oportunidad, y para que desista de la presentación de un hábeas corpus, le ofrecieron los beneficios de una beca, y él además pidió que le dieran más visitas íntimas con su esposa y más visitas extraordinarias con los hijos. En su caso, el “arreglo” fue respetado, pero cuenta que con el resto de los internos no ocurre lo mismo. Por lo general, les otorgan el beneficio y después se lo quitan e incluso, tiempo después, lo castigan mandándoles la requisa o les arman *“causas voladoras”*. Esto en su caso no ocurre, según dice él, *“porque sé hablar y escribir”*.

Manifiesta que en los Juzgados también tratan de convencerlo de no presentar el hábeas corpus. Mayormente ese rol lo ejerce el secretario en la audiencia.

Cuando lo llevan a los Juzgados de Lomas de Zamora, en la audiencia de hábeas corpus se tiene que defender solo, y aunque solicite patrocinio letrado, no se lo asignan. Suelen contestarle que ya llamaron al Defensor o que éste está en camino, pero luego de un rato le dicen que el abogado tuvo algún problema, que no puede comparecer y que necesitan continuar con la audiencia, por lo que no pueden seguir esperando al letrado.

Respecto a la sentencia, se la notifican en el momento, pero tiene que solicitar la copia, porque si no, no se la dan.

En el año 2006 le hicieron lugar a una acción de hábeas corpus aunque no se cumplió con lo ordenado en la sentencia. Consecuencia de su presentación, le dijeron a su esposa que debía tener relaciones sexuales con el Jefe de Módulo para que no le hicieran nada a él. Tuvo que pedirle a su esposa que deje de visitarlo durante un tiempo.

Ya en la audiencia ante el juzgado, le sucedió que al finalizar la misma leyeron el acta de la audiencia y decía que desistía de la acción de hábeas corpus aunque él no lo había hecho. Al preguntar a quien presidía la audiencia por qué figuraba el desistimiento si él no lo había manifestado, le dijeron que no se preocupara, que en el penal se lo iban a solucionar. Al preguntarle si insistió para que no se tenga por desistida la acción, nos dijo que no podía hacer nada y que no les queda opción, por lo cual tuvo que aceptar el desistimiento.

Finalmente, nos cuenta que *“una vez que se le dio trámite a la acción de hábeas corpus, en muchos casos, en la resolución mandan a solucionar el problema, aunque no hacen lugar a la acción de hábeas corpus”*.

3. Relevamiento de casos

Tal como fuera adelantado en la introducción al presente trabajo, dada la aptitud de la acción de hábeas corpus para la consecución de los objetivos asignados por ley a esta Procuración Penitenciaria, la Dirección Legal y Contencioso comenzó durante agosto de 2010 un relevamiento de causas judiciales que se centró en un primer momento en la jurisdicción de Lomas de Zamora y que luego se extendió a la jurisdicción de la Capital Federal.

Debe adelantarse en este punto que dicho relevamiento arrojó como resultado la identificación de ciertas prácticas que deben ser tachadas de irregulares. Así, surgieron modos inadecuados en el proceder de las agencias judiciales que se presentan como prácticas habituales o sistemáticas, y que resultan desconocedoras del procedimiento de hábeas corpus instituido legalmente. A estas prácticas identificadas en las jurisdicciones relevadas haremos referencia a continuación.

3.1. Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora

Procedencia y alcance de la acción de hábeas corpus

La acción de hábeas corpus en un primer momento se encontraba implícitamente prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional de 1853. No obstante la regulación legislativa del instituto no llegó hasta el año 1984– cuando se sancionó la ley 23.098–, resulta de aplicación la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes jurisprudenciales, en el sentido de entender que *“siempre que aparezca, en su consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido”*⁵ (el subrayado me pertenece).

⁵ CSJN, Fallos, 241:296.

Con posterioridad, fue promulgada la Ley 23.098, y luego se lo incorporó expresamente en la reforma constitucional de 1994, como garantía para la tutela de los derechos fundamentales de las personas que estando privadas de su libertad veían afectados no sólo su libertad personal y ambulatoria, sino varios otros derechos, como la dignidad y la integridad física y psíquica, cuya vulneración deriva del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.

En el ámbito nacional e internacional, se ha reconocido jurisprudencialmente un amplio campo de acción a este Instituto, constituyéndose así en una importantísima herramienta para hacer frente a la omisión por parte del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de privación de la libertad, y otorgando tutela a los derechos vulnerados por dichas omisiones. No obstante ello, algunos pronunciamientos judiciales se muestran contrarios a tal entendimiento.

En particular, este Organismo ha visto ciertas resoluciones de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que entienden que el hábeas corpus no se presenta como la vía idónea para dar efectiva tutela a las personas privadas de su libertad que eran objeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por entender que no se veían agravadas sus condiciones de detención. Así, afirmaban en sus resolutorios que circunstancias de hecho como las referidas no constituyen materia de hábeas corpus, no obstante encontrarse en peligro su vida e integridad psíquica y física.

En esta dirección, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, Secretaría 3, en la acción de hábeas corpus intentada por esta Procuración en el Expte. N°6958/2010, entendió que los hechos de violencia sufridos por el allí amparado –que no fueron aislados sino que se enmarcaron en una situación de habitual violencia– y que motivaron la interposición de la acción, debían ser tratados como delitos de acción pública, no siendo aplicable el instituto de hábeas corpus previsto por Ley 23.098. Este caso merecerá un análisis puntual en el apartado siguiente.

En el mismo sentido se expidió el Juzgado Federal N°1, Secretaría 2, de la misma jurisdicción, en el marco de la causa N°6957/2010, cuando tuvo que entender en la acción de hábeas corpus interpuesta por la PPN en favor de un interno alojado en el C.P.F. N°I a raíz de hechos de violencia de los que había sido víctima y, a su vez, por haber sido vejado, en tanto le habrían introducido un objeto en la zona anal. El Juez Federal que entendió en la causa, en oportunidad de resolver la acción entendió que los

hechos de violencia y abuso allí descriptos debían ser tratados como delitos de acción pública, no resultando aplicable el instituto de hábeas corpus y no constituyendo ello un agravamiento de las condiciones de detención.

En este punto, resulta ciertamente cuestionable el cauce único bajo el que tramitan hechos como los aquí referidos a raíz de interpretaciones como las que propició el Sr. Juez Federal que entendió en la causa. Así, situaciones de brutal violencia no son articuladas bajo la figura procesal de hábeas corpus, tan siquiera cuando las circunstancias de hecho evidencian que la falta de medidas tendientes a restablecer la vigencia de los derechos de quienes reclaman su amparo pone en peligro cierto la integridad física y psíquica de los presentantes, a la vez que ocasionan una situación que agrava las condiciones de detención de las personas que encontrándose privadas de su libertad piden por la protección de sus derechos más fundamentales.

Contra esa interpretación, puede señalarse que entre los fundamentos dados por el autor intelectual de la ley de hábeas corpus –senador Fernando De la Rúa– se afirmaba “[...] *se enfatiza que el alcance de la garantía comprenda no sólo los casos, de efectiva privación ilegítima de la libertad sino también la amenaza de sufrirla. Y además de estos casos, que ya estaban reconocidos por las leyes y la jurisprudencia, comprende aquellos otros en que siendo legítima la privación de libertad es ilegítima la forma en que se cumple, y la persona sometida a prisión sufre un agravamiento arbitrario de ella. El hábeas corpus servirá para evitar, en los casos concretos, cualquier forma de vejamen o tortura que vulnere la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional*”. Asimismo, se agrega que “*La reglamentación aquí disciplinada es, sin embargo, lo suficientemente amplia para corregir todo abuso de poder que ataque la libertad ambulatoria y los excesos en su ejecución*” (el resaltado nos pertenece).

Luego, no puede desconocerse que la tortura y los malos tratos en prisión agravan ilegítimamente las condiciones de detención de aquellos que se encuentran privados de su libertad. Esa fue la intención del legislador, y así lo sostiene firmemente esta Procuración Penitenciaria, que entiende que la tortura y los malos tratos instituidos en prisión como mecanismos ilegítimos de control por parte de agentes del Servicio Penitenciario constituyen hechos *sumamente agravantes* de las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad.

Así, el uso de la violencia en las cárceles a la vez que agrava las condiciones de detención de los internos que se ven sometidos a estas prácticas, afecta derechos cuya

raigambre es constitucional, como la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas.

No cabe duda de que quienes se lanzan en castigo contra los cuerpos de quienes se hallan privados de su libertad, en forma ilegítima y sistemática, son funcionarios cuyo desempeño es irregular, ilegal, arbitrario y descalificable, y que merecen ser objeto de investigaciones tendientes a averiguar la posible comisión de delitos de acción pública. Pero ello en modo alguno obsta o imposibilita la procedencia de la acción de hábeas corpus en aras de garantizar la eficaz tutela del derecho que se encuentre vulnerado, tomando las medidas necesarias para que cese la acción u omisión lesiva.

Se deduce de resolutorios como los mencionados que los magistrados que han entendido en las causas de hábeas corpus no han podido advertir las dimensiones diferentes que deberían asignarse a los procesos involucrados. La dimensión por la que tramita el hábeas corpus ocurre en un plano distinto y nunca se superpone con el juzgamiento de los delitos que pudieran haberse cometido. Así, las características que adquirió el proceso sólo se ocupan de una de esas dimensiones, que es la de investigar los posibles delitos de acción pública cometidos en el marco de los hechos analizados⁶. Por su parte, nada se resuelve con relación a la finalidad propia de la acción interpuesta, que no es otra que la cesación inmediata del acto lesivo.

Por último, y en relación al particular criterio con el que los Juzgados Federales de Lomas de Zamora entienden el alcance de los artículos 3° y 4° de la Ley 23.098, debe señalarse que de las catorce (14) causas iniciadas por esta Procuración Penitenciaria en el lapso que va de enero de 2009 a agosto de 2010, en sólo dos de ellas se hizo lugar a la acción de hábeas corpus, y sólo parcialmente. En uno de dichos supuestos, la acción había sido entablada con motivo de la falta de asistencia médica suministrada a un interno; en el segundo supuesto, el motivo de interposición de la acción también fue la falta de asistencia médica y las pésimas condiciones de la celda en que habitaba. No obstante ello, no puede afirmarse que la materia relativa a la falta de asistencia médica a personas privadas de su libertad sea entendida de modo uniforme por los juzgados federales de Lomas de Zamora como problemática atendible por la vía de la acción de hábeas corpus. Así, en el marco de la causa N°6998 del registro de la Secretaría 1 del

⁶ En este punto debe advertirse la dificultad que representa la investigación de casos de torturas y malos tratos. Ello, debido a la continua política de ocultamiento y negación de los hechos de violencia por parte del S.P.F. y que fuera denunciada en los últimos dos informes anuales de la PPN. El Procedimiento de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y Malos Tratos muestra que en el año 2008 se relevaron 111 casos de malos tratos, en el año 2009 crecieron a 196 y en el año 2010 fueron relevados 195 casos de malos tratos (ver apartado 3° del Capítulo de Tortura de este mismo Informe Anual).

Juzgado Federal N°1, se rechazó el hábeas corpus interpuesto por un interno alojado en el C.P.F. N°I en el que se solicitaba la realización de estudios, en virtud de prescripciones médicas. En dicha oportunidad, y *no obstante rechazarse la acción, se exhortó al Director del Complejo a cumplir la realización del estudio médico prescripto.*

Esta decisión de rechazar las acciones de hábeas corpus y, no obstante ello, en la parte resolutive de la sentencia *exhortar o requerir* a la autoridad que corresponda a fin de dar solución a la misma problemática que motivó la interposición de la acción, se ha identificado en otras resoluciones judiciales⁷ prácticamente sin distinción de jurisdicciones.

Los motivos para que los tribunales procedan de ese modo en casos en los cuales las violaciones a los derechos resultan innegables acaso deban rastrearse en la mismísima “actitud” o la “perspectiva” que en general anima a los operadores judiciales en el tratamiento de este tipo de acciones sumarísimas (cuestión sobre la que volveremos en las conclusiones).

Pero, más allá de las motivaciones profundas de ese proceder, resulta indudable cuáles son sus consecuencias. Por un lado, los agentes que perpetran acciones violatorias contra los derechos de los detenidos pueden computar estos rechazos como una corroboración de su estado de impunidad, que exhiben ante los presos como un recurso de poder. Por otro, este proceder priva al amparado de la posibilidad de *exigir* el cumplimiento de las medidas requeridas por la autoridad judicial. A la vez, al cesar toda responsabilidad del Juzgado luego del dictado de la sentencia, el amparado queda a merced de posibles represalias; ante las cuales deberá –en el mejor de los casos– defenderse mediante una nueva denuncia o acción.

Falta de celebración de la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098. Incomparecencia del Defensor Oficial

Del relevamiento realizado en la jurisdicción de Lomas de Zamora surge que durante el período sujeto a análisis, de las 11 (once) causas de hábeas corpus a las que se cursó trámite –es decir, que no fueron rechazadas in limine– sólo en 6 (seis) se celebró la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098.

En la causa N°6956, que tramitó ante el Juzgado Federal N°1, Secretaría 2, de

⁷ Por ejemplo, en la Causa N°9696 del registro de la Secretaría 1 del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora.

Lomas de Zamora, en el resolutorio que rechazó la acción interpuesta con motivo de la falta de provisión médica y malas condiciones de la celda, y luego de haber comparecido el amparado a fin de ratificar la acción, se expresó que por “...razones de economía procesal, prescindiré de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley 23.098, siendo suficiente lo actuado por la Dirección Nacional del S.P.F.”⁸.

Asimismo, y en oportunidad de ser elevadas las actuaciones N°5966 a la Alzada, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por esta Procuración en una acción de hábeas corpus donde se solicitaba la cesación de malos tratos propinados a detenidos del C.P.F. I de Ezeiza, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata decidió suplir la omisión del juez de primera instancia de celebrar la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098, y ordenó realizarla ante su tribunal. Acto seguido, procedió a emplazar a todas las partes interesadas para que comparezcan, tal como debieran hacerlo los Juzgados Federales de primera instancia de Lomas de Zamora en virtud del imperativo de los artículos 13, 14, 20 último párrafo y 22 de la Ley 23.098.

La posibilidad de que las irregularidades u omisiones del Juez de primera instancia sean suplidas por la Alzada, tal como sucedió en la causa referida en el párrafo anterior, son mínimas. Ello, en tanto se identificó –como se verá más adelante– como práctica sistemática la falta de elevación de las actuaciones en consulta a la Cámara de Apelaciones cuando la acción de hábeas corpus es rechazada.

También se ha constatado con habitualidad la incomparecencia del Defensor Oficial a la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley de hábeas corpus. Es ínfimo el número de causas relevadas en las que el Defensor comparece a la audiencia referida, prestando debida asistencia técnica al amparado. En la mayoría de las causas no se notifica a la Defensoría de la interposición de la acción de hábeas corpus.

Del relevamiento realizado surge que de las 6 (seis) causas en las que se celebró la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098, en sólo 2 (dos) compareció el Defensor Oficial, Por su parte, hay 5 (cinco) casos donde sólo compareció la autoridad requerida. En este punto, no puede dejar de advertirse que los datos arrojados por la “muestra”, indican que en audiencias donde el presentante no es asistido por un letrado, la autoridad requerida asiste acompañada de un abogado. Ello genera una clara desigualdad entre el amparado y la autoridad requerida.

⁸ Cuando el sentenciante se refiere a lo actuado por la Dirección Nacional del S.P.F., está haciendo referencia a la realización de un inventario que se había ordenado hacer al personal penitenciario, a los fines de corroborar el estado de la celda.

En el marco de la causa N°5799 del registro de la Secretaría 5 del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora surge del acta de la audiencia del artículo 14 de la ley 23.098, que: “...a los fines de llevar a cabo la audiencia prevista en los artículos 13 y 14 de la ley 23.098, comparecen ante S. S. y secretaria autorizante, el interno XXXXXXXX **–quien no necesita asistencia letrada–**, el representante del Servicio Penitenciario Federal –el Alcaide Mayor Héctor Horacio Retamoso– a cargo de la dirección del Módulo de ingreso, selección y tránsito y anexo del módulo 6– y **la Dra. Claudia Débora Tedone –T° 107, F° 732, C.F.A.S.M.–**” (el resaltado nos pertenece). Surge del párrafo transcrito que la autoridad requerida fue asistida por personal letrado y no así el amparado, sin dar más fundamento para ello que afirmar la mera “falta de necesidad de ser asistido”, razón por la cual no se notificó a la Defensoría.

Tal como se adelantó, la situación descripta encuentra vinculación con la falta de notificación de la presentación de la acción de hábeas corpus al Defensor Oficial. Así, surge de los datos obtenidos que se constituye en práctica reiterada en la jurisdicción de Lomas de Zamora la falta de notificación de la presentación de la acción de hábeas corpus a favor de quienes en virtud de la ley son parte interviniente –o deberían serlo– en el proceso de hábeas corpus. Así, del total de 12 (doce) causas, a 11 (once) se le cursó trámite –esto es, que no fueron rechazadas in limine–, sólo en 2 (dos) se notificó al Defensor Oficial, en las 9 (nueve) causas restantes el Defensor no fue notificado y resta 1 (uno) causa que fue rechazada *in limine*. La omisión referida explica la incomparecencia del Defensor Oficial a la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098, quien no se anoticia de la presentación realizada.

Ahora bien, la Ley 23.098 prevé en sus artículos 13 y 22 la *necesaria* asistencia técnica del amparado, cuando éste carezca del conocimiento jurídico necesario. Consideramos que debe entenderse que este supuesto de obligatoriedad de asistencia letrada se da en aquellos casos en que el amparado no sea abogado, y sin lugar a dudas, cuando no sabe leer ni escribir. La única situación excepcional en la que debiera aceptarse la falta de Defensor sería sólo si el amparado manifiesta expresamente no querer asistencia letrada.

En virtud de lo expuesto, este Organismo señala con preocupación la falta de notificación al Defensor Oficial, y por ende su ausencia en la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098, en supuestos donde el amparado no sabe leer ni escribir. Ello, no obstante incluso haberse solicitado en el mismo escrito que iniciaba la acción de hábeas corpus, la necesaria intervención del Defensor Oficial por la condición

analfabeta del amparado.

Esta situación se constató en la causa N°1487, del registro del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, en la que esta Procuración interpuso acción de hábeas corpus a favor de un interno alojado en el C.P.F. N°I que no sabía leer ni escribir, con motivo de los golpes que recibió en la cabeza, el pecho y el abdomen, por parte de personal penitenciario. En ocasión de celebrarse la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098 (en ausencia del Defensor Oficial, a quien no se notificó, no obstante haberse solicitado por escrito la necesaria asistencia letrada del interno por su condición analfabeta), el amparado realizó un relato exhaustivo de las severas agresiones físicas que motivaron la acción de hábeas corpus, para luego –de forma inconsecuente– desistir de la misma.

En oportunidad de entrevistarse personal de este Organismo con el detenido, en el C.P.F. N°I donde se encontraba alojado, y al ser preguntado sobre la audiencia referida, el mismo negó haber desistido de la acción de hábeas corpus.

Elevación a Cámara en consulta (artículo 10 de la Ley 23.098)

El art. 10 de la ley 23.098 establece que, en aquellos casos en que el juez rechaza la denuncia por no encuadrar en ninguno de los casos establecidos en los artículos 3° y 4° de esta ley o por considerarse incompetente, debe elevar de inmediato la resolución en consulta a la Cámara de Apelaciones.

Con relación a la competencia de la Cámara de Apelaciones en el trámite de consulta, el Dr. Sagüés explica que “...se ha observado, con acierto, que el tribunal no debe limitarse a un mero control formal de lo actuado por el a quo, y que dicha consulta tiene un alcance más amplio que una apelación, pues no rigen allí las limitaciones provenientes del principio dispositivo, que ciñen la intervención de la alzada a la medida del agravio del recurrente. La cámara puede averiguar, pues, con toda libertad, si lo decidido por el juez de primera instancia se ajusta a las reglas constitucionales y legales aplicables al hábeas corpus”⁹.

Y en el caso puntual del artículo 10 de la ley 23.098, el mencionado autor afirma que “...la ley instrumenta un régimen de ‘consulta’ a la cámara del juzgado que rechazó in limine la acción, o que se declaró incompetente”; mas, cuando se refiere a los fundamentos que justifican tal previsión, dice: “Pensamos que la consulta de

⁹ Dr. Néstor Pedro Sagüés, *Derecho Procesal Constitucional*, Tomo IV, “Hábeas Corpus”, p. 428.

mención intenta no sólo acelerar el trámite, sino también dar mayor robustez a lo resuelto por el a quo”.

Estos fundamentos –según creemos– justificarían también la aplicación del trámite previsto por el artículo 10 de la ley 23.098 contra las sentencias definitivas en los procesos de hábeas corpus en los que se ordena el rechazo de la acción luego de habersele cursado alguna clase de trámite, y no sólo en los que se resuelve la incompetencia o el rechazo *in límine*.

Por un lado, la letra del artículo 10 de la ley no impide una interpretación como la propuesta, toda vez que refiere al rechazo de la acción, sin limitarlo al supuesto en el que el mismo sea *in límine* (es decir, en el primer acto jurisdiccional emitido ante la denuncia).

Además, una interpretación contraria podría privar al amparado de una nueva instancia de revisión judicial, cuando no se da curso a una acción como la de hábeas corpus y no se interpone recurso de apelación contra la misma.

Por su parte, el alcance con el que se propone interpretar el artículo 10 de ley de hábeas corpus fue recepcionado positivamente por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata en su resolución de septiembre de 2010. Así, la Sala II en el marco del expediente N°5966, en oportunidad de entender en un recurso de apelación interpuesto por esta Procuración contra la resolución de primera instancia que rechazó una acción de hábeas corpus, sostuvo que: *“...en la resolución cuestionada, el Juez Santa Marina entendió que no correspondía la elevación en consulta de las actuaciones a esta Alzada, en los términos del art. 10 de la Ley 23.098, por no darse en el caso el supuesto de rechazo o declaración de incompetencia, pues en estos autos, se ha escuchado al propio interno para que exponga sobre los hechos denunciados por el funcionario de la Procuración Penitenciaria de la Nación. [...] Aún más llama la atención que rechazara el hábeas corpus sosteniendo que no se trataba de ninguna de las situaciones mencionadas en el art. 3 de la Ley 23.098, y, al propio tiempo, dijese que no correspondía la elevación del caso en consulta a la Cámara según el art. 10 de la misma ley, pese a que esta norma dispone la consulta cuando el juez entienda que no se dan los supuestos del art.3°.”*; y concluye ***“El Tribunal recomienda por tanto, al Señor Juez a quo, que en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el citado art. 10 de la Ley 23.098”*** (el resaltado me pertenece).

3.2. Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

A fines del mes de septiembre de 2010 agentes de la Procuración Penitenciaria de la Nación mantuvieron una entrevista con un interno del Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, quien en ese momento se encontraba a cargo del servicio de patrocinio jurídico del Centro Universitario de Devoto.

Al respecto, el detenido informó que desde su parecer había irregularidades en la tramitación de las acciones de hábeas corpus en la Capital Federal, presentándose diversos obstáculos a los internos al momento de interponer los recursos.

En ese sentido, señaló en primer lugar que resultaba muy difícil para quienes se encuentran detenidos la presentación ante sede judicial de acciones de hábeas corpus, en tanto el personal del Servicio Penitenciario no las recibe, o bien las recibe pero no les da curso, o se ven imposibilitados de comunicarse con los Juzgados y/o sus Defensores de forma telefónica.

Agregó que hay un alto índice de acciones que son rechazadas *in limine* en el marco de su tramitación, lo cual ocasiona que no se provea la prueba ofrecida por los internos al no celebrarse la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098.

Por otra parte, manifestó que cuando se elevan a Cámara en consulta las actuaciones con motivo del rechazo, las resoluciones de segunda instancia no son motivadas ni fundadas. Agregó que, al celebrarse la audiencia, “*nunca están presentes el Defensor Oficial ni el Fiscal*”.

Finalmente, relató que los amparados nunca son notificados de las resoluciones, y que por ello desconoce la suerte que tuvieron las presentaciones por ellos realizadas. Es por ello que contempla la posibilidad de confeccionar, en el ámbito del Centro Universitario de Devoto, un proyecto de ley que modifique la vigente Ley 23.098 en este último sentido.

En tal sentido, esta Procuración Penitenciaria consideró oportuno y necesario extender el relevamiento que se estaba realizando en la jurisdicción Lomas de Zamora a la Capital Federal. Para realizarlo se tomó como fecha de muestra desde el 1º de agosto al 20 de septiembre de 2010.

En esta jurisdicción, los turnos para la presentación de acciones de hábeas corpus son de un día por cada Juzgado, distribuyéndose dichos turnos entre los cuarenta y nueve (49) Juzgados Criminales de Instrucción y los siete (7) Juzgados de Menores, en orden numérico correlativo.

El número total de hábeas corpus relevado fue de 28, de los cuales ninguno fue iniciado por la Procuración Penitenciaria de la Nación.

De la información que arrojó el relevamiento realizado, y tal como fuera adelantado en la entrevista referida, se constataron algunas irregularidades en el proceder de las agencias judiciales, las que pueden derivar en afectaciones a los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Audiencia oral prevista por el artículo 14 de la Ley 23.098

De los 28 (veintiocho) casos relevados, se desprende que sólo en dos (2) de ellos se realizó la audiencia oral, tal como se encuentra prevista en el artículo 14 de la ley de hábeas corpus, pero en una de ellas no pudo concurrir la víctima por haber sido expulsada del país.

En 19 (diecinueve) de los casos relevados se llevó a cabo una especie de audiencia en la que se consultó a la víctima y/o al denunciante si se ratificaban los hechos denunciados. Pero en dichas audiencias no se cumplió con lo previsto por el artículo 14, ya que a las mismas no concurrieron ni el Defensor ni el Fiscal. Cabe aclarar que en 15 (quince) de esos 19 (diecinueve) casos el Ministerio Público Fiscal no fue notificado, y en 18 (dieciocho) de ellos no se notificó a la Defensoría de la interposición de la acción de hábeas corpus. De los 28 (veintiocho) casos relevados sólo en 8 (ocho) casos se notificó de la denuncia al Ministerio Público Fiscal, y únicamente en 3 (tres) se notificó al Defensor Oficial.

Con relación a la realización de la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098, cabe hacer mención a una acción de hábeas corpus interpuesta por Defensoría en favor de un interno alojado en Complejo Penitenciario Federal N°I de Ezeiza, quien había sido golpeado al ingresar al penal, resultando lesionado, y a quien no se le estaba suministrando medicación ni abrigo.

A la audiencia celebrada en el Juzgado de Instrucción N°24, Secretaría 131, concurrió únicamente el Defensor “*ad-hoc*” de la Defensoría Correccional N°4, y *no asistió la víctima, y ni siquiera se expresó el motivo por el cual el damnificado no asistía*. Si bien es la única causa de las relevadas en la que ocurrió esta irregularidad, la misma resulta tan grave que no puede dejar de ser puesta de resalto.

Como se expresó anteriormente, la asistencia del amparado a la audiencia resulta obligatoria, tal como lo prevé el artículo 14 de la Ley 23.098 cuando reza: “***La persona que se encuentra privada de su libertad deberá estar siempre presente***”. Con ello, no sólo se celebró la audiencia referida en ausencia del amparado, sino que se tuvo por desistida la acción sin que exprese su voluntad en ese sentido.

Asimismo, resulta cuando menos preocupante que ante la manifestación del Defensor de su deseo de desistir de la acción, pero afirmando que su defendido efectivamente fue víctima de malos tratos, el Juez haya resuelto sin más el archivo de las actuaciones, a sabiendas de que se encontraban gravemente vulnerados derechos fundamentales de una persona privada de su libertad.

Caratulación

Es importante destacar que en el relevamiento se constató que en el 100% de las 28 (veintiocho) causas de las que se tomó vista caratularon como “hábeas corpus”, a diferencia de la jurisdicción de Lomas de Zamora, donde en general tramitan como “s/ su presentación”.

Tramitación de la acción: diligencias probatorias

En 19 de los casos relevados se realizaron diligencias probatorias, de las cuales la mayoría consistió en prueba informativa, tanto a los organismos de seguridad, como al poder judicial. En ningún caso se tomó testimonial a los agentes del Servicio Penitenciario Federal, ni a otros internos.

Sólo en 3 (tres) casos se tomó otro tipo de prueba, y también en tres (3) casos se realizaron periciales médicas.

De este modo, puede apreciarse que la informativa resulta ser la prueba fundamental en la tramitación de las acciones de hábeas corpus en la jurisdicción Capital Federal.

Tramitación de la acción: sentencia

En lo referente a la admisión o rechazo de la acción, sólo en 2 (dos) casos se hizo lugar al hábeas corpus, y en uno de ellos, la acción devino abstracta. Se trataba de un caso en el que se solicitaba la expulsión del país de un interno extranjero. El Juzgado declaró admisible la acción, ante lo cual la Dirección Nacional de Migraciones apeló. La Cámara declaró abstracto el recurso en virtud de que la persona en cuestión ya había sido expulsada del país. El otro caso en que se hizo lugar a la acción, posteriormente se ordenó su archivo, ya que lo que solicitaba el accionante era su excarcelación, pero posteriormente cayó en la cuenta de que había realizado mal el cálculo, y la misma no le correspondía.

En el resto de los casos, se rechazó la acción impetrada, elevándose en consulta

a la Cámara de Apelaciones, en la totalidad de los casos.

En los 20 (veinte) casos en que se elevó en consulta a la Cámara de Apelaciones, la misma confirmó la sentencia, y sólo en 3 (tres) de esos casos no resolvió, en menos de 24 horas.

Cabe hacer mención a un caso en que el Juzgado de primera instancia se declaró incompetente, elevando la acción en consulta a la Cámara. El Tribunal de Alzada dispuso que resultaba prematura la declaración de incompetencia territorial y ordenó al juez proseguir el trámite. Finalmente la víctima desistió del hábeas corpus.

Resulta necesario hacer mención, tal como fuera señalado por los detenidos entrevistados, que se registra la falta o escasa motivación de alguna de las sentencias de la Cámara de Apelaciones en oportunidad de resolver en consulta, al no dar argumentos que justifiquen la confirmación de la sentencia de primera instancia.

La falta de elementos de convicción en la resolución de la Alzada se traduce en el incumplimiento del tribunal de su obligación de motivar las sentencias y priva a las partes y al juez que deba entender en una instancia superior, de su adecuado control.

Notificación de la sentencia

De la totalidad de los 28 (veintiocho) casos auditados, sólo en 8 (ocho) se notificó de la sentencia al denunciante. En el caso de los amparados, sólo en 6 (seis) casos se les notificó del resultado de la acción.

El artículo 18 de la Ley de procedimiento de hábeas corpus establece que el pronunciamiento será leído por el juez ante los intervinientes y quedará notificado aunque alguno de ellos se hubiere alejado de la sala de audiencia.

Resulta ocioso mencionar que, en el caso en que la sentencia no se dicte en el mismo momento de celebrarse la audiencia o de no estar presente el damnificado (en caso de tratarse de una persona privada de su libertad)¹⁰, no puede soslayarse la obligación de notificarlo, amparándose en lo prescripto por el artículo anteriormente citado. Esto, porque la finalidad tenida en mira por el legislador al dictar la ley fue, por un lado, asegurar la continuidad del trámite y la decisión y, por el otro, la carga de los intereses de esperar allí el fallo o enterarse por sus propios medios si desean recurrir. Pero esta carga de esperar el fallo corre para quienes tienen la posibilidad de elegir el lugar donde lo hacen, no para quien no dispone de su libertad, y por tanto no puede

¹⁰ Lo que no debería ser así, ya que la persona privada de la libertad debería estar siempre presente al realizarse la audiencia.

comparecer al Juzgado por sus propios medios.

A diferencia de lo señalado en relación al proceder de los juzgados de primera instancia de la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en el marco de la causa N°33413 del registro de la Secretaría 125 del Juzgado Criminal de Instrucción N°8, ordenó notificar de la sentencia de segunda instancia al amparado –en razón de haber manifestado “voluntad recursiva”– y también a esta Procuración, no obstante no haber intervenido en el proceso, en atención a la incidencia colectiva que este Organismo pudiera considerar que exista en el caso.

Otro caso relevante es un hábeas corpus (causa N°7171) que tramitara en el Juzgado de Menores N°2, Secretaría 6, en el que el juez ordenó oficiar lo actuado a la Procuración Penitenciaria de la Nación, ya que se trataba de una acción colectiva. La PPN fue efectivamente puesta en conocimiento de lo actuado, pudiendo tomar intervención.

Ausencia de sentencia

Es relevante para destacar, y tal como lo habían adelantado los internos entrevistados, que en muchas ocasiones los jueces rechazan los hábeas corpus, pero “solicitan” el cumplimiento de aquello que constituía el objeto de la acción.

Un ejemplo de ello lo constituye un caso en el cual se solicitaba que la víctima volviera al Hospital Argerich, en donde había estado internado anteriormente, para luego ser reintegrado –según el preso antes de tiempo– al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese caso el juez rechazó la acción de hábeas corpus, pero dispuso el reingreso del interno al Hospital Penitenciario Central.

Otro caso similar es el de un interno que solicitaba su libertad, ya que se encontraba detenido en una unidad penitenciaria pese a haber sido sobreseído, debido a la falta de resolución en el expediente civil que se había abierto a raíz de su adicción a las drogas. En este caso, el juez de hábeas corpus rechazó la acción intentada, pero ofició a la jueza civil solicitándole que imprimiera mayor celeridad al trámite de designación del lugar en que sería internado el amparado (considerado condición necesaria para su externación de la unidad penitenciaria en la que permanecía privado de su libertad).

Hábeas corpus de pronto despacho

Se individualizaron supuestos en donde el motivo de la acción de hábeas corpus resultaba *la omisión* por parte de un funcionario público de impulsar causas judiciales o de tratar alguna petición que el accionante había solicitado ante el juez que lo tenía a cargo. En esos supuestos, se constituye como práctica común el rechazo de la acción intentada por el juez de hábeas corpus, limitándose –en el mejor de los casos– a extraer testimonio de lo resuelto y remitirlo al juez cuyo pronunciamiento se insta. Tal vez, ello responde a que la autoridad requerida en este supuesto es otro magistrado.

Al respecto, creemos que en supuestos como los descriptos, no debería procederse necesariamente al rechazo de la acción, toda vez que existe un tipo de hábeas corpus reparador, el “*hábeas corpus de pronto despacho*”, que bien podría prosperar en situaciones en donde se comprueba la demora del órgano requerido, aun cuando se trate de otro magistrado.

En uno de los expedientes relevados –causa N°28810/10, caratulada “NN s/ Hábeas Corpus”–, que tramitó ante el Juzgado N°27, Secretaría 131, se promovió acción de hábeas corpus con el fin de solicitar una audiencia con el presidente del Tribunal que lo tenía a cargo. En ese supuesto, el accionante desistió de la acción en la audiencia de hábeas corpus y luego se libró oficio al tribunal –autoridad requerida en este caso– para informar sobre lo solicitado por el accionante. En el caso de que el accionante no hubiera desistido de la acción, y que la incomparecencia de la víctima se deba a la omisión del juez de proveer la solicitud de comparecer ante sus estrados, creemos que el hábeas corpus de pronto despacho podría constituirse como vía idónea para dar solución a la situación planteada.

Ante el caso de una persona que se encontraba ilegítima y arbitrariamente detenida en una cárcel federal, sin auto de procesamiento ni prisión preventiva, la Procuración Penitenciaria de la Nación, junto con la organización no gubernamental Asociación por los Derechos Civiles (ADC), presentó una acción de hábeas corpus.

Esta acción se interpuso a fin de procurar la libertad del damnificado o, en su defecto, que se dictara resolución acerca de su situación procesal y se lo juzgara dentro de un plazo razonable. Todo ello, en virtud de estarse conculcando el principio de inocencia.

En tal sentido, y si bien puede entenderse que se trataba de una acción de hábeas corpus “clásica”, el efecto obtenido fue el de una acción *reparadora*, ya que la presentación se efectuó a raíz de la demora del órgano requerido. De este modo, el resultado obtenido fue que el magistrado ordenara el procesamiento, y convirtiera en

prisión preventiva la “simple detención” de la persona.

Más adelante nos ocuparemos de este caso.

4. Análisis de casos jurisprudenciales

En este apartado se hará referencia a diferentes casos judiciales en donde por medio de las acciones de hábeas corpus presentadas por este Organismo se intentó tutelar los derechos humanos fundamentales de personas que siendo privadas de su libertad veían afectados no sólo su libertad personal y ambulatoria –derechos éstos que son objeto principal de tutela de la acción de hábeas corpus–, sino varios otros derechos humanos cuya vulneración deriva de la agravación ilegítima de la libertad.

4.1. Hábeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación a favor de un interno alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°I de Ezeiza por malos tratos en prisión

El presente caso merece un comentario en particular, no sólo porque su tramitación resulta ilustrativa de los modos inadecuados en el proceder del Poder Judicial, a los que hicimos alusión en la primera parte de este informe, sino también porque resulta de particular relevancia el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que entendió en la causa en virtud del recurso de apelación interpuesto por esta Procuración ante el rechazo de la acción por parte del juez de primera instancia.

Resumidamente, una persona alojada en el C.P.F. N°I de Ezeiza se comunicó en forma telefónica el día 29 de julio de 2010 con esta Procuración Penitenciaria informando que había sido objeto de agresiones físicas por parte de personal del Servicio Penitenciario Federal. Las agresiones a las que había sido sometido, según descripción del interno, eran ciertamente graves: recibió golpes en la cabeza, el pecho y la panza.

Luego, fue trasladado en forma intempestiva de la Unidad Residencial N°III a la Unidad Residencial de Ingreso, donde se encontraban cumpliendo funciones los agentes a los que había atribuido las agresiones referidas. Como consecuencia de esta situación, el interno fue objeto de constantes amenazas contra su vida e integridad.

El mismo día en que recibió la denuncia, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó una acción de hábeas corpus en su favor, la que tramitó ante el Juzgado

Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, bajo el expediente N°1487.

A su turno, el juez que entendió en la causa de hábeas corpus ordenó el traslado del interno al juzgado a fin de tomar la audiencia. En ocasión de presentarse ante el magistrado sin la asistencia del Defensor Oficial (por no habersele notificado de la acción a la Defensoría), el amparado hizo un relato exhaustivo de las severas agresiones físicas que motivaron la promoción de la acción de hábeas corpus, para luego –de forma inconsecuente– desistir de dicha acción.

De singular importancia en este punto es aclarar que el interno no sabe leer ni escribir. En tal sentido, hay que reparar en lo dudoso e irregular que resulta la manifestación de voluntad de quien, no sabiendo leer ni escribir, y sin contar con la debida asistencia letrada, desiste de su pretensión tras haber hecho un detalle pormenorizado de las brutales agresiones que motivaron su denuncia.

Tras el presunto desistimiento del amparado, la acción intentada bajo la figura procesal del hábeas corpus tramitó como delito de acción pública (la denuncia quedó caratulada “s/ presunta infracción artículo 144 bis Código Penal”), quedando el amparado desprovisto de un mecanismo de tutela judicial efectiva a los derechos que le estaban siendo vulnerados.

No habiéndose concedido el traslado del amparado, y tal como era de esperar, el 1° de agosto fue golpeado brutalmente junto a un compañero (quien había intentado defenderlo), por personal del Servicio Penitenciario. Ello motivó la interposición de una nueva acción de hábeas corpus por parte de esta Procuración, en donde se reiteró la *urgencia de trasladar al interno*. La misma tramitó ante el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora bajo el expediente N°6958.

En oportunidad de haber sido citados a comparecer ante el tribunal, y en un acto de desesperación por ser trasladados nuevamente a la unidad en la que habían sido golpeados y amenazados, el amparado y su compañero se infirieron cortes con “feites” (hojas de afeitar) en los antebrazos al salir de la sede del juzgado, llegando incluso el primero de ellos a tragar uno de esos elementos. Ello da muestra de la situación de maltrato general en la que se encontraban los internos. Por otra parte, es importante destacar que el interno no contó con asistencia letrada al momento de realizarse la audiencia, ya que la Defensoría no fue notificada.

En su resolución, el Juez Federal que entendió en la causa rechazó la acción de hábeas corpus, por considerar que no se ajustaba a ninguno de los supuestos previstos

por la Ley 23.098. Pese a la grave situación descrita, no se ordenó el traslado del amparado y como consecuencia de ello, siguió alojado en el mismo lugar en el que prestaban funciones los agentes penitenciarios que lo habían golpeado en las oportunidades referidas.

En el resolutorio de fecha 4 de agosto de 2010, el juez de grado entendió “...*que los hechos puestos de manifiesto por la Procuración Penitenciaria [...] deben ser tratados como delitos de Acción Pública, no aplicable el instituto del hábeas corpus previsto en la ley 23.098. Ello es así, pues de proseguir con su tramitación estaríamos eventualmente obligando a declarar a las distintas autoridades penitenciarias al momento de ser interrogadas sobre el evento, vulnerándose la contingencia de imputado, condición jurídica no fruto de las leyes procesales sino de la Constitución Nacional, cuando en su artículo 18 señala que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo...*”.

El argumento transcrito parece omitir la finalidad propia de la acción de hábeas corpus, distinta e inconfundible de aquella que persigue la investigación de un delito de acción pública. Por otro lado, habrá que advertir que el alcance de la acción de hábeas corpus no exige necesariamente de las declaraciones de las autoridades penitenciarias que podrían haber ocasionado la situación de violencia y hostigamiento cuyo cese se persigue, y menos aún el agotamiento de diligencias tendientes a investigar la responsabilidad penal de sus posibles autores. Ello no sólo porque la letra de la ley que regula este instituto no lo exige, sino porque para la tramitación de una acción de hábeas corpus bastará con aquellas medidas que tiendan a probar el efectivo agravamiento de las condiciones de detención –como serían las dirigidas a constatar las consecuencias físicas en el interno de las agresiones denunciadas–, pero de ningún modo deberán indagar en las eventuales responsabilidades de presuntos autores. Esto último sería confundir las diferentes finalidades de procesos judiciales que persiguen distinto objeto.

Por otro lado, debe señalarse que la resolución que rechazó la acción dispuso que no correspondía la elevación a Cámara de las actuaciones en los términos del artículo 10 de la Ley 23.098 por no darse los supuestos de rechazo “*in limine*” o incompetencia, únicos casos previstos por la normas.

Así las cosas, la Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata contra la resolución que rechazó la acción de hábeas corpus.

No podemos dejar de señalar que en el auto del juez de primera instancia que se

pronuncia sobre la procedencia del recurso, el Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado N°1 de Lomas de Zamora, sostuvo que *“Proveyendo el escrito presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación a fs. 24, sin perjuicio que conforme claramente lo establece el artículo 19, 2do. párrafo de la ley 23.098, el denunciante no se encuentra legitimado para interponer recurso alguno (al no darse el único supuesto allí referido por la citada norma), a lo que debe sumarse en el caso de autos, que el Defensor ante esta sede judicial, no se ha agraviado de la resolución dictada en la presente causa; teniendo en especial consideración la trascendental misión que la Procuración Penitenciaria tiene entre sus objetivos, concédase el recurso de apelación interpuesto por el abogado apoderado de la Procuración Penitenciaria de la Nación”*.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto (causa N°5966), la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata consideró que la audiencia, tal como está previsto por el artículo 14 de la Ley 23.098, no fue realizada, por lo cual emplazó a las partes para realizar ante sí dicha audiencia; todo ello, fue resuelto de manera urgente.

En tal sentido, en la audiencia tuvieron intervención el Defensor Oficial ante la Cámara, el Fiscal ante Cámara, una psiquiatra, la autoridad requerida con su asistencia letrada, el amparado, el interno que había tratado de defenderlo y resultó siendo víctima de los golpes, y la Procuración Penitenciaria en carácter de parte apelante.

El tribunal cedió la palabra al damnificado, y luego a la psiquiatra del Cuerpo de Médicos de la Cámara. Posteriormente, tomó declaración testimonial a un agente de la PPN que se había entrevistado con la víctima, y al otro interno, a quien posteriormente se lo tuvo como beneficiario de la acción.

Cuando el letrado del S.P.F. solicitó un cuarto intermedio a fin de “preparar una defensa”, el presidente de la Sala II le explicó, que al encontrarse en una audiencia de hábeas corpus, su presencia era únicamente a efectos de realizar un informe de la situación. Asimismo, y cuando el Subdirector de la Unidad Residencial de Ingreso, Selección y Tránsito del C.P.F. I (lugar donde se encontraban alojados los detenidos al momento de la golpiza) solicitó hacer uso de la palabra, el presidente de la Sala le informó que no podía permitir que hablara en la audiencia, pues por ser uno de los responsables de la custodia de los dos detenidos podía ser un eventual imputado en una investigación ordinaria sobre la comisión de un delito de acción pública.

Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió revocar la sentencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, Secretaría 3, y hacer lugar al hábeas corpus, en virtud de considerar

agravadas las condiciones de detención del interno. A su vez, extendió los efectos de la resolución al interno que en un principio había declarado como testigo. En tal sentido, ordenó el directo e inmediato traslado de los dos detenidos.

Por otra parte, cabe poner de resalto que al entender en el recurso de apelación, la Sala II de la Cámara hizo una valoración respecto a la legitimación que asiste a la Procuración Penitenciaria en materia de acciones de hábeas corpus. En tal sentido, entendió que este Organismo se encuentra facultado para interponer hábeas corpus y para impugnar las decisiones que le sean adversas, en vistas a satisfacer su objetivo normado por la Ley 25.875.

Posiblemente, el cuestionar legitimidad a este Organismo para interponer el mencionado recurso resulte de una visión incorrecta del instituto de hábeas corpus, que desconoce el alcance y el sentido con el que se consagró la acción en la última reforma constitucional (en el párrafo segundo del artículo 43), y que se apartó del clásico régimen delineado por Ley 23.098. En esta dirección se pronunció la Cámara de Apelaciones en la causa referida, al afirmar que: *“En este orden de ideas, lo dispuesto en el art. 19, segundo párrafo y 22 de la Ley 23.098, debe estimarse incompatible con la concepción procesal del hábeas corpus que contiene el citado art. 43 de la Ley Fundamental, según el texto introducido por la reforma de 1994 [...]”*. Así, el tribunal de Alzada concluyó: *“De ello, se sigue que a diferencia de la Ley 23.098 del año 1984, la Constitución no concibe al acto en el que se reclama el amparo judicial por hábeas corpus como una denuncia, sino como una acción, que cualquier persona puede entablar, adquiriendo como accionante, la legitimación que la hace parte en el proceso”* (el resaltado nos pertenece).

Haciendo hincapié en los considerandos de la sentencia de Cámara, que ponen de manifiesto irregularidades en la tramitación de la acción de hábeas corpus, y que coinciden con los datos obtenidos por el relevamiento de causas realizado en la jurisdicción de Lomas de Zamora, habrá que referirse a la parte de la sentencia que se pronuncia sobre la omisión de elevar las actuaciones en consulta. En este sentido, el tribunal señaló *“...Aún más llama la atención que rechazara el hábeas corpus sosteniendo que no se trataba de ninguna de las situaciones mencionadas en el artículo 3 de la ley 23.098, y, al propio tiempo, dijese que no correspondía la elevación del caso en consulta a la Cámara según el artículo 10 de la misma ley, pese a que esta norma dispone la consulta cuando el juez entienda que no se dan los supuestos del artículo 3º”*. Acto seguido, manifiesta: *“...El tribunal recomienda por tanto, al señor Juez a*

quo, que en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 10 de la ley 23.098”.

Otro fundamento que la Cámara observa de la decisión que se revisa es el que considera improcedente a la acción de hábeas corpus, argumentando que debe convertirse en denuncia penal para no afectar la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo de los responsables de la violación de las normas que deben presidir el trato carcelario. Así, sostiene el excelentísimo tribunal que “**con tal argumento se olvida que el objetivo del hábeas corpus es la tutela de los beneficiarios** y que los informes de las autoridades administrativas llamados a participar en la audiencia no podrían, aun en caso de reconocer los hechos, valer como prueba en el proceso penal” (el resaltado nos pertenece).

Para finalizar, tras revocar el fallo de primera instancia y haber ordenado el traslado inmediato de los afectados a otras unidades, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó al S.P.F. la presentación de informes quincenales sobre la situación de los internos.

Cuestionar la legitimidad de la Procuración para interponer un recurso de apelación, la falta de elevación en consulta a la Cámara de Apelaciones de la resolución que rechazaba la acción de hábeas corpus pese al imperativo del artículo 10 de la Ley 23.098, el considerar improcedente la acción de hábeas corpus por entender que la situación de brutal violencia a la que se veían sometidos los amparados no agravaba sus condiciones de detención, y la “transformación” de la acción de hábeas corpus en denuncia penal, no hacen más que graficar algunas de las irregularidades con que la agencia judicial tramita los hábeas corpus, desconociendo la normativa que regula el instituto en desmedro de los derechos y garantías de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Intervención de esta Procuración Penitenciaria de la Nación

Alrededor del mes de septiembre, y luego de la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Federal a cargo del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora –cuya apelación dio lugar al pronunciamiento ejemplar de la Sala II de la Cámara de Apelaciones–, esta Procuración comenzó a advertir a las agencias judiciales en las posteriores acciones de hábeas corpus presentadas, que este organismo había tomado conocimiento acerca de la existencia de una práctica judicial muy extendida en materia de tramitación de acciones de *hábeas corpus*, consistente en “*hacer desistir*” al

amparado de la acción correctiva en una audiencia que se titula como del “artículo 9”, o bien la de “transformar en denuncia” este tipo de acciones urgentes. Ello, señalábamos en los escritos de inicio, ocurría generalmente a cambio de algunas concesiones parciales a las demandas planteadas por el damnificado, que en algunos casos se gestionan ante las autoridades de las que proviene el acto denunciado como lesivo. Esa modalidad de actuación, desde el punto de vista de la Procuración Penitenciaria, vulnera claramente el derecho de defensa en juicio de las personas privadas de su libertad.

Por otro lado, también se señaló al momento de promover la acción, la ausencia de una asistencia técnica adecuada a través del Defensor Oficial de turno, colocando a las personas que buscan protección a través de este remedio judicial en una situación de extrema vulnerabilidad; al verse obligadas a adoptar decisiones de enorme trascendencia (como la desistir de este tipo de acciones) sin el adecuado asesoramiento legal.

Así, esta Procuración comenzó a solicitar expresamente ante los tribunales que todo acto que implique una manifestación de voluntad del amparado en el marco de este proceso sea adoptado previa consulta personal en audiencia privada con el defensor oficial, reservándonos –en ejercicio de los deberes impuestos por la Ley 25.875– el derecho de impugnar toda decisión que suponga la inobservancia de este requisito.

Asimismo, y en tanto se habían relevado procesos de hábeas corpus promovidos por hechos de tortura y malos tratos resultaban “*transformados en denuncia*”, se señaló en los escritos de inicio lo que significa para este Organismo que las condiciones de detención resulten agravadas. En esta dirección se dijo que si condiciones estructurales de las cárceles agravan las condiciones de detención, más aún lo hacen los golpes, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas y malos tratos en prisión. Esto último, independientemente de la investigación correspondiente. Motivo por el cual, si una persona es golpeada y plantea una acción de hábeas corpus su intención es que se tomen las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir y, de ser necesario, se ordene un traslado a otra unidad, en cuyo caso el Juzgado que interviene tiene competencia para hacerlo.

Paralelamente, esta Procuración adoptó como modalidad la de comunicar a los defensores oficiales sobre la presentación de acciones de hábeas corpus, para motivar así su intervención ante la posibilidad de que no resulte notificado por el juzgado.

Las referencias de este organismo a las prácticas apuntadas, que comenzaron a formularse junto a cada nueva denuncia de hábeas corpus, provocaron diversas quejas de parte de funcionarios y magistrados, que hicieron saber su disconformidad ante esos

señalamientos, que consideraron genéricos y –sobre todo– extemporáneos; habida cuenta que se los formulaba antes de que las agencias judiciales efectuaran actuación alguna. En vista del evidente malestar que estaba provocando esta modalidad de señalamiento y ante el hecho evidente de que se había logrado llamar la atención de los operadores acerca de estas cuestiones, el Procurador Penitenciario impartió instrucciones para dejar de lado este tipo de manifestaciones a través de los escritos liminares.

En cualquier caso, aquellas intervenciones de la Procuración Penitenciaria sumadas al valiosísimo precedente de Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en la causa N°5966, a la que ya hemos hecho referencia, parecen haber funcionado como un punto de inflexión en varias de las prácticas judiciales a las que venimos haciendo mención.

Ejemplo de ello es la causa “Procuración Penitenciaria de la Nación s/ Presentación de hábeas corpus”; de la Secretaría N°1 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora. En ella, se efectuó una interpretación de los artículos 3 y 4 de la Ley 23.098 diferente a las que se había venido observando en otros casos tramitados ante el mismo tribunal.

En aquella oportunidad, la Procuración interpuso la acción de hábeas corpus colectivo a raíz de las medidas de sectorización a las que se había sometido a las personas alojadas en el Pabellón G de la Unidad Residencial de Ingreso del Complejo Penitenciario Federal N°I, debido a la palmaria *ilegitimidad* de la medida de aislamiento¹¹, no sólo por no encontrarse prevista como infracción disciplinaria¹², sino también por constituir un trato cruel, inhumano o degradante de acuerdo a la Convención contra la Tortura, y a la vez, por generar situaciones contrarias al derecho al restringir el acceso al trabajo y a la educación de los internos, limitando el derecho a las comunicaciones familiares, restringiendo la movilidad física, y afectando el derecho a la salud, tanto física como psíquica.

En oportunidad de resolver la acción impetrada, el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora hizo lugar a la acción de hábeas corpus promovida y ordenó a las autoridades del establecimiento que arbitrasen los medios necesarios para ampliar las horas de esparcimiento y recreación de todo detenido sometido a resguardo físico, tanto de implementación voluntaria como a raíz de órdenes

¹¹ Ver Capítulo IV sobre aislamiento en este mismo Informe Anual.

¹² Artículo 84 de la Ley 24.660: “No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria”.

judiciales, con la adopción de un marco regulatorio que así lo prevea. Por último, exhortó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para que, con la mayor celeridad posible, el Módulo de Ingreso del C.P.F. I de Ezeiza cumpliera con los objetivos y funciones para los cuales fue creado.

En oportunidad de motivar el resolutorio, el sentenciante entendió que el proceso de hábeas corpus debe tutelar, preventiva o reparativamente, la libertad corporal o física, y todo lo íntimamente ligado a tal derecho. A su vez, y citando la opinión del reconocido jurista Bidart Campos, afirmó que “...*En estos casos, protege derechos constitucionales de índole distinta, como puede ser el derecho a la dignidad humana, a la integridad física, a la intimidad, al trato debido en lugares de detención*”. Y agregó “...*Es tuitivo, por tanto, del derecho constitucional al trato digno en las prisiones*”.

En referencia específica a la acción de *hábeas corpus correctivo*, afirmó el juez que entendió en la causa que “...*El fin de esta acción no es procurar la libertad, sino enmendar la forma y el modo en que se cumple la detención*”. Agregó que “*los derechos y garantías ajenos a la privación de la libertad no tienen por qué verse restringidos, disminuidos, y deben permanecer incólumes (honor, dignidad humana, etc.)*”. Asimismo, en relación a la situación de aislamiento que producía las medidas de resguardo a la integridad física adoptada, señaló que “*Más allá de tratarse de un sector destinado a internos con medidas de resguardo de integridad física, encuentro excesivamente limitado el tiempo destinado a su recreación y esparcimiento, y prolongado el encierro en su celda*”.

Por su parte, y en oportunidad de analizar la razonabilidad de la forma en la que se concretan las medidas de resguardo de la integridad física de los internos, el juez que entendió en la causa señaló que “...*en modo alguno las medidas carcelarias pueden operar en detrimento de las garantías constitucionales de las que goza toda persona, circunstancia que amerita la adopción, por parte del suscripto, de medidas tendientes a su inmediata protección y rectificatoria de decisiones, o aun, de la orden de implementación reglamentaria del régimen de quienes estén sometidos a resguardo físico*”.

Las afirmaciones transcritas llevaron al sentenciante a entender agravadas las condiciones de detención de aquellos que se encontraban alojados en la Unidad Residencial de Ingreso del C.P.F. N°I, haciéndose lugar a la acción intentada.

No es menor la problemática que subyace de las circunstancias de hecho que

ameritaron la interposición de la acción, que es la relativa a la falta de una reglamentación de las medidas de resguardo de la integridad física de los internos, en donde se contemplen los derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos de los que Argentina es Estado parte. Con ello, este Organismo entiende acertada la interpretación de los artículos 3 y 4 de la Ley 23.098 de la sentencia comentada.

En igual dirección, en el marco de la causa N°16.139 del registro de la Secretaría 3 del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, se hizo lugar a una acción de hábeas corpus interpuesta por esta Procuración por entender agravadas las condiciones de detención de los internos alojados en el Pabellón “F” de la Unidad Residencial de Ingreso del C.P.F. N°I en los términos del artículo 4 y 5 de la Ley 23.098, con motivo de irregularidades en la calidad y cantidad de la alimentación que se les suministraba y por no contar con los utensilios necesarios e indispensables para alimentarse, debiendo hacerlo con sus manos y utilizando como recipiente de comida una botella plástica cortada. Este caso será comentado en particular en el apartado siguiente.

Con relación a la incomparecencia del Defensor Oficial a la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098, en el marco de la causa N°6058 del registro de la Secretaría 6 del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, se celebró dicha audiencia en presencia del Defensor Oficial. También medió la intervención del Defensor en la audiencia celebrada en la causa N°16.139 del Juzgado N°1 Secretaría 3 de Lomas de Zamora. En ambos supuestos, por la entidad de los hechos que motivaron la acción interpuesta, agentes de esta Procuración también presenciaron la audiencia.

Pero ello no parece suceder en todos los casos. Así, esta Procuración interpuso el 8 de septiembre de 2010 acción de hábeas corpus en favor de un detenido con motivo de las malas condiciones edilicias de la celda en la que habitaba, la falta de asistencia médica y los hechos de violencia y situaciones de abuso sexual a los que se lo había sometido. La causa tramitó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de la Jurisdicción de Lomas de Zamora bajo el número de causa 6057/2010. En el presente caso, el amparado no sabía leer ni escribir. Al momento de la audiencia, y encontrándose presentes el damnificado y personal penitenciario, se ordenó –de modo tardío– la notificación al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de la Defensa. Así, la notificación devino ineficaz, por ser ordenada en el mismo proveído donde se daba inicio a la audiencia. Lógicamente, la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098 comenzó sin la presencia de la asistencia letrada del amparado, lo que obligó a este

último a manifestar su “deseo” de contar con un abogado en dicha audiencia.

Siendo que el interno no sabe leer ni escribir, no puede negarse la necesidad de que cuente con asistencia letrada. Consecuentemente, debió suspenderse la audiencia a pedido del interno “*a efecto de notificar al Defensor Oficial de lo manifestado por el amparista*”. Finalmente, la audiencia fue reanudada en presencia de la Defensora Oficial. Puede agregarse a lo expuesto que la autoridad requerida había comparecido a la audiencia con asistencia letrada.

En oportunidad de resolver, se rechazó la acción interpuesta. Para así decidir en referencia a hechos de violencia y abuso sexual denunciados, el Juez Federal sostuvo que “*...atento a la gravedad de los hechos y no pudiendo ser subsanados en el marco de la presente interposición de hábeas corpus, debiendo aunar todos los medios a fin de investigar de manera minuciosa y en un amplio marco probatorio...*”. Así, se resolvió extraer copias de las partes pertinentes del expediente para averiguar la posible comisión de un delito de acción pública. Lo expuesto contradice la doctrina emanada del fallo de Cámara Federal de Apelaciones de la Plata que fue comentado en extenso en el apartado anterior, y que afirmó que mediaba indebido agravamiento de las condiciones de detención en los términos del artículo 3 y 4 de la Ley 23.098 ante hechos de violencia, tortura y malos tratos propinados a las personas que se encuentran privadas de su libertad.

No puede dejar de señalarse que habiéndose ordenado el traslado del amparista al Cuerpo Médico Forense con el objeto de realizarle un amplio examen médico, ello no fue realizado por el Servicio Penitenciario Federal. Así, se dispuso el rechazo de la acción aunque no se realizó diligencia alguna a fin de constatar los graves hechos de violencia y abuso sexual que alegó haber padecido el interno.

4.2. Hábeas Corpus interpuesto a favor de un detenido en Santiago del Estero sin auto de procesamiento ni prisión preventiva

El Sr. XXX fue detenido en el mes de abril de 2009 por la Policía de la provincia de Santiago del Estero y puesto a disposición de la justicia de esa provincia, sin que se dictara –conforme lo establecen las disposiciones de la ley santiagueña– su procesamiento.

Resulta importante destacar que cuando una detención no se ajusta a los

requisitos constitucionales¹³ y legales¹⁴, la misma resulta ilegal.

En julio de 2010, y tras 16 meses de detención sin auto de procesamiento ni prisión preventiva, la Procuración Penitenciaria de la Nación, junto con la Organización no gubernamental Asociación por los Derechos Civiles (ADC), presentó una acción de hábeas corpus a su favor, por encontrarse ilegítima y arbitrariamente detenido. Ello, con el agravante que en su detención fue golpeado en diversas oportunidades, y sujeto a diversas prácticas abusivas.

En tal sentido, esta Procuración dijo que la detención del Sr. XXX constituía una detención ilegal, según los parámetros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por no ajustarse a los requisitos constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico interno. Además de estarse vulnerando la presunción de inocencia, se conculcaba el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad.

El Juzgado Federal N°3 de Morón, que se encontraba de turno el día de la presentación de la acción de hábeas corpus, decidió solicitar un examen médico al Sr. XXX, pidió informes sobre su “perfil psicológico” al Servicio Penitenciario Federal y solicitó a la justicia de Santiago del Estero que informara sobre la situación procesal del nombrado.

Tras innumerables gestiones por parte del Juzgado Federal, una dependencia judicial de la Provincia de Santiago del Estero remitió –vía fax– un informe, que si bien hacía referencia a dos causas judiciales en las que XXX se encontraría imputado, nada decía sobre auto de procesamiento alguno u órdenes de prisión preventiva dispuestas.

Además de esa constancia, surgía del expediente de hábeas corpus que antes de la remisión del informe referido, el secretario del juzgado federal de Morón había mantenido una comunicación telefónica con dependientes de los juzgados en lo

¹³ Todo arresto debe realizarse con orden escrita de autoridad competente.

¹⁴ Según el Código de Procedimientos Criminal y Correccional de la Provincia de Santiago del Estero, el auto de procesamiento “[...] será fundado y deberá contener, bajo pena de nulidad: 1°.- Las Generales del imputado; 2°.- Una somera enunciación de los hechos que se le atribuyan; 3°.- La calificación legal del hecho, con la mención de las disposiciones aplicables; 4°.- El dispositivo; 5°.- La firma del juez y el secretario.” (art. 259). Asimismo, y tal como lo establece el art. 261 del mismo cuerpo legal, el procesamiento es condición para la prisión preventiva. Finalmente, el art. 266 establece: “Si en el término fijado por el artículo 258 el juez juzgare que no hay mérito para dictar auto de procesamiento y no procede sobreseer, dictará auto que así lo declare, sin perjuicio de proseguir la investigación. Si hay detenidos, se ordenará su libertad, después que el librado haya constituido domicilio”.

Criminal y Correccional de Santiago del Estero de primera, segunda y tercera nominación, en la que se le comunicó la tramitación de varias causas judiciales, pero en las que no constaba la condición de procesado, y por otro lado, el Juzgado N°2 había informado que *“el nombrado XXX se halla detenido a su disposición, encontrándose a la fecha en situación de simple detención y con plazo para el dictado de prisión preventiva”*.

En fecha 23 de julio de 2010, se tomó audiencia a la que compareció únicamente el interno. Surge del acta de la audiencia, que el Sr. XXX ratificó la presentación realizada por esta Procuración Penitenciaria, alegando estar detenido desde abril de 2009 sin que se haya resuelto su situación procesal y considerando arbitraria su detención por no existir orden alguna que ameritara la misma.

Con estos elementos, el Juzgado Federal N°3 de Morón terminó declarándose *incompetente* “a favor” del Juzgado de Nominación, que por turno correspondiera, de Santiago del Estero y *requirió* al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz del S.P.F. que arbitrara *“los medios conducentes para que se le brinde al interno de marras la atención y estudios médicos que correspondan...”*.

La sentencia de incompetencia dictada por el juzgado federal fue apelada por la Procuración y por el Defensor Oficial. El 28 de julio de 2010, habiéndose concedido el recurso interpuesto por el Defensor Oficial, y entendiendo que con la asistencia de este último se salvaguardaba la defensa de derechos del accionante, se rechazó el recurso interpuesto por la Procuración, alegando la falta de legitimación procesal de este Organismo para recurrir, toda vez que no revestía –al entender del juez de la causa– calidad de parte.

La Procuración Penitenciaria interpuso recurso de queja por apelación denegada, donde se señalaba la disconformidad con el desconocimiento de la facultad de recurrir una decisión judicial dictada en el marco de una causa en la que se ventilan cuestiones relativas a la protección de los derechos fundamentales de una persona privada de su libertad bajo jurisdicción federal, la que incluso, había sido iniciada mediante una presentación de este organismo.

Se argumentó que la sentencia resultaba arbitraria, puesto que si el juez se declaró incompetente resulta contradictorio que ordene al S.P.F. diligencias a favor de la salud física y mental del amparado, las que son ordenadas por fuera del ámbito protector del hábeas corpus. En síntesis, el fallo implicaba una interpretación restrictiva y desnaturalizadora de las normas que regulan el instituto del hábeas corpus. Por otra

parte, se indicaron otras irregularidades del trámite que se implicaban –desde el punto de vista de este organismo– violaciones claras al derecho de defensa en juicio del amparado y privaron de sustento a la resolución que se impugnaba.

Así lo entendió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; que resolvió –en fecha 30 de julio de 2009– declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la Procuración Penitenciaria, y reconoció legitimación a este organismo para litigar por la vía del hábeas corpus en defensa de los derechos humanos de las personas comprendidas en su mandato.

En fecha 3 de agosto de 2010, la Sala II de la Cámara revocó la resolución de primera instancia, en cuanto declaraba su incompetencia y fijó la competencia de la justicia federal para entender en la acción de hábeas corpus. Asimismo, ordenó comunicar inmediatamente a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Santiago del Estero la decisión adoptada.

El 4 de agosto de 2010, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la ciudad de Santiago del Estero ordenó el procesamiento de XXX, y convirtió en prisión preventiva la “simple detención” del nombrado, lo que fue notificado al día siguiente, en la audiencia.

En fecha 5 de agosto de 2010 se realizó la audiencia establecida por el artículo 14 de la Ley 23.098. El mismo día, el Juez Federal subrogante, Dr. Juan Pablo Salas, dictó sentencia resolviendo no hacer lugar a la libertad solicitada por el Sr. XXX, en virtud del procesamiento dictado el día anterior por la Justicia Provincial de Santiago del Estero. Así, rechazó parcialmente la acción de hábeas corpus. Aunque hizo lugar al mismo en lo que hacía a la pretensión del Sr. XXX de regresar a Santiago del Estero, en donde residen sus allegados; con quienes había perdido contacto desde su traslado a las unidades de detención ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, y luego de señalar que en virtud de la prisión preventiva dictada el día anterior debían desecharse los presupuestos que viabilizaban la procedencia de la acción de hábeas corpus deducida, el sentenciante afirmó que *“No escapa que la resolución fue dictada el día de ayer, y si bien regulariza la situación, también indica que desde el mes de abril de 2009 se encontraba en situación precaria, que no obstante el suscripto no puede resolver aún cuando ofenda el sentido de justicia, por el que cualquiera sea la resolución dado el tiempo transcurrido se tornaría injusta”*.

Aquella resolución de la Justicia de Santiago del Estero, que dispuso el procesamiento de XXX (sin hacer mérito alguno de los elementos del caso, incluyendo

nada menos que un pedido de nulidad de todo lo actuado deducido por la fiscal del caso), fue inmediatamente apelada por la defensa del imputado.

Al día de cierre de este informe, a mediados de abril de 2011, es decir ocho meses después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Santiago del Estero no ha resuelto el recurso. En vista de lo cual, XXX permanece aún detenido, actualmente en la Unidad N°35 del S.P.F.

4.3. Hábeas corpus a favor de los internos alojados en el Pabellón “F” de la Unidad Residencial de Ingreso del Complejo Penitenciario Federal N°I de Ezeiza

Personal dependiente de esta Procuración se entrevistó con 25 (veinticinco) de los 28 (veintiocho) internos alojados en el Pabellón “F” de la Unidad Residencial de Ingreso del C.P.F. N°I. En dicha oportunidad *todos* los entrevistados, *sin excepción*, refirieron estar pasando mucha hambre. Así, el tema recurrente en las entrevistas fue el relativo a la escasa alimentación que recibían, siendo este –prácticamente– el único tema al que hacían referencia los internos, con un grado de desesperación preocupante. A su vez, alegaron estar desprovistos de los utensilios de cocina indispensables para alimentarse. Así, los alimentos eran vertidos en botellas de plástico cortadas, sin cubiertos para llevar el alimento a la boca o vasos para ingerir líquido. Con ello, la Procuración interpuso una acción de hábeas corpus a favor de dichos internos.

El Juez a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de hábeas corpus interpuesta, en lo relativo a las condiciones en las que se suministraba la alimentación de los internos, pero rechazó la acción en lo relativo a la calidad y suficiencia de la alimentación proporcionada, por entender “...*que en punto al reclamo referido al tipo de alimentación que se entrega a los internos del citado pabellón [...] no se encuentra en crisis la aptitud para su consumo*” (el resaltado nos pertenece). Ello, bajo el pretexto de que la cantidad y la calidad de los alimentos eran monitoreadas por un profesional idóneo en la materia.

En tanto dicho profesional no fue individualizado ni consultado, ni se acompañó constancia documental alguna que certificara su efectiva intervención, es que esta Procuración Penitenciaria interpuso recurso de apelación contra la parte de la sentencia que rechazaba la acción, por considerar que la actividad probatoria desplegada en primera instancia resultaba insuficiente, y que no se había aportado prueba alguna relativa a verificar la calidad y suficiencia de la alimentación suministrada. El recurso

fue concedido y se radicó en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

En oportunidad de resolver, la Sala N°III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la PPN, revocó parcialmente la resolución del *a quo* y ordenó la apertura a prueba de la causa por el término de diez días, con la finalidad de requerir a la Dirección del C.P.F. N°I de Ezeiza todas las constancias documentales referidas al régimen alimentario de los internos y que se tomara declaración testimonial al médico nutricionista de la unidad y a un médico de guardia que hubiere tomado intervención en las tareas de monitoreo y control de los alimentos.

Vueltas las actuaciones al juzgado de origen, se sustanció la prueba ordenada por el superior. Así, de la declaración testimonial de la nutricionista de la unidad surgió que era la única licenciada en nutrición en todo el Complejo (donde se encuentran alojadas alrededor de 1.800 personas) y que prestaba funciones tres veces por semana en horario de 8:00 a 14:00 hs, que el control de los alimentos los realizaba en distintos horarios, con lo cual en alguna oportunidad la comida ya había egresado hacia los distintos módulos y que no se dejaba constancia documental del efectivo control de los alimentos suministrados a los internos.

Por su parte, entre las cuestiones debatidas en el marco de la audiencia del artículo 15 de la Ley 23.098, cabe hacer hincapié en los dichos del Jefe de Economato, quien señaló que en muchas ocasiones se veían obligados a modificar los menús diagramados por la nutricionista, ya que en reiteradas oportunidades debían pedir “fiado” los alimentos a los proveedores. Con ello, las variaciones en el menú se realizaban en virtud de los alimentos que los proveedores entregaban. Ello, a la vez que confirmaba las irregularidades en materia de alimentación a las que se había hecho referencia en la acción de hábeas corpus, revelaba una problemática presupuestaria que debía ser necesariamente resuelta si no quería dejarse a merced de la voluntad de los proveedores la correcta alimentación de los internos del complejo, sujetándola a los menús preestablecidos por un profesional idóneo en la materia.

Sustanciada la prueba, el Juez Federal a cargo del Juzgado N°1 de Lomas de Zamora, resolvió hacer lugar a la acción de hábeas corpus en lo atinente a la calidad y suficiencia de la alimentación proporcionada a los internos del mencionado Pabellón, ordenando a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal que arbitrara los medios necesarios para la regularización de la provisión de los alimentos indicados en

los distintos menús preestablecidos a los efectos que los mismos no sufrieran modificaciones por parte de las empresas proveedoras. Asimismo, y ante la presencia de una sola licenciada en nutrición en todo el Complejo, exhortó a dicha Dirección Nacional a arbitrar los medios necesarios para que tal situación sea convenientemente atendida. Por su parte, ordenó al C.P.F. I que dejara debida constancia documental del proceso de degustación de los alimentos que realizan los médicos de guardia, nutricionista y personal de ese S.P.F. previo a su entrega a los internos, requiriendo que la entrega final de esos alimentos –realizada por los mismos internos– fuera supervisada por personal del S.P.F. y encomendando a que se dejara constancia de la entrega de las cuatro comidas diarias a los internos, debiéndose dejar asentados aquellos casos en los cuales las comidas fueran rechazadas por la población penal.

De esa decisión apeló el S.P.F., manifestando que la misma era contradictoria y que no existía prueba de que se hubieran agravado ilegítimamente las condiciones de detención, excediendo lo decidido el acotado marco de conocimiento propio de una acción de hábeas corpus.

El 19 de enero de 2011 la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó los puntos IV y VI de la sentencia de primera instancia, en cuanto exhortaba a la Dirección Nacional del S.P.F. a que atienda la situación de que sólo existe una licenciada en nutrición para solventar las necesidades de todo el Complejo, así como también ordenaba a la misma Dirección Nacional que arbitrara los medios necesarios para regularizar la provisión de alimentos, por parte de las empresas contratadas. Asimismo, la Cámara entendió que los puntos II, III, y en forma parcial, el punto V de la sentencia resultaban insustanciales por tardíos. Así, entendió que de lo resuelto por el juez de grado sólo resultaba útil y pertinente para asegurar el control de la alimentación suministrada a los internos la parte del punto V que encomendaba a la máxima autoridad de la unidad carcelaria que dejara constancia de la entrega a los internos de las cuatro comidas diarias y, en su caso, el rechazo de estas comidas por parte de la población carcelaria.

Contra esta sentencia, la Procuración Penitenciaria interpuso recurso de casación. En cuanto a *la exhortación* del juez de primera instancia a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal *a que atienda la situación de que sólo existe una licenciada en nutrición* para solventar las necesidades de todo el Complejo, la Cámara sostuvo que “*Esta exhortación es ajena a la naturaleza de la presente acción y además implica una intromisión indebida en las decisiones propias del Poder Ejecutivo*

Nacional del cual depende la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, en cuanto a la oportunidad, mérito y conveniencia de ampliar la planta de personal afectado al Economato del establecimiento carcelario”.

En relación a este argumento, esta Procuración entendió que no asistía razón al sentenciante por dos razones diferentes. En primer lugar una exhortación no es un imperativo. Exhortar, según la Real Academia Española, significa: “*Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo*”¹⁵. Con este alcance, mal puede entenderse que exhortar a un Poder del Estado a que adecue una situación de hecho que puede afectar un derecho cuyo raigambre es constitucional –el derecho a una alimentación adecuada– constituye una intromisión indebida en las decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional.

En segundo lugar, la presencia de personal idóneo para corroborar la calidad y suficiencia de la comida que es entregada a los internos hace a la efectiva vigencia del derecho a la alimentación adecuada que asiste a quienes se encuentran privados de su libertad. Por ello, no puede sostenerse válidamente que las órdenes emitidas por parte del órgano judicial, y menos aún una mera exhortación, resultan una intromisión en competencias propias de otro poder del Estado. La ausencia de personal suficiente que monitoree la calidad de los alimentos que se proveen a la población carcelaria puede resultar una afectación al derecho a la salud de estos últimos y el Poder Judicial debe fallar de forma tal de remover las situaciones que resulten gravosas para la debida salvaguarda de los derechos en juego.

Así, la omisión de la Administración de crear las condiciones adecuadas en la que se desarrolla la privación de la libertad de los internos alojados en el Pabellón “f” de la Unidad Residencial de Ingreso del C.P.F. I debe ser sometida al control judicial. Entonces, no corresponde que el magistrado se exima de ese deber si la omisión contraria a Derecho por parte del Servicio Penitenciario Federal es violatoria de derechos. La falta de licenciados en nutrición que controlen la alimentación que es suministrada a los internos, es una omisión de la Administración contraria a derecho. Más aún, la abstención de obrar de la Administración, de forma de garantizar que la alimentación de los internos *sea adecuada*, es *per se* una actitud *inconstitucional*, y es deber de los jueces que la declaren como tal.

En cuanto a la consideración de la Cámara de que lo relativo a la planta de

¹⁵ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura

personal afectado al Economato del establecimiento carcelario es una cuestión de “*la oportunidad, mérito y conveniencia*” de la Administración, esta Procuración consideró que no se encontraba, en este caso, frente a un supuesto de sustitución de criterio de oportunidad, mérito y conveniencia, así como tampoco se estaban afectando facultades discrecionales de la Administración Nacional, ni el principio de división de poderes. Más bien se observó que se encontraba en juego la vigencia de derechos de raigambre constitucional, los cuales se veían afectados por un modo de proceder del S.P.F. que traía aparejado consecuencias nocivas para las personas privadas de su libertad. Se consideró que ante casos como ese, el control judicial resulta válido, así como también la disposición que fija un límite que la Administración no puede traspasar, y más aún la *exhortación –incitación–* a que la Administración ajuste su conducta a derecho.

Luego, tras considerar que no existía “*intromisión indebida en las decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional*”, se señaló las circunstancias de hecho que ameritaban el debido control judicial. En este sentido, se puso de resalto la imposibilidad fáctica de que un solo profesional en nutrición (que trabaja sólo 18 horas semanales) se encontrara en condiciones de controlar la correcta y suficiente alimentación de todo un Complejo Penitenciario.

Este hecho se desprendía de los dichos de la misma Dra. Luciana Di Caterina, quien expresó que era la única nutricionista, tanto para las distintas Unidades Residenciales del establecimiento carcelario, como para el Sector de Sanidad del mismo. Esto implicaba controlar la alimentación de aproximadamente 1.800 internos de los distintos módulos residenciales y personal fajinero, siendo que existía un menú genérico y varios específicos. Asimismo, la doctora había manifestado que, además, brindaba asistencia a la población penal en cuanto a pedidos de interconsulta de otros médicos o audiencias solicitadas por los mismos internos.

En tal sentido, este organismo consideró que resultaba a todas luces insuficiente que sólo hubiera un único médico especialista en nutrición que prestara funciones tan sólo 18 horas semanales (3 veces por semana en el horario de 8 a 14 hs.) para controlar la alimentación de 1.800 personas.

En segundo término, y tal como resultara de los dichos de la Dra. Di Caterina, era evidente la imposibilidad de controlar efectivamente la calidad, cantidad y nivel nutricional de la alimentación. Es así que la doctora afirmó que su función de control de los alimentos consistía en observar el menú que se elaboraba en la cocina, para lo cual concurría a distintas horas, “*razón por la cual a veces la comida ya había egresado*

hacia los distintos módulos”, ergo, la comida no era controlada. Asimismo, en la declaración testimonial, manifestó que ella realizaba el control del gramaje de algunas dietas que salían individualizadas de la cocina, “no así de aquellos alimentos que egresaban en bachas a granel, por la dificultad que ello implicaba”.

Esto fue confirmado cuando se le preguntó si dejaba constancia documental de la verificación y aprobación de la comida suministrada a la población carcelaria en forma diaria, a lo que había respondido que no.

Esta insuficiencia de recursos humanos no resultaba salvada por el hecho de que los médicos de guardia refirieran ocuparse también del control de la alimentación; ya que esa obviamente no era la única función que desempeñaban, tal como había sido manifestado por el Dr. Gustavo de Aboitz. Es así que alegaron que se encargaban de revisar a los internos en casos de emergencias, comparendos y procedimientos de requisita y, si todavía disponían de tiempo, se encargaban del control de la alimentación.

Asimismo, y según sus propios dichos, el control de la calidad, cantidad y nivel nutricional de la alimentación suministrada a los internos era efectuado únicamente por la nutricionista, quien –recuérdese– sólo concurría 3 veces a la semana en el horario de 8 a 14 hs.

En el recurso de casación interpuesto, este organismo consideró que de más estaba decir que la decisión del Juez de Primera Instancia, de *“exhortar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que ante la presencia de tan sólo una licenciada en nutrición que presta funciones en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, arbitre los medios necesarios para que tal situación sea convenientemente atendida”*, no resultaba suficiente, ya que resultaba sumamente grave que la calidad de la alimentación de 1.800 personas no fuera eficientemente controlada, y que se pretendiera que una persona que trabaja sólo 18 horas a la semana y otros médicos que seguramente estarían sobrecargados de otras funciones más urgentes –como lo son los galenos de guardia– pudieran controlar la alimentación de todo un Complejo Penitenciario.

En otro sentido, y respecto a las porciones de comida que recibía cada interno, se explicitó que las mismas no eran controladas por el S.P.F., lo que surgía de lo dicho por la Licenciada en Nutrición, quien en su declaración testimonial había aclarado que ella no se encargaba, y que *“creía que un interno fajinero se encargaba de porcionar las comidas en los pabellones de cada módulo”*.

Asimismo, el único control que refirió realizar respecto a la suficiencia de la comida era de vista, el cual según ella resultaba efectivo para establecer que la cantidad

resultaba suficiente para la totalidad de los internos alojados.

En cuanto a la declaración testimonial del médico de guardia, al ser consultado respecto a la forma en la que se racionaban las porciones de comida, respondió que *“desconocía cómo se efectuaba la racionalización y distribución de la comida [...] pero que le constaba que la misma al arribar a los distintos pabellones de los diversos módulos, era repartida por los internos fajineros asignados”*.

Es así que el interno presente en la audiencia del hábeas corpus había manifestado ser quien se encargaba de asignar las porciones al resto de los internos, y que realizaba dicha tarea haciendo el cálculo de cuántos internos había en el pabellón y, en base a ello, dividía las porciones.

En este aspecto, se puso de resalto que resultaba sumamente irresponsable y peligroso, por parte del S.P.F., dejar librada la suficiencia o no de la alimentación de los internos puestos bajo su guarda, en la posible arbitrariedad o, en el mejor de los casos, discrecionalidad de otro preso.

En relación al *punto VI* de la sentencia del 29 de diciembre de 2010, el magistrado de primera instancia había dispuesto *“ORDENAR a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal que se arbitren los medios necesarios para la regularización de la provisión de los alimentos indicados para los distintos menús preestablecidos, por parte de las empresas contratadas a tales fines; ello a los efectos de que los mismos no sufran modificaciones”*.

Dicha decisión había tenido en cuenta las manifestaciones vertidas por el Jefe del Sector Economato del C.P.F. I (Sr. Roberto Gustavo Menes), quien –en la audiencia celebrada en los términos del art. 15 de la Ley 23.098– había manifestado *“que muchas veces debían pedir fiado los alimentos al proveedor y abonarlos luego, y que por la buena voluntad de los proveedores recibían alimentos; pero que si bien se efectuaba la orden de pedido, en muchas ocasiones se veía en la necesidad de modificar el menú de acuerdo a los alimentos que aquellos le daban”*.

Es decir, el encargado directo de la elaboración de la comida entregada a los presos había reconocido ante el Juez de la causa la falta de cumplimiento de los menús formalmente establecidos, debido a atrasos en los pagos a los proveedores por parte del propio S.P.F.

Esto hacía razonable la orden de regularizar la provisión de alimentos por parte de los proveedores, en la medida que ello era condición para el cumplimiento de los menús por parte de la unidad penitenciaria.

A pesar de la claridad de la situación descrita por el agente penitenciario mejor informado acerca de la situación “administrativa” apuntada, de las obvias consecuencias que ésta traía sobre la provisión de alimentos a los detenidos (por no mencionar la probabilidad de que los proveedores decidiesen unilateralmente dejar de “fiar” los alimentos, interrumpiéndose la provisión de materias primas), y del carácter bastante habitual de ese estado de cosas, el Tribunal de Alzada decidió revocar el punto VI de la sentencia del juez de grado, Dr. Santa Marina.

La coherencia entre la decisión del juzgado de primera instancia (que no hacía más que ordenar que se regularizara una situación irregular que venía afectando los derechos de los amparados) contrastaba notoriamente con la ausencia de fundamentación de la sentencia que la revocó.

En efecto, acerca de este punto, la sentencia del 19 de febrero de la Cámara Federal de La Plata sostenía por todo fundamento (punto 5 de los considerandos): *“tal como lo sostienen la defensa y el magistrado, las manifestaciones vertidas por el jefe del Economato en la audiencia glosada a fs. 166/168 y vta., no revelan que la forma de pago y adquisición de los alimentos destinados al Complejo Penitenciario no fueron la causa de las falencias denunciadas en autos. Por ello, la orden a la Dirección Nacional de que arbitre los medios necesarios para regularizar la provisión de los alimentos, por parte de las empresas contratadas a tales fines no aparece como razonable y excede el objeto concreto de la presente acción”*.

Ante ello, cabe referirse a lo que el magistrado de primera instancia efectivamente había dicho. De cualquier modo, se hizo referencia a lo que razonablemente parecía haber querido decir el sentenciante de segunda instancia.

El *a quo*, en la sentencia revocada, había considerado que los problemas administrativos no habían alterado la efectiva provisión de comida, pero sí el cumplimiento de los menús. Es decir, que los presos normalmente comían (algo) en el marco de la situación anómala reconocida; aunque eso que comían no era lo que había establecido el propio S.P.F. como menú.

El juez, en una palabra, había advertido que el agravio estaba determinado por la distancia –según parecía habitual– entre los menús fijados y lo efectivamente recibido por los presos. Y no en la completa ausencia de alimentación (que por cierto nadie alegó en esa causa).

De modo que parecía que la Cámara había entendido que el hecho de recibir comida (cualquiera fuera ésta) resultaba suficiente para considerar a salvo el derecho a

la alimentación de los presos.

Ese criterio sería difícil de sostener en abstracto (ya que es bastante obvio que “comer” no es lo mismo que “alimentarse”). Pero que en el marco de ese proceso devenía directamente imposible, ya que había sido la propia administración penitenciaria la que había basado su defensa en la existencia de menús supuestamente aprobados y supervisados por especialistas. Mediante lo cual había reconocido implícitamente el hecho de que no cualquier comida resultaba idónea para satisfacer el derecho de los detenidos a recibir una alimentación adecuada y digna.

Como vemos, se había desarrollado un debate en el que la Administración había pedido el rechazo del hábeas corpus esgrimiendo la existencia de menús y de nutricionistas; aunque reconociendo que éstos tenían una existencia meramente teórica.

Ante esto, la Cámara, mediante su decisión revocatoria, soslayó el nexo causal señalado por Jefe de Economato entre las falencias administrativas apuntadas y la falta de cumplimiento de dichos menús; y entre ese incumplimiento y el déficit alimentario denunciado como acto lesivo.

De lo cual se desprendería que una parte muy considerable del debate había girado en torno de menús que, si nos ateníamos a lo decidido por la Cámara, podrían no existir, ya que bastaría con que los presos comieran, sin importar demasiado qué comían.

Lo dicho hasta aquí apuntaba a poner en evidencia la inconsistencia de la decisión concreta que había revocado el punto VI del pronunciamiento de primera instancia con los elementos reunidos en la causa y las conclusiones que razonablemente podían extraerse a partir de ellos.

Sin perjuicio de apuntar que el razonamiento que ensayáramos intentaba centrarse en lo que la sentencia parecía haber querido decir; pero no necesariamente en lo que ésta efectivamente sostenía como “fundamento”.

Al respecto, debe señalarse que el único párrafo que se había dedicado a fundar esa decisión¹⁶, leído literalmente, no dice lo que el decisorio hubiera requerido para ser coherente con su fundamento. La doble negación en que se incurre en los considerandos, en efecto, estaría indicando que sí existe el nexo de causalidad que el decisorio finalmente termina negando.

Por último, en el recurso se señalaba que mientras el proceso judicial seguía su

¹⁶ “...tal como lo sostienen la defensa y el magistrado, las manifestaciones vertidas por el jefe del Economato en la audiencia glosada a fs. 166/168 y vta., no revelan que la forma de pago y adquisición de los alimentos destinados al Complejo Penitenciario no fueron la causa de las falencias denunciadas en autos”.

curso, la situación de los detenidos amparados distaba de haberse solucionado, según surge de un informe de fecha 19 de enero de 2011, realizado por la Auditoría de Unidades Penitenciarias de la PPN en la Unidad Residencial de Ingreso (URI), Pabellón F del C.P.F. I, que revela que tras entrevistar a 10 detenidos y ser consultados sobre temas relativos a la alimentación, todos los entrevistados afirmaron que el Servicio Penitenciario sólo entrega 2 comidas diarias en concepto de almuerzo y cena. En tal sentido, se pudo constatar que los detenidos alojados en el pabellón F no reciben ni desayuno ni merienda y que sólo 2 de los 10 entrevistados dijeron tener conocimiento de que la entrega de ambas comidas por parte del S.P.F. es obligatoria.

Por otra parte, un detenido señaló que dos veces a la semana se les entrega leche en polvo. Cuando los internos fueron consultados por los alimentos que integran el almuerzo y la cena, ofrecieron diversas versiones entre las que prima la entrega mejorada –en relación a lo que venían recibiendo– ya que refirieron que los menús entregados son más variados. Si bien algunos presos hicieron hincapié en la variedad, otros –en igual proporción– aseguraron que, si bien los alimentos no suelen reiterarse como antes, la comida es “*incomible*”, “*una porquería*”, “*un asco*” y que el tamaño de las porciones es “*para una criatura*”. Asimismo, varios mencionaron que la carne llega mal cocida y que se trata de “*puro hueso*”. Otros afirmaron que la comida tiene mucho aceite y que es una mezcla de “*grasa y huesos, no es ni caldo*”. Al ser consultados por el suministro de utensilios con los cuales comen, sólo algunos manifestaron que se les entrega una cuchara de metal, la cual dificulta el corte de la carne. Otros dijeron que comen con cubiertos porque se los traen sus familias, ya que el S.P.F. no los brinda. Por último un detenido aseguró que tanto él como otros compañeros de alojamiento deben comer con las manos y que, en algunas oportunidades, se ayudan con cáscaras de naranja que ellos mismos dejan al sol para que se endurezcan y haga las veces de cuchara.

Finalmente, en las entrevistas referidas se relevó *que la entrega de las comidas continúa bajo la órbita de los propios detenidos*, ya que el Servicio Penitenciario sólo se encuentra presente al momento del reparto en forma ocasional y con la exclusiva función de facilitar la apertura de las celdas para que se efectúe la entrega de la bandeja individual correspondiente.

El 24 de febrero de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió conceder el recurso de casación interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación.

En fecha 11 de mayo de 2011 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió favorablemente el recurso interpuesto por la PPN, mediante un fallo que constituye un valioso precedente en cuanto a la protección de los derechos de las personas detenidas. Así, la Cámara de Casación ordenó al Director del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a que en un plazo de 30 días establezca un protocolo de actuación de las áreas competentes que garantice un patrón de control interno diario, que los alimentos sean distribuidos sin discriminación, que asegure la intervención de las áreas internas para obtener los medios financieros necesarios, así como también recomendó al Director Nacional del S.P.F. que considere la plausibilidad de introducir un protocolo de fiscalización de la aplicación eficaz de las reglas relativas al tratamiento de las personas privadas de libertad para impedir tratos crueles. Los jueces fundamentaron el fallo haciendo referencia a distintos tratados internacionales de derechos humanos, y jurisprudencia y opiniones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Europeo Contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos entre otras citas.

4.4. Hábeas corpus interpuesto en favor de los internos alojados en el Pabellón 3, Módulo V del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz

En el marco del trabajo que realiza el Equipo de Trabajo “*Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad*” se realizaron visitas regulares al Módulo Residencial V del Complejo Penitenciario Federal II –Anexo CFJA– Marcos Paz, en las cuales se constató que las personas detenidas en el Pabellón 3 (de entre 18 y 21 años de edad) se encontraban sometidas a un régimen aislamiento en celda individual de 22 horas y media diarias¹⁷.

En virtud de lo expuesto, con fecha 3 de noviembre de 2010, este organismo interpuso acción de hábeas corpus correctivo colectivo, en los términos del artículo 43 *in fine* de la Constitución Nacional y la Ley 23.098, por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que afectaba a las personas alojadas en el nombrado pabellón.

Ante esa acción judicial, el Juzgado procedió, el mismo día y sin mediar otro acto procesal de interés, a dictar una providencia, solicitando al Servicio Penitenciario Federal diversos informes relacionados con la situación de hecho denunciada.

¹⁷ Véase capítulo VIII “Jóvenes adultos en cárceles federales” en este mismo Informe Anual.

Recibidos los informes remitidos por el S.P.F. y sin que se confiriese sustanciación alguna que permitiese a la PPN tomar intervención alguna en la causa, el Juzgado dictó sentencia, el día 5 de noviembre, mediante la cual resolvió: “I.- DESESTIMAR el HÁBEAS CORPUS interpuesto en la causa N°4581 [...] (artículos 3 “a contrario sensu” y 10 de la ley 23.098). II.- ELEVAR en consulta el presente a V.E. conforme las previsiones del art. 10, segundo y tercer párrafo, de la ley 23.098. [...]”.

El mismo 5 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones recibe la causa en consulta y la Sala II Secretaría Penal N°2 de la Cámara resuelve –esa misma tarde– “CONFIRMAR la resolución de primera instancia, sin costas (art. 10, segundo párrafo, ley 23.098)”. Sin embargo, esta decisión *no* fue notificada a la PPN.

El mismo 5 de noviembre –poco más de dos horas después de haber sido notificada de la existencia del rechazo en primera instancia– la Procuración Penitenciaria interpuso formal recurso de apelación; el cual no fue tratado por el Juzgado de Primera Instancia, ni por la Cámara que intervino en el tratamiento “en consulta” de la sentencia de fecha 5 de noviembre.

Una vez que había mediado la resolución confirmando lo actuado en primera instancia, se procedió a dar un escueto tratamiento a la apelación de esta Procuración, al establecer el juez de grado “...rechazase por improcedente el recurso de apelación interpuesto, conforme lo normado por los artículos 10 y 19 párrafo segundo de la ley 23.098”.

Ante esa resolución, la PPN interpuso formal recurso de queja por apelación denegada. La Cámara Federal de Apelaciones resuelve rechazar el recurso de queja teniendo en cuenta que “...el procedimiento de consulta materializado en el legajo, ya ha garantizado la intervención de la alzada”¹⁸.

El 3 de diciembre de 2010 el Juzgado Federal N°2 Secretaría N°5 autorizó a la Procuración Penitenciaria a la compulsión y extracción de copias de la causa N°4581 caratulada “Procuración Penitenciaria de la Nación s/ hábeas corpus”. Recién en esta oportunidad la Procuración toma conocimiento de la Resolución de la Cámara de Apelaciones de fecha 5 de noviembre de 2010; esto es, casi un mes después de dictada la resolución.

¹⁸ Sala II Secretaría Penal N°2 de la Cámara Federal de Apelaciones; Expte. N°5709 caratulada “*Rec. de queja interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación*”.

Contra la resolución del 5 de noviembre, esta Procuración Penitenciaria interpuso recurso de Casación por entender que las irregularidades en el trámite impreso a la causa privaban de sustento a la resolución impugnada.

En el recurso de Casación se señaló que el magistrado, al librar oficios al S.P.F., había dictado el acto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional requiere a la autoridad autora del presunto acto lesivo un informe sobre éste (art. 11, Ley 23.098), y por ende no se encontraba habilitado para rechazar *in limine* la acción de hábeas corpus, pues ese requerimiento implicaba de por sí un “auto de hábeas corpus”. Al rechazar *in limine* la acción, el *a quo* no estaba facultado a “*retrotraer el procedimiento a la situación del art. 10 –momento procesal en que se analiza la procedencia de la acción– y obviar el trámite que había previsto el legislador en estos casos*” (CSJN, *in re* “Haro”, op. cit.).

Asimismo, se alegó que fue consecuencia de esta irregularidad la omisión de citar a la audiencia prevista en el art. 14, según lo ordena el art. 13, ley 23.098. Tal como fuera señalado, y siguiendo la doctrina “Haro”¹⁹, al momento de solicitar los informes pedidos a al S.P.F., el *a quo* ya había considerado la situación como una posible agravación de las condiciones de detención y que sólo así podía entenderse el sentido de realizar un pedido de información a la autoridad denunciada. Sin embargo retrotrajo el procedimiento y dispuso el rechazo *in limine* de la acción colectiva, omitiendo la celebración de la referida audiencia e imposibilitando a las partes y a los amparados de ejercer su derecho a ser oído, de tener contacto con el juez, de cuestionar el informe del S.P.F. y debatir el caso en función de un proceso contradictorio. Todo ello, en violación a lo previsto en los arts. 13 y 14 de la ley 23.098.

Por último, se hizo mención a la carencia de argumentación de la sentencia de Cámara, en oportunidad de pronunciarse en consulta sobre el rechazo *in limine* de la acción, viciando ello a la sentencia como acto jurisdiccional válido.

Debe decirse en este punto que las críticas formuladas precedentemente, fueron acogidas por la Sala de ferias de la Cámara Nacional de Casación Penal, la cual sostuvo en oportunidad de resolver que “...se evidencian irregularidades en el trámite impreso a la causa, que dan razón al recurrente dejando sin sustento la resolución impugnada”.

¹⁹ En “Haro”, la Corte destacó la relevancia de la audiencia como herramienta para hacer efectivo el derecho a ser oído de las partes y de los beneficiarios. De acuerdo a las disposiciones de la ley 23.098, la acción de hábeas corpus prevé una instancia contradictoria o bilateral, oral y en presencia del juez (inmediación). En la oportunidad de la audiencia oral es donde se puede controvertir la información que la autoridad denunciada presentó en la contestación de su informe y ofrecer una versión de los hechos ante el juez, en el marco de un proceso contradictorio.

En esta dirección, se agregó: *“El decreto de fs. 35/36 vta. en el cual se requería informes al S.P.F., entre otras medidas, ya constituía un acto de hábeas corpus en los términos del artículo 11 de la ley, pues importaba poner en marcha el proceso, de modo tal que no se podía retrotraer el procedimiento a la situación del artículo 10 [...] la acción interpuesta exigía de la instrucción el agotamiento de las diligencias necesarias para ser efectiva su finalidad, demanda ésta que al no ser cumplida, torna inválido el pronunciamiento recurrido”*.

Asimismo, agregó que *“...Al ser la acción rechazada in limine, [...] se truncó la posibilidad de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 13 de la ley 23.098 de modo que éstos no pudieron ejercer su derecho a ser oído y llevados sin demoras ante el juez, previsto en distintos pactos internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino”*.

Por último, y con relación al agravio alegado por esta Procuración, relativo a la falta de fundamentación de la sentencia de Cámara, la Sala que resolvió en recurso de casación, citando jurisprudencia del alto tribunal, entendió que *“...en los juicios de hábeas corpus por su estrecha vinculación con grave materia constitucional y esenciales derechos de la persona, aparece inexcusable la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus decisiones [...]”*.

En virtud de lo expuesto es que la Sala de ferias de la CNCP, en un fallo ejemplificador, resolvió *“HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, sin costas, ANULAR el pronunciamiento impugnado y REMITIR en carácter urgente las actuaciones a su origen...”*.

A la fecha del cierre del presente informe, tal como fuera ordenado, las actuaciones se encuentran nuevamente en trámite ante el juzgado de primera instancia, a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos sentados por la Sala de ferias de la Cámara Nacional de Casación Penal.

4.5. Hábeas corpus interpuesto en favor de los internos alojados en el Instituto de Seguridad y Resocialización - Unidad 6 de Rawson

La Procuración Penitenciaria ha venido relevando mediante monitoreos efectuados en los años 2009 y 2010 que la alimentación constituye una problemática sostenida en el tiempo en la Unidad 6 de Rawson, constatando un deficitario sistema de alimentación, que se caracteriza por la mala calidad y escasa cantidad de comida que se les brinda a los detenidos.

En términos de derechos, esta situación genera una vulneración del derecho de toda persona a una alimentación digna, y a la vez un incumplimiento por parte de la Administración penitenciaria de una obligación constitucional, la cual queda establecida, en la legislación internacional, en diversos pactos y tratados internacionales, y en la legislación nacional en el artículo 65 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Las cuestiones relevadas motivaron la realización de la Recomendación N°721/PPN/10 mediante la cual se recomendó al Director del establecimiento arbitre los medios que sean necesarios a fin de efectuar la inscripción y habilitación de la cocina de la cárcel por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.

Posteriormente, en fecha 15 de diciembre de 2010, los presos alojados en el pabellón 15 de la Unidad N°6 presentaron una nota al Delegado de la PPN manifestando los mismos problemas alimenticios antes referidos y solicitando la intervención de la Procuración Penitenciaria dirigida a revertir esta situación. En la misma se señala que la comida que les brinda el penal difiere absolutamente de la mencionada en el menú escrito establecido por el S.P.F., así como la falta de entrega de desayuno y merienda, entre otras muchas cosas²⁰.

Por tal motivo, el día 24 de enero de 2011 la Procuración Penitenciaria interpuso acción de hábeas corpus por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de los internos alojados en la Unidad N°6 de Rawson.

El 14 de febrero de 2011, el Juzgado Federal de Rawson, a cargo del Dr. Hugo Ricardo Sastre, resolvió “*RECHAZAR la denuncia de hábeas corpus formulada a fs. 1/9vta. por el Procurador Penitenciario de la Nación [...]*”. Frente a ello, la PPN interpuso recurso de apelación.

Ante todo, en el considerando I de la resolución el juez de grado refirió “...*Que, en términos generales, el denunciante cuestionó la alimentación que reciben los internos alojados en el Pabellón 15 de la Unidad Carcelaria N°6 de Rawson*”. En relación a ello, debe decirse que esta Procuración promovió acción de hábeas corpus a favor de todos los detenidos alojados en el Instituto de Seguridad y Resocialización. Así, limitar el alcance de la acción a los internos alojados en el Pabellón 15 de la

²⁰ Toda la problemática referida a la deficiente alimentación de los detenidos en la U.6 de Rawson se expone detalladamente en el Capítulo V, “Otras vulneraciones de derechos”, apartado 2 “El déficit alimentario en las cárceles del S.P.F.”, en este mismo Informe Anual.

Unidad N°6 sólo daría una respuesta parcial a la problemática denunciada y a la vez no resulta concordante con lo solicitado en la presentación de inicio.

Además, en la sentencia del Juez de grado no hay elementos suficientes para sostener la inexistencia de agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención; así, en el afán de justificar el rechazo de la acción intentada, el juez de primera instancia invoca los cuestionables elementos de juicio.

En primer lugar, hace mención a un acta de fecha 15 de octubre de 2010, que hace referencia a las condiciones sobre la alimentación y la cocina central de la Unidad N°6. Así, en el párrafo 8° punto II de la sentencia se transcribe parte del acta que indica “*Se ingresa a las tres salas de la Cámara Frigorífica donde hay alimentos (distintos cortes de vaca, pollos, verdura, legumbres y frutas) en cantidad suficiente*” (el resaltado nos pertenece). Debe decirse que los datos que surgen de la parte transcrita no deberían ser tenidos como válidos para decidir sobre el efectivo agravamiento de las condiciones de detención de los internos. Ello, en tanto la *aparente* suficiencia de la comida a la que refiere el juez no resulta un dato concluyente si no se mide en relación a la cantidad de personas a la que está destinada. Por otro lado, debe advertirse que el acta de referencia no es de fecha reciente, y con ello no puede afirmarse en forma cierta que las condiciones que el sentenciante consideró adecuadas en la cocina central *subsistan* a la fecha de interposición de la acción de hábeas corpus.

Por su parte, en el punto II párrafo 9° de la sentencia se hace referencia a una comunicación telefónica mantenida con el Actuario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia en la que se menciona la falta de reclamos de los internos que se encuentran a disposición de dicho Tribunal. En esa comunicación el Actuario simplemente dijo que al momento de entrevistar a los internos “*no formularon queja alguna con relación a la alimentación que recibían en la Unidad*” y que “*nunca expresaron disconformidad alguna con la alimentación recibida en ese establecimiento carcelario*”; pero en ningún momento afirmó que dichos internos hubieren sido consultados al respecto. Esta Procuración entiende cuestionable que hayan sido tenidos en cuenta estos datos para formar la convicción de juez interviniente.

En el punto II párrafo 10° de la sentencia el juez de la causa hace referencia a menús que informa el Servicio Penitenciario Federal (desde el 29 de noviembre de 2010 al 29 de enero de 2011). Al respecto, debe señalarse que el hecho de que el S.P.F. haya remitido esta información no prueba en modo alguno que dichos menús sean los que efectivamente reciben los internos de la Unidad 6 de Rawson. En este sentido, en

relación a la afirmación del juez de Rawson relativa a que “...*los menús que informa el Servicio Penitenciario Federal [...] parecen por demás adecuados y compatibles con una dieta adecuada*”, este Organismo entiende que la efectiva calidad y suficiencia de la alimentación suministrada a los internos debería haber sido verificada por un profesional idóneo en la materia. Más aún, si en la presentación la Procuración solicitó como prueba documentación que tienda a comprobar la efectiva intervención por parte de un nutricionista o médico en el proceso de degustación de alimentos. En este punto, y a modo de ejemplo, en la sentencia relativa a la alimentación en el pabellón F de la URI del C.P.F. I la Justicia dispuso medidas dirigidas a que los menús no sufran modificaciones en la práctica, puesto que se había evidenciado que los detenidos no reciben lo establecido en tales menús.

A la hora de dictar sentencia, el Juez no tuvo en consideración lo dicho durante la audiencia del 8/02/2011, en la que se manifestó que en el mes de noviembre de 2010 se agudizó el problema de la comida, y que el 26/11/2010 se realizó una inspección a la Unidad y “*se constató que en la cocina y en el depósito había escasa comida que vencía el 27*”. Más grave aún, la sentencia recurrida no hace mención alguna sobre los dichos de los internos que prestaron declaración testimonial en la causa.

En tal sentido, el día 25/01/2011, uno de los internos manifestó: “...*recibimos poca comida, sólo nos dan almuerzo y cena [...] las excepciones se hacen cuando hay algún tipo de visita en el penal, recibimos por día una trincha y media de pan por interno, si queremos algo más tenemos que comprarlo nosotros...*”. El mismo día, otro interno expresó: “...*yo no como esa comida, compro todo con mi peculio, que no la como porque le tengo idea...*”.

En igual sentido, la declaración del día 26/01/2011 de otro interno, quien dijo: “...*la alimentación es mala [...] muchas veces es incomible porque viene con olor, mal lavado, mal cocinado, es poca cantidad*”. También el día 26/01/2011 declaró un interno, quien manifestó: “...*la alimentación es mala, es agua, me refiero a la de la noche, yo me manejo con las cosas que me compro en la cantina*”.

Estas declaraciones no hacen más que ratificar irregularidades en cuanto a la calidad y cantidad de la alimentación que les es proporcionada, y resultan contundentes al momento de cuestionar la decisión del juez de primera instancia de rechazar la acción de hábeas corpus.

También debe ponerse de resalto el hecho de que los internos declararon sólo recibir dos (2) comidas diarias (almuerzo y cena), de lo cual puede deducirse que los

menús presentados por el S.P.F. serían falsos, ya que enumeran cuatro (4) comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Por lo menos, resulta cuestionable que el juez no haya corroborado personalmente –mediante una inspección– cuál es la alimentación que efectivamente reciben los internos²¹.

Asimismo, las declaraciones de los internos transcritas son concordantes con los testimonios de los alojados en el Pabellón N°15 de la Unidad 6, escrito que fuera acompañado a la presentación de hábeas corpus, donde manifiestan que “...*existe una lista del menú del interno, donde dice que el interno recibe desayuno, mermelada, fruta, almuerzo con postre y a la tarde merienda, acompañada nuevamente con fruta y a la cena comidas que nunca hemos recibido, todo esto es totalmente falso. Nosotros los internos recibimos desayuno sólo en invierno, cuando el mate cocido que se hace se usa una bolsa de yerba y la misma se la usa todos los días, frutas que recibimos (podridas), almuerzo 2 (veces por semana) trozos de pollo, los demás días polenta sin tuco, con contados trozos de pollo, mejor dicho, menudos” (sic) (el subrayado nos pertenece). Esta presentación fue suscripta por 35 internos del referido pabellón.*

Por otra parte, mención especial debe hacerse respecto a la incomparecencia de algunos internos a la audiencia de hábeas corpus. En fecha 26/01/2011 el Juez libró oficio ordenando el traslado de los mismos a la sede del Juzgado a fin de ser oídos en audiencia, y establecía “*la salvedad de que en caso de negarse a comparecer deberán ser trasladados por la fuerza pública, bajo todos los recaudos de ley*”. Cabe cuestionar el hecho de que el juez de primera instancia no haya cumplido con la orden que él mismo había impartido, ya que se limitó a asentar dicha incomparecencia en el acta de la audiencia, sin haber procurado la manera de recabar esos testimonios, por ejemplo, llevando la audiencia al mismo pabellón –de ser necesario.

La cuestión relativa a la incomparecencia de los amparados a la audiencia resulta sumamente importante, ya que la misma nunca podría fundamentar el rechazo de una acción de hábeas corpus. Esto, porque tal como lo establece la Ley 23.098, *el beneficiario del hábeas corpus, cuando se encuentre arrestado, debe ir indispensablemente*. Según ha dicho el jurista Néstor P. Sagüés, “*Ello implica que,*

²¹ En la Causa N°16.139 del registro de la Secretaría 3 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora se resolvió en el punto V de la sentencia de grado “*Encomendar a la máxima autoridad de la unidad carcelaria, que deje formal constancia de la entrega de las cuatro comidas diarias –desayuno, almuerzo, merienda y cena– a los internos, entre las que deben estar incluidos lácteos; debiendo plasmarse aquellos casos en los cuales dichas comidas eran rechazadas por la población penal” (el resaltado me pertenece). Ello, en virtud de los dichos de un interno alojado en el Pabellón “F” del C.P.F. I, en el marco de la audiencia del artículo 15 de la Ley 23.098, que al ser preguntado acerca del desayuno y la merienda, refirió que no se los entregaban.*

aunque no quiera concurrir, deberá llevarse al acto, haciendo uso, en su caso, de la fuerza pública”²².

En tal sentido, y tal como fuera explicitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “...la acción de hábeas corpus exige el agotamiento de las diligencias necesarias para hacer efectiva su finalidad...”²³; razón por la cual en caso de negarse los internos a comparecer a la audiencia –lo que suele ocurrir con bastante frecuencia, por ser víctimas de amenazas por parte de los agentes del S.P.F.–, el juez debe encontrar la manera de obtener esos testimonios.

La importancia de las declaraciones de los internos surge del simple hecho de que sus dichos respecto a la mala calidad y cantidad de la alimentación fueron justamente los que motivaron la interposición de la acción de hábeas corpus. Por ello, la desestimación del hábeas corpus no puede fundarse únicamente en un informe confeccionado por el mismo Juzgado y la Secretaría de Ejecución, y por la presentación de un menú, del que no se constató que fuera efectivamente lo que se sirve a los internos. Y peor aún, sin siquiera merituar los testimonios de los internos que asistieron a la sede de Juzgado a prestar declaración.

Asimismo, a la ausencia de los amparados debe sumarse la incomparecencia del Defensor Oficial, motivada por la falta de notificación al Ministerio Público de la Defensa, por parte del juez, de la presentación del hábeas corpus.

A todo lo anteriormente expuesto, se suma la Nota 567/09 DB, suscripta por el Sr. Diego A. Baulde, a cargo del Departamento de Bromatología, Dirección de Salud Ambiental de la Provincia de Chubut, de donde surge la falta de certificación de la cocina de la Unidad N°6, según lo reglamenta el artículo 13 de la Ley 18.284, así como tampoco existe ningún trámite de inscripción y/o solicitud de inscripción para la certificación de establecimientos y/o productos alimenticios en esa jurisdicción.

Al respecto, como ya se indicó, esta Procuración Penitenciaria había efectuado la Recomendación N°721/PPN/10 de fecha 4 de junio de 2010, por la que se solicitó arbitrar los medios necesarios a fin de efectuar la inscripción y habilitación de la cocina de la cárcel. En virtud de ello, el S.P.F. acompañó la nota N°917/10/DNDSG, la que da cuenta de estarse “llevando la diligencia del trámite para la inscripción y habilitación de la cocina del Instituto”; de lo que se desprende que el trámite no ha sido iniciado, sino que sólo estaría en los “planes” del S.P.F. iniciarlos.

²² *Derecho Procesal Constitucional - Hábeas Corpus*, de Néstor Pedro Sagüés, Ed. Astrea, p. 457.

²³ CSJN, “Rivera Vaca, Marco Antonio y otro s/ hábeas corpus”, R. 860, 16/11/2009.

Así, las medidas dispuestas en los puntos 5 y 6 del fallo, tendientes a verificar las condiciones de higiene de la cocina, las condiciones de almacenamiento y la cantidad de raciones de comida que se le distribuyen a los internos allí alojados, no resultan medidas suficientes, y constituyen un remedio judicial que *no resulta efectivo* en los términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el punto 4 párrafo 2º de la sentencia recurrida, se sostuvo que “*las cuestiones referidas a la alimentación de las personas detenidas en la U.6 que fueron denunciadas por la PPN [...] sí justifican la actuación mancomunada de todos los poderes del Estado para el mejoramiento del estado de cosas*” y agrega “*la cuestión de la alimentación de los internos desde siempre fue una de las más controvertidas y cuestionadas dentro del esquema penitenciario de la nación. Y si bien en algunos casos se encuentran satisfechos los **requisitos mínimos de salubridad, cantidad y calidad en materia de alimentación** (tal como ocurre con el penal de Rawson), no por ello debe **eludirse el reclamo de la realidad** y renunciarse al propósito de ir perfeccionando el funcionamiento del sistema*” (el resaltado nos pertenece).

Si en virtud de los argumentos transcritos el magistrado entendió que resultaban necesarias medidas tendientes a verificar las condiciones de higiene de la cocina, las condiciones de almacenamiento y la cantidad de raciones de comida que se le distribuye, debe cuestionarse que las medidas adoptadas en su resolutorio resulten eficaces para la protección de los derechos humanos alegados en la acción de hábeas corpus. Así, una decisión que brinde una respuesta eficaz –o sea, que cumpla con su finalidad– hubiera ordenado las medidas tendientes a verificar las condiciones de higiene de la cocina, las condiciones de almacenamiento y la cantidad de raciones de comida que se le distribuye *con anterioridad al momento de la resolución*, y en el marco del proceso de hábeas corpus.

En suma, el juez de primera instancia no tuvo en consideración las medidas de prueba que corroboraban las irregularidades en la alimentación proporcionada a la población carcelaria. Muy por el contrario, su resolutorio se basó en elementos de prueba que en su mayoría son de fecha anterior a la presentación de inicio, que en ningún caso tendieron a acreditar la *efectiva* calidad y/o suficiencia de la alimentación suministrada a la población carcelaria y que difícilmente pueden desvirtuar los hechos denunciados por esta Procuración y las declaraciones de los internos de la Unidad 6.

Para finalizar, es importante dejar en claro que en la actualidad el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es judicializar el control carcelario, lo que

necesariamente nos lleva a concluir que la decisión del Juez de rechazar la acción sin haber investigado y fundamentado suficiente, omitiendo el testimonio de los damnificados, e incluso sin prever los mecanismos necesarios para que comparezcan a la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098, no resulta ajustado al precepto de agotar las diligencias necesarias para hacer efectiva la finalidad del hábeas corpus.

El 2 de marzo de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió “II) *REVOCAR la sentencia de fs. 249/258 en cuanto fuera materia de apelación y que rechaza la acción de hábeas corpus deducida a fs. 1/6 vta. por el Procurador Penitenciario de la Nación a favor de los detenidos alojados en el Instituto de Seguridad y Resocialización del Servicio Penitenciario Federal (U.6)...*”.

Respecto a la legitimación de la PPN, el tribunal de Alzada consideró que “*Sin dudas es que a efectos de cumplir su cometido debe estar facultado para utilizar las vías judiciales pertinentes entre las que justamente se encuentra la acción de hábeas corpus y la posibilidad de impugnar, cuanto más en un caso de una acción colectiva, la decisión que le resulte adversa*”.

Respecto a la tramitación de la acción, consideró que “*el magistrado tampoco ha sabido encauzar el procedimiento, observándose numerosas irregularidades en su tramitación*”.

4.6. Hábeas corpus interpuesto en favor de los internos alojados en el Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Devoto)

El 15 de diciembre de 2010 la Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso acción de hábeas corpus correctivo colectivo, por el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que afectaba a las personas alojadas en el Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En dicha acción se denunció que los presos alojados en el Módulo VI viven en condiciones de detención inhumanas, esto es, con falta de higiene, alimentación, espacio y ventilación, entre otros. Esta situación provoca un riesgo para la salud física y psíquica, lo que sumado a la ausencia de actividades, incrementa las posibilidades de que aumenten la violencia y los problemas de convivencia.

De la inspección que fuera realizada por agentes de la Procuración, se pudo constatar, entre otras cosas, que las ventanas que dan al exterior no presentan vidrios, los pabellones carecen de calefacción, no hay ventiladores o los mismos no funcionan,

no poseen suficiente iluminación, hay instalaciones eléctricas precarias con cables a la vista, no tienen duchas suficientes, el sistema de desagüe de los baños es deficiente, los sectores destinados al aseo personal no están higienizados, hay humedad en paredes y techos, el pasillo central de todos los pisos está inundado y hay pérdidas de gas en los artefactos de cocina que se encuentran en los pabellones.

Asimismo, y de los relatos de los presos, puede destacarse que los colchones que usan para dormir son de un mínimo grosor y se entregan ya usados, las cocinas funcionan mal, la alimentación es insuficiente, no se les entregan elementos de higiene personal, no se realizan actividades recreativas, laborales y educativas, hay insuficiente atención médica, los pabellones se inundan, no reciben información acerca de sus causas judiciales, el suministro de agua en canillas y duchas es deficiente.

Por otra parte, se denunció que la planta baja y los pisos 1 y 2 del módulo se caracterizan por la implementación de un régimen de encierro permanente en los pabellones colectivos. Ello significa que la reja de cada uno de los pabellones se encuentra cerrada durante las veinticuatro (24) horas, implicando un régimen de encierro absoluto. En la mayoría de los casos no se les permite realizar ninguna actividad fuera del pabellón, como ser trabajar, estudiar o concurrir a alguna actividad recreativa. La administración penitenciaria ha dispuesto únicamente una salida semanal al patio de treinta (30) minutos.

Ambas cuestiones, es decir, las malas condiciones materiales de alojamiento de los pabellones y el régimen de encierro que se aplica en el mismo, motivaron la presentación de la acción de hábeas corpus.

El día 15 de diciembre de 2010, el juez a cargo del Juzgado de Instrucción N°5, Dr. Manuel A. de Campos, resolvió “*I.- RECHAZAR la presente como acción de hábeas corpus y DECLARAR que proseguirá tramitando en los términos de la Ley 16.986. II.- REALIZAR una inspección ocular en el Módulo VI del Complejo Penitenciario de la CABA, en el marco de la cual se deberán obtener vistas fotográficas, filmación en video, realizar un plano del lugar y toda otra medida tendiente a establecer la forma en que los internos que lo habitan cumplen su detención [...]*”.

El 16 de diciembre la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió “*I.- REVOCAR la resolución de fs. 12/14, en cuanto se rechazó la acción de hábeas corpus interpuesta [...]. II.- DISPONER que el Sr. juez de grado prosiga con el trámite del asunto [...]*”.

El mismo día, el Secretario a cargo de la Secretaría 116 del Juzgado de Instrucción N°5, Dr. Daniel L. González, se constituyó en el Módulo VI del Complejo Penitenciario de la CABA, para proceder a realizar la inspección. De las declaraciones de los internos de los distintos pabellones, surgieron reclamos respecto a la poca posibilidad de salir al patio, las malas condiciones de los colchones, el mal funcionamiento de los baños, las luces, la cocina, el sistema eléctrico, etc.

El 7 de enero a las 13:30 hs., el juez resolvió “*I.- DESESTIMAR SIN COSTAS LA PRESENTE ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS, deducida a favor de los internos del módulo del Complejo Penitenciario de la CABA. II.- HACER SABER al Procurador Penitenciario de la Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación, y al Servicio Penitenciario Federal, la recomendación efectuada [...]”*”.

Recién el 11 de enero de 2011, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó resolución, en la que dispuso “*CONFIRMAR la resolución de fs. 63/67, en cuanto desestima la presente acción de hábeas corpus interpuesta por Francisco Miguel Mugnolo, sin costas*”. Posteriormente, la causa fue archivada por el Juzgado de primera instancia, sin notificar a esta Procuración Penitenciaria.

El día 2 de febrero, y luego de haber llegado a conocimiento de este Organismo la información que el expediente había sido resuelto y archivado, se presentó un escrito solicitando el desarchivo de las actuaciones y la extracción de copias.

Finalmente, y luego de haber comparecido en reiteradas oportunidades al juzgado, sin que se nos permitiera extraer copias del expediente, el 15 de febrero de 2011 presentamos un escrito solicitando nuevamente se nos permitiera fotocopiar la causa.

Ese mismo día, tuvimos acceso al expediente judicial y pudimos extraer fotocopias. De esta manera, nos notificamos espontáneamente de las decisiones judiciales adoptadas.

El primero de marzo de 2011 la Procuración Penitenciaria interpuso recurso de casación. Ello, en virtud de que la Cámara decidió homologar el decisorio del juez de primera instancia que le fuera elevado en consulta, destacando que se habían incorporado a la causa proyectos de mejoras integrales y que “*la petición formulada por Francisco Miguel Mugnolo se fundaría en las desavenencias padecidas con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal*”. En virtud de ello, decidió confirmar la resolución del juez de grado en cuanto desestimara la acción de hábeas

corpus interpuesta por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Sin embargo, este organismo consideró que las irregularidades en el trámite impreso a la causa privan de sustento a la resolución confirmatoria.

En efecto, el juez de primera instancia sostuvo que *“no considero que lo puesto en conocimiento del Tribunal por el Procurador Penitenciario constituya un agravamiento ilegítimo en la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad”*. Por tal motivo decidió *“desestimar sin costas la presente acción de hábeas corpus deducida a favor de los internos del módulo 6 del Complejo Penitenciario de la CABA”* y *“elear en consulta la presente al superior”*.

Sin embargo, luego que la Alzada revocara el auto que rechazara –en primer término– la acción de hábeas corpus, para asignarle el carácter de amparo, convalidando el pedido de informes a la autoridad requerida –Director del Complejo Penitenciario de la CABA, al S.P.F. y al Ministerio de Justicia de la Nación– y mandando a imprimir a la causa el trámite previsto por Ley 23.098, el Juez *a quo* no se encontraba habilitado a rechazar *in limine* la acción de hábeas corpus, pues ese requerimiento implicaba de por sí un “auto de hábeas corpus”, es decir, el acto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional requiere a la autoridad autora del presunto acto lesivo un informe sobre éste (art. 11, Ley 23.098). Por ello, el *a quo* no estaba facultado a *“retrotraer el procedimiento a la situación del art. 10 –momento procesal en que se analiza la procedencia de la acción– y obviar el trámite que había previsto el legislador en estos casos”*²⁴.

De esta manera, la Cámara convalidó un pronunciamiento que desvirtuó el procedimiento del hábeas corpus tornando inoperante esta garantía en el caso. Ello fue así porque se rechazó la denuncia en los términos de los arts. 3 y 10 de la ley de hábeas corpus una vez fenecida la etapa procesal oportuna y sin dar oportunidad de ser oídos y/o rebatir los informes del S.P.F. ni a la PPN ni a los amparados, como hubiese correspondido de haberse observado el procedimiento aplicable, cuyo carácter sumarísimo no puede ser empleado en perjuicio de la garantía de defensa en juicio del interesado.

Tal irregularidad ocasionó que la decisión del juez de grado se sustentara exclusivamente en los informes ofrecidos por la autoridad penitenciaria, sin dar posibilidad a la PPN –ni a los internos amparados– de hacerse oír y rebatir los dichos y

²⁴ CSJN, 29/05/07, H. 338. XLII; Fallos, 330:2429.

los informes aportados por la autoridad requerida.

Frente a una situación análoga la Cámara de Casación –Sala de FERIA– señaló, en *in re* “*Procurador Penitenciario de la Nación*”, que requerirle informes al S.P.F., entre otras medidas “*ya constitu[ye] un auto de hábeas corpus en los términos del artículo 11 de la ley pues importa [...] poner en marcha el proceso, de modo tal que no se [puede] retrotraer el procedimiento a la situación del artículo 10 (conf. CSJN, causa 338. XLII ‘Haro, Eduardo Mariano s/incidente de hábeas corpus correctivo’)*” (Voto de los jueces Mitchell, González Palazzo y Madueño).

El valor del citado precedente de la Cámara Nacional de Casación Penal radica en que dicho tribunal considera aplicable plenamente los alcances de la doctrina del fallo “*Haro*” –que se trataba de una acción individual– a los supuestos de hábeas corpus colectivos.

Otra consecuencia de esta irregularidad fue la omisión de citar a la audiencia prevista en el art. 14, según lo ordena el art. 13, Ley 23.098.

En “*Haro*”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó la relevancia de la audiencia como herramienta para hacer efectivo el derecho a ser oído de las partes y de los beneficiarios de acuerdo a las disposiciones de la Ley 23.098. La acción de hábeas corpus prevé una instancia contradictoria o bilateral, oral y en presencia del juez (inmediación). En la oportunidad de la audiencia oral es donde se puede controvertir la información que la autoridad denunciada presentó en la contestación de su informe y ofrecer una versión de los hechos ante el juez, en el marco de un proceso contradictorio.

La omisión de citar a la audiencia, privó al procedimiento de los beneficios –tanto a la PPN como a los amparados– del derecho a cuestionar el informe del S.P.F., de tener contacto con el juez y debatir el caso en función de un proceso contradictorio.

Nuevamente, cabe traer a colación lo resuelto por la CNCP –sala de feria– en “*Procurador Penitenciario de la Nación*”, donde frente a la misma irregularidad que aquí se evidencia, se destacó lo siguiente: “[A]nte la delicada situación puesta en conocimiento del Juez federal por el Procurador Penitenciario de la Nación en la denuncia de un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención de los amparados, se optó por una pronta desestimación en lugar de realizar la audiencia que se solicitaba”. [...] al ser la acción rechazada *in limine*, es decir, sin que los amparados sean llamados a intervenir, se truncó la posibilidad de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 13 de la ley 23.098, de modo que éstos no pudieron ejercer su derecho a ser oídos y llevados sin demora ante el juez, previsto en distintos

pactos internacionales sobre derechos humanos suscriptos por el Estado argentino. [...] Todos los defectos apuntados desnaturalizaron en grado tal el procedimiento, que han vuelto totalmente inoperante el instituto en cuestión. Ello es así porque al haberse seguido un procedimiento distinto al previsto por la ley, sin participación de ninguno de los interesados, se truncó el trámite sumarísimo del hábeas corpus”.

Por otra parte, el resolutorio de la Cámara de Apelaciones homologa la decisión del juez de grado, en donde se resuelve desestimar el hábeas corpus interpuesto por la PPN sin perjuicio de que fueran constatadas serias deficiencias en las condiciones de detención del colectivo amparado.

Así, el juez de primera instancia señaló: *“No considero que lo puesto en conocimiento del Tribunal por el Procurador Penitenciario constituya un agravamiento ilegítimo en la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad (art. 3° punto 2 de la ley 23.098), sino una **consecuencia de las precarias formas en que los internos cumplen su detención**”* (el destacado es nuestro).

Incluso, se preocupó en aclarar que *“para que se entienda claramente, **considero que las condiciones y forma en que las personas privadas de su libertad cumplen su detención suelen ser malas, y lo que se pone en conocimiento en esta acción es sólo una muestra de ello; pero creo que la función de quien la presenta es justamente buscar una mejora sustancial y de fondo a esta problemática, realizando sus reclamos a quienes tienen los medios para resolverlos, los poderes legislativos y ejecutivos, que son necargados de asignar el presupuesto destinado a la construcción de nuevas y mejores cárceles y/o de realizar obras necesarias para que las ya existentes sean habitables**”* (el resaltado nos pertenece).

En consecuencia, no obstante verificar como *“precaria”* la *“forma [...] en que los internos cumplen su detención”* y destacar que *“lo que se pone en conocimiento en esta acción”* es una muestra de las malas condiciones que habitualmente padecen los detenidos, se decidió rechazar la acción y atribuir la responsabilidad de la solución de estos problemas constatados a los restantes poderes del Estado: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, *“quienes tienen los medios para resolverlos”*.

De esta manera, se tornó inoperante la garantía de protección judicial que poseen todas aquellas personas –incluso quienes se encuentran privados de su libertad– cuyos derechos se encuentren amenazados o bien hayan sido conculcados. El derecho a reclamar a la Justicia el cese de todo acto lesivo, la reparación de los daños causados en consecuencia y la prevención de su reiteración futura surge de lo previsto en los arts. 18

y 43 de la Constitución Nacional, los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, en la resolución recurrida se deslinda responsabilidad con los restantes poderes del Estado a partir de una interpretación incorrecta de lo que significa el principio de división de poderes previsto en el art. 1º de la Carta Magna. Tamaño error desnaturaliza el control jurisdiccional de las condiciones de detención y desconoce –en consecuencia– la calidad de sujetos de derechos de las personas privadas de su libertad.

Si se verificaron las violaciones al derecho a condiciones dignas de detención – más allá de la lamentable naturalización de este problema que ensayan los magistrados intervinientes– la acción judicial promovida por la PPN no debía desestimarse, sino más bien todo lo contrario. Cuando menos, es indudable que el trámite del proceso debió haber continuado conforme los parámetros que establece la Ley 23.098. Tampoco correspondía atribuir toda la responsabilidad de estas irregularidades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Mucho menos se justificaba formular algún reproche a la PPN –como lo hizo el juez de instrucción– por monitorear y denunciar esas “*precarias condiciones de detención*”.

Las facultades atribuidas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y fundamentalmente a la Administración penitenciaria, respecto a las modalidades y condiciones en que se imponen y cumplen las medidas de coerción penal, sólo validan aquellas decisiones que se adecuan al programa legal. En cambio, dado el elevado valor de los bienes jurídicos tutelados, allí donde el ejercicio de tales facultades implica un acto ilegítimo en función de las características que el encierro debe tener, la ley asigna competencia al Poder Judicial en resguardo del derecho individual comprometido. No resulta de ello ninguna superposición de competencias: *el acto que cohonesta el alojamiento en condiciones inadmisibles no puede nunca reclamar su aplicación preferida frente a la del acto de control jurisdiccional.*

El art. 18 de la Constitución Nacional no deja margen de interpretación en cuanto a que son los jueces los responsables de impedir la violación del derecho a condiciones dignas de detención, resolver las situaciones particulares o estructurales que llegan a su estudio y fijar las pautas mínimas con la firmeza necesaria para llamar la atención de los demás poderes del estado a los que debe controlar. En este sentido, la Constitución Nacional es terminante “[...] *toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos [a las personas privadas de su libertad] más allá de lo que*

aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Por ello, resulta incontrovertible que entre las funciones de control de legalidad, previo a exigir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que dediquen recursos a la construcción de establecimientos, está la de no permitir y menos aún ordenar el alojamiento de personas en condiciones de detención indebidas (art. 18 CN). La Constitución Nacional indica, desde su redacción original, que los jueces son responsables por la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, en este caso esta obligación no ha sido debidamente asumida.

En el precedente “*Verbitsky*”, la Corte Suprema se pronunció específicamente sobre el alcance de la facultad de los magistrados de intervenir y delimitar aquellas políticas que vulneran derechos fundamentales, confirmando que este tipo de intervenciones resultan propias de sus obligaciones jurisdiccionales: “[...] *a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judicial, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias. Ambas materias se superponen parcialmente cuando una política es lesiva de derechos, por lo cual siempre se argumenta en contra de la jurisdicción, alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la política, cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judicial, en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona. Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad. No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas*” (el destacado es nuestro).

En efecto, el deber de garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad conlleva necesariamente cierto imperio sobre aquellas situaciones que resulten violatorias de tales derechos, pues la asignación de competencias a un órgano

jurisdiccional para que resuelva respecto de una serie de materias no puede tener ningún efecto útil si no se considera también que esa asignación importa, al menos, alguna facultad de disposición.

En casos como este, tomar adecuado conocimiento de la situación irregular y ordenar el cese de los actos u omisiones lesivos resultan potestades inmediatas al mandato de garantía y, por ello, puede afirmarse que el objeto primero de la decisión, frente a la verificación de una infracción, debe ser la modificación de las condiciones actuales de la detención para adecuarla a las prescripciones legales. Si tal modificación es inviable, no resultará posible evadir la discusión acerca de la legitimidad de la continuación del encierro, no obstante la validez del origen del título en virtud del cual se impuso oportunamente la medida de coerción sobre la persona afectada.

Sin embargo, como dijimos, no le corresponde al órgano jurisdiccional asumir directamente el diseño o implementación del programa que solucione el problema: la decisión judicial se limita a constatar la violación de derechos, y a exigir al Estado el desarrollo de medidas que hagan cesar la ilicitud. De esta manera, el Gobierno conserva amplias facultades para dar satisfacción a lo ordenado por el tribunal. El control de constitucionalidad funciona en estos casos como un diálogo entre los órganos del Estado, destinado a garantizar la supremacía de la Constitución sin perder de vista el alcance de las funciones y la diferente fuente de legitimación de los distintos poderes.

Lamentablemente, el resolutorio impugnado desarrolla una hermenéutica del principio republicano (art. 1, CN) que desvirtúa absolutamente el derecho a la tutela judicial efectiva, anulando virtualmente la protección jurisdiccional de un colectivo particularmente vulnerable, como es el caso de las personas privadas de su libertad, al deslindar –en forma sesgada– su responsabilidad frente a los otros poderes del Estado.

También debe hacerse mención al hecho de que el Juez haya rechazado la acción colectiva en función –además– del plan presentado por el S.P.F. para solucionar a futuro las deficiencias denunciadas. Aun cuando hipotéticamente se coincida con la posición del juez –homologada por la Alzada– de que *“en relación a las falencias edilicias, [...] el plan de obras presentado por el Servicio Penitenciario Federal, es la única solución de fondo a los problemas edilicios que presenta el módulo 6”*, esta Procuración entiende que una respuesta adecuada que tienda a garantizar la finalidad propia de la acción intentada –que es la cesación del acto lesivo y la evitación de su reiteración futura– debería haber sido hacer lugar a la acción de hábeas corpus, ordenar llevar a cabo el plan de obras sin dilaciones y fiscalizar su cumplimiento. En este sentido, el

hecho de que el S.P.F. presente planos y proyectos de obra con fecha de inicio, no puede resultar suficiente; *la situación denunciada se resuelve con el cese de la vulneración del derecho, no con la simple promesa de hacerlo a futuro.*

Si el magistrado entendió que resultaba necesario realizar obras de refacción, no puede dejar de cuestionarse que haya desestimado la acción de hábeas corpus y que no haya brindado una protección eficaz de los derechos humanos cuya violación fuera puesta de resalto en el escrito de la acción de hábeas corpus.

La Cámara de Apelaciones –y el juez de grado– verificaron la existencia de una vulneración del derecho a condiciones dignas de detención y, sin embargo, se desentendieron de la implementación de un remedio efectivo que diera una solución concreta al problema.

Haber considerado que el plan del S.P.F. era idóneo para solucionar el problema, pero a su vez resolver la desestimación de la acción, omitiendo ordenar las medidas tendientes a garantizar la ejecución efectiva del plan y supervisar su implementación, no se condice con el concepto de eficacia que propone la normativa internacional y la interpretación de los organismos internacionales. La decisión acorde hubiera sido hacer lugar a la acción –en caso de resultar idóneo–, ordenar la implementación del citado plan y realizar un seguimiento y fiscalización del desarrollo de esas obras, para que las mismas finalicen en tiempo y forma.

La perspectiva que postulamos resulta congruente con la doctrina de la Corte Suprema que consagra un estándar más robusto de protección judicial. En tal sentido, desde los fallos “*Verbitsky*” y “*Rivera Vaca, Marco Antonio y otro s/ hábeas corpus*”²⁵, la Corte exige a los tribunales un comportamiento homogéneo que lleve al máximo las posibilidades de la acción de hábeas corpus, lo que debe traducirse en una investigación, producción de pruebas y controles más exhaustivos.

El mandato de la Corte precisamente consiste en promover un control judicial más efectivo sobre la problemática de las condiciones de detención, aun cuando ello implique abordar problemas estructurales de la cárcel, en la medida que dichos problemas se traduzcan en vulneraciones de derechos de distintas magnitudes.

Sin dudas, este es el sentido que la Corte Suprema le imprimió a la actividad del Poder Judicial al sostener que “[r]econocer un derecho pero negarle un remedio apropiado equivale a desconocerlo”²⁶. El recurso pretoriano esbozado en “*Siri*”²⁷ y

²⁵ CSJN, “*Rivera Vaca, Marco Antonio y otro s/hábeas corpus*”, R. 860. XLIV; REX; 16-11-2009.

²⁶ CSJN, 9/04/2002, “*Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo*”, La Ley 2002/C, 377.

“Kot”²⁸ condujo hasta “Verbitsky” y “Rivera Vaca”, y marca hacia adelante un camino que no debería desandarse.

Avalar una interpretación sumamente restrictiva de las facultades jurisdiccionales, como lo hicieran la Cámara de Apelaciones y el juez de primera instancia en este caso, implica desandar el camino emprendido por la Corte en “Verbitsky” y “Rivera Vaca” y, en consecuencia, consagrar una magistratura indiferente a la sistemática violación de derechos de las personas privadas de libertad.

Finalmente, este organismo considera que la homologación del plan presentado por el S.P.F. resulta cuestionable tanto por razones procedimentales como sustantivas. Por un lado, en función del irregular trámite del hábeas corpus, se omitió darle oportunidad a la PPN para presentar sus observaciones al respecto. Por otro lado, consideramos que “*el proyecto de mejoras integrales*” presentado no resulta suficiente para resolver definitivamente las deficiencias que se constataron en este proceso, principalmente aquellas relacionadas con cantidad de horas que los internos se encuentran encerrados en su pabellón sin tener acceso a un patio.

En este sentido, en el expediente luce agregada una nota del S.P.F. de la que se desprende que a principios del año 2010 se solicitó un relevamiento estructural mediante un Plan Integral de Obra del Módulo de Residencia N°VI, “*debido a los deterioros existentes en las estructuras edilicias, solicitando de tal manera que se mejoren las condiciones ambientales e higiénicas de los distintos sectores de alojamiento*”. Asimismo, hace mención a un oficio enviado por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, en el cual se destacan las observaciones y recomendaciones efectuadas en ocasión a una visita al Complejo, realizada el 13 de noviembre de 2009.

De esta documental, aportada por el mismo S.P.F., puede constatarse que los problemas edilicios del módulo VI del Complejo datan de, por lo menos, más de un año. Por lo demás, son de público conocimiento los problemas estructurales endémicos que padece la Cárcel de Villa Devoto. Tal situación ha provocado innumerables intervenciones judiciales que procuraron, con suerte dispar, abordar este problema²⁹.

²⁷ Fallos 239:459.

²⁸ Fallos 241:291.

²⁹ Las pésimas condiciones de detención en las que se encontraban las personas privadas de su libertad en el Instituto de Detención de la Capital Federal –Unidad 2 S.P.F.– (actualmente Complejo Penitenciario Federal de la CABA) motivaron la presentación por parte de la PPN de una acción de hábeas corpus el 13 de abril de 2005, junto con el Defensor Oficial Dr. Sergio Paduczak, en representación de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de

Por otra parte, el entonces Director Nacional del S.P.F., Alejandro Marambio Avaria, manifestó que la situación del módulo había sido observada con anterioridad, y agregó que desde el 11 de enero de 2010 “*se están efectuando diversos trabajos en miras a una readecuación edilicia integral*”. De los dichos de los internos, y de lo observado tanto por la PPN, como por el mismo juzgado al momento de realizar la inspección, surge claramente que lo informado por el S.P.F. no se condice con la realidad.

En su resolutorio, el juez cita las notas presentadas por el S.P.F., en las que da cuenta de las obras que se realizarán en el módulo de residencia VI. En tal sentido, hay un Informe Técnico de refacción integral del módulo VI, donde informa que la fecha estimada de inicio de los trabajos es el 17 de enero de 2011, y los mismos demandarán 16 meses.

Finalmente, del “proyecto de mejoras integrales” presentado surge que las mismas se tratan únicamente de reformas, pero en ningún caso se refieren a ampliación de los patios y/o de los lugares destinados a recibir visitas, motivo por el cual no se estaría solucionando el grave problema de la falta de acceso al patio, y la excesiva cantidad de tiempo que los internos permanecen encerrados en sus celdas. Por este motivo, y por el pasado reciente, consideramos que no debería homologarse un plan que, entre otros problemas, no ofrece una solución a la ilegítima restricción de acceder al patio que padecen los internos del Módulo VI. Asimismo, resulta evidente que el magistrado interviniente no podría desentenderse del control de la ejecución de la obra, ya que quienes asumirán las consecuencias de las expectativas frustradas serán los internos y sus derechos fundamentales.

La Cámara de Apelaciones decidió confirmar el decisorio de primera instancia,

Instrucción N°25, Secretaría 161 (Causa 18.312/2005). En esa oportunidad, el juez que entendió en la causa resolvió hacer lugar a la acción de hábeas corpus e intimó al Ministerio de Justicia de la Nación a realizar un serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para hacer cesar las condiciones agravantes de los derechos humanos de los internos allí alojados. Asimismo, el 17 de octubre de 2008 la PPN presentó una nueva acción de hábeas corpus en favor de los internos alojados en el Módulo II Pabellones 5, 7 y 8 del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las deficiencias en las condiciones materiales de dichos pabellones. No obstante el juez interviniente resolvió rechazar la acción de hábeas corpus, decidió recomendar al Director del C.P.F. de la CABA a que arbitre los medios necesarios para garantizar que los internos gocen de condiciones de habitabilidad, higiene y salud acordes con los estándares mínimos. En fecha 4/02/2010 la PPN realizó una presentación en carácter de amicus curiae ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°28, en el marco de un hábeas corpus presentado por un detenido del C.P.F. de la CABA (Causa N°49.685/2009) a los fines de poner en manifiesto el régimen de encierro y falta de actividades laborales, educativas y recreativas a los que se sometía a los internos del Módulo V. Por último, en fecha 22/12/2009 la PPN realizó una presentación en carácter de amicus curiae ante el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°1 por las condiciones de alojamiento del Módulo VI del C.P.F. de la CABA y el régimen de encierro impuesto a los detenidos alojados en el primero y en el segundo piso de dicho módulo.

coincidiendo en “...desestimar la presente acción de hábeas corpus”. Para así decidir, conjeturó que “...la petición formulada por Francisco Miguel Mugnolo se fundaría en desavenencias padecidas con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal”. En igual sentido se aventuró a expedirse el juez de grado, quien sostuvo “si bien al promoverse la acción podía llegar a considerarse como válidos los reclamos efectuados por el Procurador Penitenciario; los elementos recogidos luego de la resolución de cámara del 16 de diciembre de 2010 [...] hacen que se considere que la presentación fue realizada **exclusivamente** por la falta de diálogo con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal” (el resaltado nos pertenece).

En este sentido, la afirmación del titular del Juzgado de Instrucción N°5 de que el objeto que motivó la promoción de la acción de hábeas corpus fue *exclusivamente* la falta de diálogo con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal, se contradice –en forma ostensible– con la prueba incorporada en el expediente. Todo ello redundaría en un menoscabo de la adecuada fundamentación exigible de los fallos judiciales y lesiona el derecho al debido proceso legal (art. 18 CN).

Por otra parte, para concluir que no mediaba agravamiento en las condiciones de detención de los detenidos alojados en Módulo VI del C.P.F. de la CABA, el *a quo* se basó en el descargo de la autoridad denunciada –esto es, el plan de obras presentado por el S.P.F.–. Así, el sentenciante omitió considerar los elementos probatorios que desvirtuaban aquellas alegaciones, como las manifestaciones de los internos que surgen del acta de inspección ocular y las tomas obtenidas en el módulo 6 del C.P.F. de la CABA. Si se hubiera reparado en las manifestaciones y las imágenes obrantes, no se podría haber concluido como lo hizo el juez en que no se encontraban agravadas las condiciones de detención de los internos allí alojados.

En este sentido, surge del acta de inspección ocular realizada por el Juzgado que en oportunidad de realizarse la inspección en la unidad carcelaria, los testimonios de los internos resultaban concordantes con los hechos denunciados por esta Procuración en su presentación de inicio. Así, algunos de los reclamos más trascendentes que *se repitieron* en forma concordante en varios de los pabellones fueron los siguientes: falta de ventiladores, inundación de varios pabellones, colchones en mal estado y con falta de espesor, mal funcionamiento de las cocinas instaladas –incluso, en varios pabellones se denunció que había pérdidas de gas–, instalaciones eléctricas precarias, falta de luz eléctrica suficiente, falta de artículos de limpieza y elementos de higiene, necesidad de reparación de duchas y baños, y por último, y con relación a la imposibilidad de salir al

patio, surge del acta que la queja que más se repitió “[...] *en todos los pabellones del módulo VI del Complejo Penitenciario de la CABA, fue la imposibilidad de estar más tiempo en el exterior*”.

Además, las imágenes captadas por personal dependiente de la División Video Operativo y de la División Fotografía de la Policía Federal, en oportunidad de celebrarse la inspección ocular ordenada, no hacen más que corroborar las irregularidades denunciadas por este Organismo. En primer lugar, con relación a las imágenes captadas en video, debe decirse que surgen deficiencias en las instalaciones eléctricas y cables expuestos. Asimismo, surge de las imágenes la falta de luz artificial, que se ve agravada por la insuficiente luz natural que ingresa a los pabellones. Así, los baños están completamente a oscuras. A su vez, se pueden constatar las condiciones antihigiénicas en las que se encuentran los pabellones (bolsas de gran tamaño llenas de residuos expuestos, pérdidas de agua, insectos y deplorables condiciones higiénicas, letrinas tapadas con agua sucia, etc.). También surge de las imágenes el mal estado de las cocinas –se encuentran visiblemente deterioradas–, la falta de ventilación en los pabellones, colchones en mal estado y con un mínimo grosor, paredes y techos con graves problemas de humedad, etc.

En relación a las fotografías que fueran tomadas por la División Fotografía de la Policía Federal Argentina, puede observarse, en términos generales, que todos los pabellones presentan problemas de humedad, falta de vidrios y cocinas en pésimo estado.

Frente a estas verificaciones es arbitrario considerar –como lo hace el Juzgado Criminal de Instrucción N°5– que la presentación de la acción de hábeas corpus por la PPN fue realizada “*exclusivamente[...] por la falta de diálogo con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal...*”. Sin dudas, tal afirmación no se corresponde con el cuadro de situación descrito en el acta de inspección ocular, ni con las imágenes que surgen de la filmación y de las fotos captadas por personal de la División Video Operativo y División Fotografía de la Policía Federal Argentina.

Asimismo, pudo constatarse que los detenidos permanecen encerrados en sus respectivos pabellones sin posibilidad de acceder al patio, “*gozan de un recreo en los patios los días viernes de 12:10 a 13:40*”. Esta circunstancia fue corroborada por los dichos de los internos en oportunidad de realizarse la inspección ocular, y reconocida también por el propio S.P.F. en una Nota agregada a la causa. En dicha nota, el S.P.F. informó que “*ningún pabellón tiene recreo en los patios de los módulos residenciales,*

ya que la población penal realiza fuera del sector de alojamiento en horario matutino, distintos tipos de actividades tanto recreativas como culturales...” (el destacado nos pertenece).

Con relación a la imposibilidad de acceder al patio, el juez convalidó el descargo del S.P.F., alegando que “*en relación al requerimiento efectuado respecto del tiempo de permanencia de los internos en los pabellones, sin posibilidad de salida al exterior; de la lectura de la nota de fs. 52 surge claramente la explicación al régimen en cuestión*”. En tal sentido, enfatizó que “*lo que motiva este horario restringido es simplemente la falta de posibilidades edilicias que brinda la Unidad*” (el destacado nos pertenece).

Frente a estas circunstancias, el juez de grado –con la homologación de la Cámara– señaló que ellas eran “*consecuencia de las precarias formas en que los internos cumplen su detención*”. Además agregó lo siguiente: “*para que se entienda claramente, considero que las condiciones y forma en que las personas privadas de su libertad cumplen su detención suelen ser malas, y lo que se pone en conocimiento en esta acción es sólo una muestra de ello*” (el destacado nos pertenece). Sin perjuicio de ello, el juez consideró que estas circunstancias no constituían “*un agravamiento ilegítimo en la forma y condiciones de detención en que se cumple la privación de la libertad (art. 3° punto 2 de la ley 23.098)*”.

En la resolución del 11 de enero de 2010, la Alzada entendió que la situación denunciada por la PPN no constituía un agravamiento de las condiciones de detención, razón por la cual confirmaron el rechazo *in limine* de la acción colectiva.

El resolutorio –así como también la decisión del juez de grado– vulnera el estándar legal de “trato digno en prisión”, al naturalizar las malas condiciones estructurales y el régimen de encierro de los habitantes del Módulo VI del Complejo Penitenciario de la CABA. Los hechos denunciados no sólo constituyen un agravamiento de las condiciones de detención sino que violan las obligaciones internacionales en la materia que el Estado argentino se comprometió a respetar. El encierro en estas condiciones resulta a todas luces ilegítimo y tal circunstancias no podría justificarse –como lo hacen la Cámara y el juez de grado– invocando deficiencias edilicias, carencias presupuestarias y/o cualquier otra situación de emergencia o excepción.

El 9 de marzo de 2011 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió “*CONCEDER el recurso de casación interpuesto por Francisco Miguel Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación [...]*”.

El 4 de mayo de 2011, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa N°13.717, caratulada “Mugnolo, Francisco Miguel s/ recurso de casación”, resolvió “**HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, SIN COSTAS, CASAR la resolución de fs. 69 y la de fs. 63/67 (ambas del principal), por ser su antecedente necesario, y en consecuencia remitir las actuaciones a su origen a fin de que se continúe con la tramitación de la acción de hábeas corpus con la intervención del Procurador Penitenciario Nacional conforme lo aquí establecido [...]**”.

Para así resolver, consideró que “*La resolución dictada por la Sala B de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, está lejos de satisfacer la letra y la finalidad de la acción de hábeas corpus*”. Asimismo, indicó “[...] **Tampoco el trámite impreso se adecua a la previsiones de la ley 23.098**”.

Por otro lado, se indicó que “*Estos errores condujeron a truncar la actuación judicial que el legislador ha previsto para velar por la protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad*”. Y concluyó “**Las irregularidades señaladas dan cuenta de la nulidad del procedimiento**” (el resaltado nos pertenece).

5. Consideraciones finales

Las observaciones efectuadas hasta aquí dan cuenta de diversas prácticas judiciales que se contradicen con la doctrina sentada por la Exma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de trámite de hábeas corpus³⁰, del mismo modo que es posible identificar en dichas prácticas decisiones judiciales contrarias a las disposiciones legales vigentes o interpretaciones de éstas sumamente cuestionables.

Entre esas prácticas –generalizadas y extendidas en más de una jurisdicción– se destaca la omisión de la audiencia prevista por el artículo 14 de la ley 23.098; así como la incomparecencia del Defensor Oficial cuando ésta se realiza y/o en la asistencia del amparo en diversos “actos previos” a aquella.

También consideramos cuestionable el criterio jurisprudencial según el cual, ante hechos de violencia sufridos por el amparado –en especial si éstos no fueron aislados sino que se enmarcan en una situación de violencia recurrente– no corresponde conferir a la “denuncia” el trámite de hábeas corpus, sino su “transformación” o

³⁰ Fundamentalmente en el precedente “Haro”, la Corte Suprema estableció pautas acerca del trámite de los procedimientos de hábeas corpus.

tratamiento como “denuncia”; habida cuenta la posible comisión de delitos de acción pública. En especial cuando esas decisiones se encuentran acompañadas por la afirmación –por cierto no fundamentada– de que esas situaciones de violencia no constituyen un agravamiento de las condiciones de detención y por ende no encuadran en los supuestos previstos por la ley 23.098.

Contra ese punto de vista, puede indicarse que entre los fundamentos que inspiraron esa ley se señalaba, durante los primeros tiempos de la actual democracia, que “...Allí (en el proyecto), *se enfatiza que el alcance de la garantía comprenda no sólo los casos de efectiva privación ilegítima de la libertad sino también la amenaza de sufrirla. Y además de estos casos, que ya estaban reconocidos por las leyes y la jurisprudencia, comprende aquellos otros en que siendo legítima la privación de libertad es ilegítima la forma en que se cumple, y la persona sometida a prisión sufre un agravamiento arbitrario de ella. El hábeas corpus servirá para evitar, en los casos concretos, cualquier forma de vejamen o tortura que vulnere la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional*”. Asimismo, se agrega que “*La reglamentación aquí disciplinada es, sin embargo, lo suficientemente amplia para corregir todo abuso de poder que ataque la libertad ambulatoria y los excesos en su ejecución*” (el resaltado nos pertenece).

En base a ello y conociendo los efectos que la violencia institucional provoca sobre la vida de las personas que la padecen durante su detención, consideramos que no puede desconocerse el hecho de que la tortura y los malos tratos agravan ilegítimamente las condiciones en que una persona cumple la detención; y que contraría el mandato de cárceles “para seguridad” de quienes se encuentran detenidos en ellas.

Es preciso, en consecuencia, advertir la presencia de dos dimensiones diferentes en este tipo de situaciones. Por un lado, el hábeas corpus –como acción cautelar urgente– tiende a remediar o hacer cesar una situación que resulta agravante de los derechos de la persona detenida; sin perjuicio del carácter delictuoso del acto u omisión que lo provoque y más allá de la identidad de sus autores. Por otro lado, cuando la evidencia sumariamente recogida en el marco de ese proceso cautelar permita suponer que se ha cometido un delito de acción pública, el juez debe disponer lo necesario para que se desarrolle una investigación que, con todas las garantías constitucionales, permita elucidar su existencia, sus circunstancias, sus autores y eventualmente la responsabilidad que les cabe.

Quienes desde la judicatura optan por una u otra alternativa, señalando que la

segunda excluye la primera, afirman que las pruebas y decisiones adoptadas en el marco del proceso cautelar pueden implicar un “prejuzgamiento” ante la segunda dimensión que hemos comentado. Lo cual resulta muy difícil de sostener en el plano de las abstracciones, pero parece encontrar un argumento en el modo en que se distribuyen los “turnos” entre los juzgados federales encargados de tramitar estas acciones en las jurisdicciones de Lomas de Zamora y Morón.

En efecto, el modo de distribuir las causas en ambas jurisdicciones federales determina que la instrucción de las causas criminales abiertas a raíz de hechos delictivos cuya existencia surge de un proceso de hábeas corpus normalmente recae en el mismo juzgado al que correspondió intervenir en la acción cautelar. De modo que, si bien resulta discutible la afirmación de que una sentencia favorable de hábeas corpus puede implicar un prejuzgamiento del juez llamado a instruir la investigación penal posterior, tampoco permite afirmar sin lugar a dudas lo contrario; en especial si se tiene en cuenta la posible afectación de garantías individuales.

Este criterio jurisprudencial no carece de consecuencias. A título de ejemplo puede señalarse que, de las catorce (14) causas iniciadas en la Jurisdicción Federal de Lomas de Zamora por esta Procuración Penitenciaria en el lapso que va de enero de 2009 a agosto de 2010, solamente se hizo lugar a la acción de hábeas corpus en dos (2) de ellas, y además sólo parcialmente.

En uno de dichos supuestos, la acción había sido entablada con motivo de la falta de asistencia médica suministrada a un interno; en el segundo supuesto, el motivo de interposición de la acción también fue la falta de asistencia médica y las pésimas condiciones de la celda en que habitaba. No obstante ello, no puede afirmarse que la materia relativa a la falta de asistencia médica a personas privadas de su libertad sea entendida de modo uniforme por los juzgados federales de Lomas de Zamora como problemática atendible por la vía de la acción de hábeas corpus.

Así, en el marco de la causa N°6998 del registro de la Secretaría 1 del Juzgado Federal N°1, se rechazó el hábeas corpus interpuesto por un interno alojado en el C.P.F. N°I, en el que se solicitaba la realización de estudios, en virtud de prescripciones médicas. En dicha oportunidad, *y no obstante rechazarse la acción, se exhortó al Director del Complejo a cumplir la realización del estudio médico prescripto*. Este tipo de decisión, consistente en rechazar la acción de hábeas corpus y, no obstante ello, en la parte resolutive de la sentencia *exhortar o requerir* a la autoridad que corresponda a fin de dar solución a la misma problemática que motivó la interposición de la acción, ha

sido identificada en otras resoluciones judiciales³¹.

Como se afirmara más arriba, ese tipo de proceder parece vinculado a la “actitud” o “perspectiva” presente en los operadores judiciales en oportunidad de proceder al tratamiento de las acciones de hábeas corpus. Dicha actitud, según lo que hemos podido comprender a partir de nuestra interacción con las agencias judiciales, incluye la percepción de que el grueso de los casos de hábeas corpus se refieren a situaciones de habitual o “sistemática” falta de respuesta por parte de las autoridades penitenciarias y los jueces de ejecución; a quienes normalmente correspondería dar respuesta a tales situaciones.

Asimismo, esa perspectiva de los operadores judiciales encargados del tratamiento de los hábeas corpus incluye la idea de que estas acciones constituyen –en manos de los presos– un mecanismo de presión, mediante el cual no se pretende realmente llegar a una sentencia de hábeas corpus, sino ejercer presión “sobre el sistema”, provocando que éste ofrezca la respuesta o solución que no se ha podido obtener por medio de los canales más “normales”.

En cualquier caso, parece evidente que una parte de la tarea de los juzgados de hábeas corpus consiste, efectivamente, en escuchar demandas irresueltas por otras agencias del Estado; a las cuales los detenidos –generalmente como último recurso– intentan presionar mediante los hábeas corpus.

Ese hecho efectivo confiere a muchos participantes de este sistema de control judicial de la detención una ocasión para afirmar con bastante acierto que los presos siempre buscan obtener alguna cosa mediante los hábeas corpus, negociando. Y que generalmente se trata de “bienes de entidad mucho menor y más concreta que el genérico cese de situaciones de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”. Según los testimonios que ha recogido este organismo para el presente informe, es cierto que los presos reclaman, a través del hábeas corpus, la atención de los organismos encargados “naturalmente” de su custodia y del control de ésta. Pero ello no implica que se trate de situaciones de escasa trascendencia o que “la vía elegida” por el detenido no sea la adecuada. La acción de hábeas corpus es muchas veces *la única vía* que tiene quien se encuentra privado de su libertad, incluso para hacer valer el derecho

³¹ Causa N°9696 del registro de la Secretaría 1 del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora. En la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098, el amparado desiste de la acción intentada y en la resolución que tiene por desistida la acción se requiere a la autoridad de la unidad a que suministre un colchón más nuevo.

más elemental³². Ya que así puede lograr que su reclamo sea atendido por la justicia; sea por el juez de instrucción que entiende en la acción sumarísima o por el juez de ejecución (o a “disposición” del cual cumple detención).

El efecto buscado en el “juez natural” se obtiene desde que éste recibe la noticia de que un preso “suyo” interpuso un hábeas corpus. Más allá de que esa noticia se materialice en una “certificación” efectuada telefónicamente por el juzgado de hábeas corpus, en una comunicación escrita mediante la cual se le hace saber las demandas del preso o incluso por canales menos formales. Lo anterior es cierto, además, también en “sede administrativa”. Es decir, cuando el reclamo del preso consiste en ser atendido por una autoridad de la unidad de detención, a la cual no puede acceder sino “negociando un hábeas”.

Por su parte, es preciso puntualizar que la extensión de las demandas de las personas privadas de su libertad que llegan a los jueces podría ser aún mayor si la totalidad de la población reclusa tuviera plena conciencia de sus derechos y del abismo enorme que separa a éstos de la realidad a la que se encuentran sometidos diariamente.

Ello, lejos de quitar razón a las demandas de los detenidos que actualmente acceden a este instituto legal, parece confirmarlas. Y quita razón a quienes pretenden un aligeramiento de la “sobrecarga” que significa la atención de los hábeas corpus de detenidos por parte de los juzgados federales afectados a esa tarea³³, por la vía de no tramitar estos procesos sino de modo muy “restrictivo”.

Como se dijo, el hábeas corpus funciona para el detenido como un mecanismo de presión mediante el cual revierte –al menos de modo muy parcial– su situación de inferioridad en las relaciones de poder que mantiene en el interior de la cárcel; obtiene atención, logra ser escuchado, etc. Todo lo cual, aun en el marco de un proceso muy restrictivo supone siempre un logro respecto de situaciones de opacidad y desatención completas. Y más allá de las represalias que puedan venir como consecuencia del hecho de “hacer un hábeas corpus contra el personal”, resulta evidente que ser “bajado a juzgado” implica para el detenido que lo logra, en sí mismo, una demostración de cierta capacidad de maniobra en el marco del sistema de detención en el que vive.

Bajo esa lógica, no resultaría absurdo imputar algunas de las deficiencias aquí

³² Iñaki Rivera describe la cárcel como un ámbito de “no derecho”, donde el principio de legalidad, los derechos fundamentales de los detenidos y las garantías judiciales pierden virtualidad; Rivera, Iñaki, *La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos*. Barcelona, Bosch, 1997.

³³ Esa situación de sobrecarga no se registra en el caso de los juzgados de instrucción de la Capital Federal, al menos por causa de los hábeas corpus.

reseñadas al “doble papel” que los jueces penales están llamados a cumplir. Por un lado, son los encargados de velar por condiciones dignas de detención; conforme el deber que les impone la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Y –al mismo tiempo– son responsables directos de haber enviado a prisión a los sujetos amparados por medio de este instituto o de mantenerlos allí mientras dure su proceso. En el segundo de los papeles mencionados, la opinión pública (o una parte muy notoria de ésta) parece exigir a los jueces “rigor con los delincuentes”. Lo cual tiene evidentes consecuencias en el modo de ejercer la función jurisdiccional.

Mientras las decisiones favorables a la restricción de la libertad carecen generalmente de consecuencias sobre el prestigio, la carrera y el “buen nombre” de los magistrados (aun cuando violen el más elemental sentido de justicia), las sentencias en el sentido contrario –incluso las que se ajustan plenamente a derecho– exponen a los jueces que las adopten a quedar como responsables de eventuales nuevos hechos cometidos por las personas cuya libertad hayan dispuesto (ya sea durante el proceso o por aplicación de alguno de los institutos que establecen el derecho de los condenados a libertades previas al cumplimiento de sus condenas). Mientras que, por efecto del carácter aún inquisitorial de nuestro régimen procesal penal vigente a nivel nacional, los juzgados penales son prácticamente obligados a “tomar partido” –junto a las fuerzas de seguridad– en la “lucha contra la delincuencia”. Lo cual provoca que en los hechos la misión principal y habitual de los jueces penales –esclarecer delitos y responsabilizar a los autores– resulte esporádicamente interrumpida por la tarea casi siempre marginal de administrar justicia *en* la detención.

En cualquier caso, el cuadro de situación apuntado, caracterizado por una extendida inobservancia de los deberes a cargo de los funcionarios encargados de la custodia de los detenidos, sería –según afirman muchos miembros del Poder Judicial– el que habría dado lugar a –o vendría a justificar– un criterio muy restrictivo en el juzgamiento de estas acciones.

Uno de los corolarios de esa afirmación sería que, en caso de existir un criterio más amplio, que confiera la razón a los presos más a menudo, además de afectar las “relaciones de poder en la propia cárcel” (cuestión que es tenida en cuenta por los jueces), haría que lloviesen acciones de hábeas corpus; debido a lo cual de todos modos las demandas se volverían imposibles de procesar para las agencias judiciales. A lo cual se agrega un “argumento ético” según el cual resulta indignante que aquellos funcionarios directamente obligados a ofrecer una solución no lo hagan; y de ese modo

obliguen a los otros (los juzgados de hábeas corpus) a “trabajar” por ellos.

Esos razonamientos, sin embargo, pueden ser discutidos desde distintos planos. Por un lado, la sobrecarga de trabajo no puede eximir a los jueces del estricto cumplimiento de los imperativos procedimentales, ya que éstos han sido impuestos en protección de garantías constitucionales demasiado importantes.

Además, si bien es cierto que la admisión de un hábeas corpus por parte de un juez puede provocar cierta imitación por parte de otros detenidos en igual situación. También lo es que resultaría esperable, mucho antes, alguna clase de reacción por parte de la autoridad penitenciaria *contra* la cual esa sentencia haya sido dictada. Lo cual puede coadyuvar –si el control judicial adquiere una profundidad y extensión suficientes– en verdaderos cambios de las rutinas institucionales causantes de agravios constitucionales; o al menos en su mutación en otras de carácter menos grave.

Los jueces tienen, efectivamente, la potestad de modificar realidades contrarias a derecho; en este acto las que imperan en el ámbito carcelario. Y para hacerlo, según creemos, el primer paso debiera ser seguir la doctrina del precedente “Haro” de la Corte Suprema, según el cual la celebración de la audiencia del artículo 14 de la Ley 23.098 resulta primordial para conceder al amparado la oportunidad de ser escuchado en el marco del proceso de hábeas corpus³⁴.

Resulta oportuno recordar la importancia de la celebración de esta audiencia, así como la comparecencia de la víctima y del Defensor, en la medida que el fin de esa audiencia es “...*hacer efectiva la intermediación del juez y las personas interesadas. Este método permite concentración y continuidad, previstas incluso para la prueba (artículo 15) y el pronunciamiento de la decisión (artículos 17 y 19), características generales que logran la celeridad reclamada por el amparo*”. Asimismo, agregó que “*se prevé como necesaria la audiencia de todos los posibles interesados en el reclamo, la oportunidad de producir prueba y discutir sobre su mérito*”³⁵.

De esta manera, la audiencia sirve como oportunidad para dar intervención a todos aquellos que tienen interés en el procedimiento: la autoridad requerida, en cuanto causante de un acto denunciado como lesivo y para que defienda la legitimidad de su

³⁴ Surge de los considerandos del fallo de la Corte: “*Debe admitirse el recurso extraordinario y dejarse sin efecto la sentencia que rechazó el hábeas corpus correctivo sin darle al amparado la oportunidad de ser oído y luego de haberse solicitado informes al establecimiento penitenciario, pues luego de ello había precluido la etapa procesal oportuna para desestimar la denuncia*”.

³⁵ De la expresión de motivos del autor del proyecto de ley de hábeas corpus, Dr. Fernando De la Rúa.

acción u omisión; el amparado, en su carácter de titular del derecho que se afirma lesionado; el ministerio público en su función de control de legalidad, y el denunciante, para que se sostenga su afirmación inicial, ya que el derecho a la libertad ambulatoria es de interés público.

En tal sentido, el artículo 21 de la Ley de Procedimiento de Hábeas Corpus establece que “*Presentada la denuncia se notificará al Ministerio Público por escrito u oralmente, dejando en este caso constancia en acta, quien tendrá en el procedimiento todos los derechos otorgados a los demás intervinientes...*”. De la exposición de motivos de la Ley 23.098 surge también que se prevé la asistencia técnica de todos los que intervienen en el procedimiento. Y para el amparado reitera la necesidad de que sea efectivamente defendido cuando carezca del conocimiento jurídico necesario para ello.

De los casos en análisis puede apreciarse que es ínfimo el porcentaje de las causas en que el Defensor comparece a la audiencia para prestar debida asistencia técnica al amparado, así como que es insignificante el porcentaje de las víctimas que posee el conocimiento jurídico necesario para representarse ellas mismas. En tal sentido, debe recalcarse que del relevamiento de las causas se desprende que constituye una práctica reiterada en la jurisdicción de la Capital Federal la falta de notificación de la presentación de acciones de hábeas corpus a quienes son parte interviniente (Defensor Oficial y Fiscal).

Como se advierte, cualesquiera fueran las condiciones o el contexto en el marco del cual se abren los expedientes de hábeas corpus, durante su trámite se registran formas de organizar el proceso que no cumplen la totalidad de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia han venido exigiendo.

Lo cual resulta cierto también en el caso de la intervención de las Cámaras de Apelaciones en oportunidad de ejercer su jurisdicción en los casos de hábeas corpus que reciben “en consulta”.

La doctrina y la jurisprudencia han dicho que la motivación sólo aparente, constituida por una serie de “frases insignificantes” (como resulta la mera afirmación del tribunal de Alzada de que la sentencia se halla ajustada a derecho y a la constancia de la causa), vale tanto como falta de motivación, desde que no justifica el fallo y, por ende, no satisface el mandato de la ley.

La falta de motivación importa el incumplimiento del imperativo establecido por

el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación³⁶. O al menos así lo ha entendido la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal.

En este sentido se ha expresado la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, al afirmar que “[...] *Los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir de uno modo determinado, cumpliendo así con un principio republicano. Eso se establece por el art. 123 y 236 CPPN, comportando una garantía para el imputado y para el Estado asegurando la recta administración de justicia. Ello ocurre cuando se asientan todos los argumentos en el decisorio. Si bien ello no ocurriría cuando mediara una remisión genérica a constancias de autos ni cuando la referencia fuera vaga o inexacta, se conceptúa que se cumple cuando el pronunciamiento se remite clara, precisa y concretamente a constancias de determinadas piezas de la causa que resultan suficientes indubitables para acordar el debido sustento*”³⁷.

No hay razón para que dicha jurisprudencia no se aplique a las resoluciones del tribunal de Alzada cuando las actuaciones le son elevadas en consulta, en el marco de una causa de hábeas corpus. La elevación de las actuaciones a la Cámara en consulta, en aquellos supuestos en que se resuelva el rechazo de la acción, denota la intención del legislador de asegurar una segunda instancia de revisión cuando no se da curso a esta acción; en la medida que su objeto es el amparo de derechos de raigambre constitucional y que tiende a la eficaz e inmediata cesación del acto lesivo.

En tal sentido, una resolución de la Alzada que se limita a confirmar la sentencia de primera instancia sin motivar suficientemente esa decisión, y sin siquiera remitirse a los fundamentos dados por el juez de instrucción, resultaría arbitraria. Y más lo será, aún, si el procedimiento seguido en primera instancia presenta defectos de tal magnitud que justificarían la descalificación de la sentencia.

Es decir, creemos que la instancia de revisión establecida por el art. 10 de la ley de hábeas corpus, lejos de imponer a la Alzada un deber formal o accesorio, implica para ésta la obligación –como mínimo– de velar por el estricto cumplimiento de las formalidades necesarias para tener por debidamente sustanciada la acción. Y, al mismo tiempo, asegurar que el amparado reciba una tutela judicial efectiva para sus derechos;

³⁶ Código Procesal Penal de la Nación, artículo 123: Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.

³⁷ Sala III, “Tellos, Eduardo A. s/ rec. de casación”, reg. 99, Causa 65, rta. el 24/3/1994, voto del Dr. Righi.

independientemente de las formalidades y los “ámbitos de actuación” implicados, siempre que se compruebe que existe una violación de sus garantías constitucionales.

Al respecto, cabe señalar que en aquellos casos en que la situación agravante proviene de un acto u omisión de otra autoridad pública –que no ha actuado en tiempo y forma resolviendo una incidencia procesal, suministrando una prestación médica, expidiendo un informe, etc.–, tanto la alzada como los juzgados de primera instancia se inclinan habitualmente por el rechazo de la acción de hábeas corpus; en el mejor de los casos “instando” a la institución de la que proviene la conducta agravante para que haga lo necesario por atender la demanda del amparado.

Un ejemplo de ese tipo de situaciones lo constituye aquel caso en que un detenido solicitaba volver al Hospital Argerich, en donde había estado internado y de donde había sido luego trasladado de regreso al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; según el interesado en perjuicio de su salud. En ese caso, el juez rechazó la acción de hábeas corpus, pero dispuso el reingreso del interno al Hospital Penitenciario Central, habida cuenta que se comprobó a lo largo del trámite que la decisión de alojarlo en una unidad penitenciaria común afectaba negativamente su salud.

Otro caso similar fue el de un interno que solicita su libertad, ya que se encontraba detenido con un sobreseimiento firme en sede penal, a cargo de un juzgado civil que debía disponer –o no– su internación en un establecimiento destinado a tratar su adicción a las drogas. En este caso, el juez rechazó la acción intentada, pero ofició a la jueza civil solicitándole imprimiera mayor celeridad al trámite de designación del lugar en que sería internado el amparado.

En nuestra opinión, aquellos casos en que la afectación de derechos deriva del ejercicio irregular de un deber público por parte de una institución estatal de la que el detenido espera una respuesta en tiempo y forma, lejos de corresponder el rechazo de la acción, debería optarse por su tramitación a través de los cauces de un tipo específico de hábeas corpus: el “*hábeas corpus de pronto despacho*”; que bien podría prosperar en situaciones en donde se comprueba la demora del órgano requerido (aunque también en otros análogos).

En los autos “*Lonaiz, Jorge M.*” consta que el interesado había iniciado con anterioridad el trámite de libertad condicional, sin obtener que la Dirección Nacional del S.P.F. se expidiera según las normas vigentes sobre la libertad solicitada. Transcurridos dos meses de espera, y ante el silencio de la repartición aludida, se articuló un hábeas

corpus. Luego de los trámites de rigor, el tribunal fijó diez días para que aquel S.P.F. remitiera la información requerida. Si bien el magistrado expuso el encuadramiento jurídico de la acción instaurada –si debía tramitar según las reglas de la acción de hábeas corpus o por las que regulan el amparo por mora– no definió su postura y señaló con singular sensatez “que la discusión era bizantina y sin practicidad”, siendo lo verdaderamente relevante adoptar una decisión que hiciese cesar el estado de cosas que derivaba en el agravio constitucional objeto de la acción (en aquel caso, la falta de cumplimiento –en tiempo– por parte de la administración del deber de expedir un informe).

Al comentar ese fallo el Dr. Sagüés concluye que “*comprobada la demora en la faz administrativa, correspondía entonces reparar el agravio causado, y resolver lo pertinente, amparando la petición presentada*”. Entendemos que igual criterio debería adoptarse cuando la demora u omisión deviene del órgano judicial y no del administrativo; máxime en aquellos casos en que el detenido ha intentado por las vías a su alcance –que como se expuso, no suelen ser demasiado amplias ni fáciles de transitar– que el órgano judicial encargado de su trámite se expida en plazo legal o razonable.

Una discusión análoga a la descrita se ha verificado en varios casos de hábeas corpus correctivo colectivo mediante los cuales la Procuración Penitenciaria ha intentado remediar la situación de grave deficiencia en la provisión de alimentos a los presos en algunas de las unidades penitenciarias federales más importantes del país.

La Constitución Nacional, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, entre otras normas, permiten trazar un cuadro de obligaciones a cargo del Estado ante las personas a las que mantiene detenidas, que indudablemente incluye el deber de proveerles una alimentación adecuada.

La violación de esos deberes por parte de las autoridades –independientemente de las razones que puedan alegar alternativamente los funcionarios para excusarse personalmente por esa situación– indudablemente derivan en situaciones de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Lo cual es cierto incluso en los casos en que las deficiencias en la alimentación provista por las agencias penitenciarias es paliada (total o parcialmente) por los propios presos y sus familiares; a través de la

compra de alimentos básicos por medio del sistema de “cantina” o ingresándolos a las unidades de detención en ocasión de las visitas.

Sin perjuicio de ello, la administración penitenciaria ha litigado activamente con el objetivo de mantener la provisión de alimentos fuera del ámbito de conocimiento de los jueces.

Así ocurrió, por ejemplo, en la causa N°16.139 del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, en que la sentencia hizo lugar al hábeas corpus, requiriendo al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que el reparto de las distintas porciones y la entrega final de los alimentos a los internos [...] sea supervisado por personal del Servicio Penitenciario (punto II), ordenando a esa unidad que se deje debida constancia del proceso de degustación o probado de los alimentos, que según alegó el propio S.P.F. efectúan los médicos de guardia, nutricionista y personal de ese Servicio (punto III); exhortando a la Dirección Nacional del S.P.F. para que arbitre los medios necesarios para resolver el hecho de que existía una sola nutricionista para atender las necesidades de todo el C.P.F. I; habida cuenta que entre las tareas de esa profesional se encontraba, según afirmó la administración, el control de la calidad de los alimentos que recibía la población reclusa (punto IV); encomendando a las máximas autoridades del Complejo que dejen debida constancia de la recepción de cuatro comidas diarias por parte de los detenidos (punto V); y ordenando a la Dirección Nacional del S.P.F. que haga lo pertinente para que se regularice la provisión de alimentos por parte de las empresas contratadas a tales fines (punto VI).

Ante esa decisión el S.P.F. interpuso recurso de apelación; pidiendo la revocación de la sentencia y alegando –entre otras cosas– que el procedimiento excepcional del hábeas corpus debe mantenerse reservado para mortificaciones muy específicas y deliberadas tendientes a coartar la libertad moral de los presos. Es decir, el S.P.F. ha sido celoso en la custodia de una “esfera” de decisión que alega como propia y señalando que el hábeas corpus no es la vía idónea para cuestionar supuestas falencias en el modo en que se desarrollan sus actividades. Y ha señalado, a la vez, que la comprobación de esas falencias no puede tener otro cauce que el de la denuncia de las supuestas irregularidades, con el fin de deslindar responsabilidades; hecho que señala como inequívocamente previo a la búsqueda de una reparación a través del hábeas corpus.

Esa postura del S.P.F., sostenida por sus abogados a lo largo de 2010 en diversos procesos judiciales, tiene dos corolarios evidentes. Por un lado, que debería existir una

suerte de “condena previa”, que funcionaría como pre-requisito para la admisión de una acción de hábeas corpus correctivo. Y, en segundo lugar, que toda pretensión correctiva tendría por finalidad “forzar una sanción” al S.P.F.

Como se advierte, esa tesitura mantiene cierta conexión con el criterio jurisprudencial ya comentado, según el cual las graves violaciones a los derechos humanos derivadas de situaciones de violencia y coacción sistemática, en lugar de ser atendidas mediante acciones de hábeas corpus debieran seguir exclusivamente el curso propio de una investigación criminal. Lo cual permitiría completar –siquiera en parte– la perspectiva de las agencias judiciales al tratar este tipo de casos; reconociendo que toda decisión que suponga admitir la existencia de una situación agravante de derechos es vista por el S.P.F. como una “sanción” o una amenaza de tal; e incluso como una afectación al “buen nombre” de la institución.

Durante el año 2010, la PPN interpuso una acción de hábeas corpus a favor de una persona detenida en el Anexo de la Unidad 20, sito en el C.P.F. I. Realizada la audiencia respectiva, el 24 de septiembre de 2010, se hizo lugar al hábeas corpus; resolviendo mantener el resguardo de integridad física, ordenando que dos agentes penitenciarios fueran apartados de todo tipo de actividades dentro del “Anexo 20” y formando una causa por separado a los efectos de investigar la comisión de un delito de acción pública. Ante esa resolución el S.P.F. interpuso recurso de apelación, que fue rechazado. Por eso interpuso recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La queja fue concedida y la cámara confirmó la sentencia de primera instancia. Seguidamente el S.P.F. interpuso recurso de casación.

En este último –que fue en definitiva tratado y desestimado por la Sala III de la Cámara de Casación– la abogada apoderada del S.P.F. afirmó que “*la sentencia en crisis mancilla el buen nombre y honor de la Institución que represento*”, que la representante de la Procuración Penitenciaria en la audiencia de hábeas corpus actuó guiada por una “*clara enemistad con el Servicio Penitenciario Federal*”, que “*(t)odo ha sido una puesta en escena, a partir de la denuncia del Procurador [...] con un solo propósito de atacar a personas de buen nombre y honor*”. A ello agrega que el juez de primera instancia “*se limitó a dar curso a la denuncia de la Procuración Penitenciaria, que no tiene entidad para llevar al Órgano Jurisdiccional a resolver como lo ha hecho S.S. Queda claro que la recurrida es una sentencia por simpatía, decretada simplemente por ubicarse el Decisor del lado del que considera “más débil” –sea desde*

la óptica sociológica o ideológica–. Pero esa simpatía no basta para fundamentar una sentencia judicial” (el destacado corresponde al original).

Esa tesis estuvo acompañada, en aquel recurso de casación, por la total negación de la existencia de situaciones de violencia reiterada que tengan a los presos por víctimas y a los agentes penitenciarios como autores. Es decir, se negó el uso sistemático de la violencia y la presencia continua de ésta en la vida de los presos.

Esas manifestaciones (que deben atribuirse al S.P.F. como institución ya que han sido vertidas en muchos otros ámbitos) evidentemente tuvieron por finalidad mantener acotado “el ámbito” decisorio de los hábeas corpus; evitando su aplicación a situaciones de violencia reiterada contra los detenidos.

Como puede advertirse a partir de lo ya expuesto, ese objetivo ha sido parcialmente logrado por el S.P.F. Ya que han sido numerosos los casos en que los jueces han optado por “transformar en denuncia” las acciones de hábeas corpus deducidas a raíz de hechos de tortura.

Ante ello, la opinión de este organismo es que los jueces puestos en la mencionada disyuntiva (“hábeas corpus o denuncia”) debieran optar por tramitar hasta su agotamiento las acciones de hábeas corpus, bregando por la protección expedita y rápida de los derechos que se vean conculcados; y en todo caso, *a posteriori*, excusarse de intervenir en la investigación criminal posterior, poniendo esa decisión en manos de la Cámara de Apelaciones a través de los mecanismos previstos a ese efecto.

Si bien esa “solución” no ha sido adoptada hasta ahora por los magistrados ante los casos de violencia e intimidación sistemáticos, resulta innegable que –desde mediados de 2010– se ha experimentado un cambio positivo en el modo en que los jueces federales de Morón y Lomas de Zamora han tramitado los hábeas corpus.

Esos cambios no han tenido la extensión y profundidad que este organismo considera necesarios, pero es obvio que se ha registrado un punto de inflexión respecto de rutinas y tradiciones institucionales de larga data.

Para comprender la naturaleza de ese cambio, es preciso tener en cuenta que estos procesos judiciales constituyen, como ocurre con todo pleito sometido a los tribunales, un modo –singular– de tramitar y eventualmente resolver conflictos humanos.

La singularidad de ese ámbito para la tramitación de conflictos deviene de la existencia de reglas procedimentales fijadas en garantía del derecho de defensa en juicio

y del papel preponderante atribuido a los jueces, como intérpretes y aplicadores del derecho.

En esa clave, es posible afirmar que el modo de tramitar los conflictos y de aplicar el derecho puede experimentar cambios a lo largo del tiempo; incluso con los mismos jueces y las mismas normas jurídicas; siempre que cambien las relaciones de poder entre las “partes”.

Y dado que “el que está ausente nunca tiene razón”, resulta indudable que los esfuerzos realizados por este organismo para garantizar la presencia de los amparados, de la defensa pública y de los propios abogados de la PPN en las diversas instancias (fundamentalmente en las audiencias), ha servido para compensar –y en muchos casos superar– la frenética actividad desarrollada por los abogados del S.P.F. en procura del rechazo de toda acción de hábeas corpus, independientemente del derecho que asista al amparado.

Las Cámaras Federales de La Plata y San Martín, así como la Cámara Nacional de Casación Penal, han dictado sentencias de gran utilidad para la producción de los cambios que venimos mencionando.

Ese hecho demuestra, por un lado, que las posiciones que este organismo venía sosteniendo en materia de hábeas corpus –incluyendo su propia legitimación para litigar como “parte”– se encontraban en línea con la mejor doctrina y jurisprudencia. Y, a la vez, la receptividad de los juzgados de primera instancia ante la doctrina sentada por los tribunales superiores.

En el caso de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (y de los juzgados de menores que completan el conjunto de tribunales encargados de tramitar los hábeas corpus en ese territorio), no se ha observado un cambio de la misma entidad.

Ello se debe, por un lado, a la dispersión de la tarea en cuestión entre muchos órganos judiciales. A diferencia de lo que ocurre en las jurisdicciones federales de Morón y Lomas de Zamora, la intervención muy esporádica de los juzgados de esta Ciudad de Buenos Aires minimiza las posibilidades de que se registre un “aprendizaje” y consiguiente cambio en las prácticas.

A la vez, la continuidad de muchas prácticas judiciales cuestionables se ha debido a la escasa eficacia de la instancia de revisión “en consulta” para imponer a los jueces de primera instancia un modo diferente de tramitar estas acciones.

En cualquier caso, la consolidación de los cambios positivos a los que nos

referimos y la búsqueda de otros que aún se encuentran pendientes no puede ser sólo un “producto agregado” del resultado de diversos procesos judiciales aislados; sino que debe incluir una interacción institucional deliberada de los actores implicados, con el objetivo de exponer sus puntos de vista sobre situaciones generales y encontrar formas cooperativas de actuación que apunten a lograr mejores resultados del sistema de control judicial de la detención; garantía indispensable de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

La descripción y crítica de las prácticas relevadas, así como la exposición de algunos casos judiciales que aquí se ha ensayado, tiene por finalidad principal llamar la atención de las instituciones y los profesionales involucrados en la cuestión; invitándolos a participar en una reflexión colectiva en el marco de la cual puedan encontrarse puntos de acuerdo y cooperar en pos de mejores resultados colectivos.

Debe insistirse, sin embargo, en que a lo largo de 2011 esta Procuración –en alianza con otras instituciones interesadas en la materia– llevará adelante un proceso de recolección de datos y de análisis adicional al ya efectuado, con el objetivo de corroborar la subsistencia de las prácticas y criterios jurisprudenciales señalados en este informe. Y, en caso de advertir novedades o comprobarse diferencias de interés respecto de la evidencia reunida hasta ahora, formular las aclaraciones y rectificaciones que sean pertinentes.